PARTE II:

ÁREA DE DDR

Frédéric Massé, Coordinador

Equipo:

Enzo Nussio, Consultor
Víctor Negrete B., Consultor
Juan Esteban Ugarriza, Consultor

Presencia de desmovilizados e inseguridad en las ciudades. Casos de estudio: Villavicencio, Montería y Bogotá

Contenido

I. Introducción

1. Metodología
2. Limitaciones de la investigación
3. Estructura del informe

II. Estudios de casos

1. Villavicencio
   1.1 Contexto de inseguridad
   1.2 Población desmovilizada
   1.3 Participación de desmovilizados en delitos
   1.4 Tipo de delitos cometidos
   1.5 Motivos de reincidencia
   1.6 Conclusiones

2. Montería
   2.1 Contexto de inseguridad
   2.2 Población desmovilizada
   2.3 Participación de desmovilizados en delitos
   2.4 Tipo de delitos cometidos
   2.5 Motivos de reincidencia
   2.6 Conclusiones

3. Bogotá
   3.1 Contexto de inseguridad
   3.2 Población desmovilizada
   3.3 Participación de desmovilizados en delitos
   3.4 Tipo de delitos cometidos
   3.5 Motivos de reincidencia
   3.6 Conclusiones

III. Resultados, Tendencias, Diferencias

IV. Balance sobre la presencia de desmovilizados e inseguridad en Villavicencio, Montería y Bogotá

I. Introducción

En los últimos dos años, las cifras sobre la reincidencia de desmovilizados en actividades ilegales o delincuenciales han generado mucha polémica en Colombia. En octubre de 2009, el entonces Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, aseguraba que sólo el 7,2% de los desmovilizados habían reincidido en la ilegalidad.[1] Algunos meses después, en abril de 2010, el Alto Consejero reiteraba ante la Comisión Primera del Senado que la reincidencia de desmovilizados "en delitos de impacto" era inferior al 10% del total de participantes.[2]

A finales del año de 2010, el segundo informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sobre reintegración en Colombia calculaba que, a octubre de 2008, unos 8.100 desmovilizados, alrededor del 15,5% del total, habían reincidido en actividades ilegales. Por su lado, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dijin) estimaba que 6.187 desmovilizados habían sido capturados entre 2003 y marzo de 2010, lo que correspondía al 11,72% del total de desmovilizados.

Sin embargo, hasta noviembre de 2010, el Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación sólo había verificado que el 6,4% de los capturados, dados de baja o con orden de captura por pertenecer a bandas criminales eran desmovilizados ex paramilitares.[3]

Ahora bien, el problema no sólo es que no haya consenso sobre las cifras, sino que existe también una diferencia entre esas cifras y la percepción de esa realidad por parte de la población.

Según varias encuestas (DATEXCO, IPSOS, Cámara de Comercio de Bogotá), existiría una percepción entre ciudadanía y autoridades locales de que, tras los procesos de desarme iniciados en 2003 por grupos paramilitares, los desmovilizados son causa del aumento de la inseguridad en las ciudades colombianas desde entonces hasta la actualidad.[4] No obstante, según la Oficina del Alto Consejero para la Reintegración, la tasa de reincidencia de los ex combatientes que participan en el programa de reintegración sería mucho más baja que la tasa de reincidencia de los presos que registra el INPEC.[5]

Ante la falta de estudios rigurosos que lo confirmen o lo refuten, el Área de DDR del Observatorio ha querido contribuir al debate, al cuestionar y analizar, a partir de tres casos concretos, si existe una relación, al menos aparente, entre la presencia de desmovilizados y la evolución de los índices y percepción de inseguridad en esos tres casos concretos.

La hipótesis de la que se parte y la problemática general del informe no son fortuitos. Estudios sobre procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en diferentes países, señalan que existe una relación entre la presencia de desmovilizados y el aumento de los niveles de violencia e inseguridad en el período de post-conflicto.[6] Ahora bien, la naturaleza de dicha relación no se conoce en profundidad. Aunque no se ha demostrado que existe una relación causal entre ambos fenómenos, trabajos exploratorios sobre DDR en Colombia y otros países advierten de la existencia de factores sistémicos/contextuales, sectoriales e individuales, favorecen la reincidencia de los desmovilizados en la ilegalidad y/o los exponen a riesgos de seguridad.[7]

---

[1] Alta Consejería para la Reintegración 2009, "Reincidencia de desmovilizados es del 7.2%: Frank Pearl", Noticias de la Alta Consejería para la Reintegración, disponible en http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Paginas/091012.aspx (última fecha de consulta: 19.12.2010).

[2] Alta Consejería para la Reintegración 2010, "Los desmovilizados no son una amenaza para las grandes ciudades", Noticias de la Alta Consejería para la Reintegración, disponible en http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Paginas/100427.aspx (última fecha de consulta: (19.12.2010).

[3] Entrevista CITpax en Bogotá, octubre de 2010.

[4] En el caso de Bogotá, tales percepciones han sido manifestadas públicamente por funcionarios del gobierno local como Andrés Restrepo, subsecretario de Seguridad y Convivencia en 2009, y por ciudadanos consultados por sondeos de Indepaz y la Cámara de Comercio.

[5] Revista Semana, "Verdades y mentiras", 12 de marzo de 2011.

[6] Ver por ejemplo Robert Muggah, "No Magic Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) and Weapons Reduction in Post-conflict Contexts", *The Round Table* 94, n° 379, 2005, pp. 239-52; Lephophotho Mashike, "Former combatants' involvement in crime and crime prevention", Research Report, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2007.

[7] Sobre reincidencia en Colombia, ver Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, "Disidentes, rearmados y emergentes. ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?", II Informe de la CNRR, agosto de 2007. International

Si bien no se puede relacionar a todos los desmovilizados con bandas criminales, los estudios sobre post-conflicto y procesos de DDR también han identificado un número de variables económicas, políticas y de seguridad que pueden originar o explicar el incremento de violencia en procesos de construcción de paz, incluyendo no sólo el surgimiento de nuevos grupos armados sino también la reincidencia o re-movilización de desmovilizados.[8]

Identificar cuáles son las conexiones entre tales variables y el fenómeno observado, debería por lo tanto contribuir a prevenir y combatir la reincidencia de desmovilizados en actividades ilegales, en un momento en que la Ley 1424 de 2010 comúnmente conocida como Ley de Desmovilizados, ha vuelto a poner en la agenda la necesidad de entender mejor la relación entre la presencia de desmovilizados y la inseguridad en ciudades de Colombia.[9]

1. Metodología

La priorización hecha en cuanto a las tres ciudades seleccionadas para el estudio tampoco fue fortuita. Por encontrarse en la lista de los 20 municipios con el mayor índice de población desmovilizada, Montería, Bogotá y Villavicencio, tienen una población desmovilizada suficientemente representativa para poder estudiar la existencia de una posible relación entre la presencia de desmovilizados y los niveles de inseguridad.[10] Teniendo además en cuenta que Córdoba y los Llanos Orientales fueron objeto de análisis en el anterior informe, se optó por incorporar a Montería y Villavicencio en éste como casos de estudio.

Con respecto al objeto de estudio, se consideró primero como población desmovilizada a todas las personas desmovilizadas desde al año 2003 hasta la actualidad que fueron oficialmente reconocidos como desmovilizados

---

Crisis Group, "Colombia´s new armed groups", *Latin America Report* 20, mayo 2007. Mauricio Romero y Angélica Arias, "Sobre paramilitares, neo-paramilitares y afines. Crecen sus acciones criminales. ¿Qué dice el gobierno?", documento Corporación Nuevo Arco Iris, 2009.

[8] Para el caso de Colombia, ver Jorge A. Restrepo y Robert Muggah, "Colombia´s Quiet Demobilization. A Security Dividend?", en Robert Muggah (ed.), *Security and Post-Conflict Reconstruction. Dealing with Fighters in the Aftermath of war*, Nueva York, Routledge, 2009. Juan Munévar y Enzo Nussio, "Desmovilizados: Víctimas y Causas de Inseguridad. Estudio de caso sobre el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba", en Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Segundo Informe*, CITpax, Madrid, noviembre de 2009. Enzo Nussio, "¿Reincidir o No? Conceptos de la Literatura Internacional Aplicados al Caso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia" *Revista Pensamiento Jurídico* 26, 2009, pp. 211-234. Michael Spagat, "Colombia´s Paramilitary DDR: Quiet and Tentative Success", Working Paper, Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), 2007. Ralph Rozema, "Urban DDR-processes: paramilitaries and criminal networks in Medellín, Colombia", *Journal of Latin American Studies* 40, 2008. Sobre otros casos, ver Kees Kingma, "Demobilisation, Reintegration and peacebuilding in Africa", en Edward Newman y Albecht Schnabel (eds.), *Recovering from civil conflict: reconciliation, peace and development*, Londres, Routledge, 2002, pp.181-201. Stina Torjesen, *The political economy of disarmament, demobilisation and reintegration (DDR). Selective Literature review and preliminary agenda for research*, Oslo, Norwegian Institute of International Affairs, 2006. Joanna Spear, "From political economies of war to political economies of peace: the contribution of DDR after wars of predation", *Contemporary Security Policy* 27, 2006, pp.168-89. Julia Buxton, "Reintegration and Long-term development: linkages and challenges", Thematic Working Paper 5, Centre of International Cooperation and Security, University of Bradford, 2008. Richard Hill, Gwendolyn Taylor y Jonathan Temin, "World you fight again? Understanding Liberian ex combatant reintegration", *Special Report* 11, United States Institute of Peace, septiembre 2008. Alpaslan Özerdem y Sukanya Podder, "Reinsertion Assistance and the Reintegration of ex combatants in War and Peace Transitions, Thematic Working Paper 4, Centre of International Cooperation and Security, University of Bradford. Philip Verwimp y Marijke Verpoorten, "What are all the soldiers going to do? Demobilisation, reintegration and employment in Rwanda", *Conflict, Security & Development* 4, 2004, pp. 39-57.

[9] El 29 de diciembre de 2010, el Congreso adoptó la Ley 1424 de 2010, "Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones." La Ley busca básicamente resolver la situación jurídica de unos 18.000 desmovilizados que no podían ser procesados bajo la Ley de Justicia y Paz. Más específicamente, su artículo 1 dice: "La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad."

[10] Según datos de la ACR, del Observatorio de DDHH de la Presidencia, procesados por CITpax en el Segundo Informe del Observatorio, p. 96.

por las autoridades colombianas. Hasta la fecha, las autoridades colombianas recibieron a más de 50.000 desmovilizados de los cuales, más de 30.000 formaban parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hoy en día, sólo quedan 32.000 registrados por la ACR. El Gobierno postuló a alrededor de 4.000 para ser procesados bajo la Ley de Justicia y Paz, casi 11.000 que venían del programa del Ministerio del Interior nunca ingresaron al nuevo programa, y desde 2007, otros 12.000 han abandonado el programa de reintegración. Por otra parte, más de 1.700 fueron asesinados, 6.400 fueron capturados por diversos delitos y otros dejaron de asistir a las actividades del programa de reintegración.[11]

Esa población desmovilizada incluye a los individuos que se desmovilizaron tanto de manera individual como colectiva, y a personas que pertenecían tanto a grupos paramilitares (AUC u otros) como a grupos de guerrilla. Personas que pertenecían a estructuras armadas ilegales – sean individuos que no se habían desmovilizado anteriormente, o nuevos integrantes de las llamadas Bacrim - y que decidieron dejar las armas de manera individual o colectiva después de la desmovilización de los grupos paramilitares, no hacen parte de esa población desmovilizada y por lo tanto, no son objeto del estudio.

En cuanto a la participación de desmovilizados en delincuencia o actividades ilegales, partimos de la diferencia entre el concepto de *reincidencia* entendido como la participación de un individuo, certificado oficialmente como desmovilizado, en actos delictivos posteriores a su desmovilización; y el concepto de r*emovilización,* que es la participación de un individuo, certificado oficialmente como desmovilizado, en violencia organizada ejecutada de manera posterior a su desmovilización, ya sea con los grupos que siguen en activo o con los que se conformaron en el proceso post-desmovilización[12].

Más allá de los *removilizados*, es decir de los individuos desmovilizados que reincidieron en actividades ligadas a su pertenencia o colaboración con estructuras armadas ilegales, consideramos como objeto de estudio a todos los individuos desmovilizados que volvieron a cometer cualquier tipo de actividades delincuenciales.

De igual manera, asumimos que cualquier actividad ilegal es generadora de inseguridad, aunque sea de manera latente o indirecta, como es por ejemplo el caso de los informantes que, a pesar de realizar una conducta ilegal, no cometen necesariamente delitos de alto impacto.

En síntesis, nuestro objeto de estudio cubre a toda la población desmovilizada que haya cometido un delito de alto impacto (homicidios, etc.) o de bajo impacto (robos, porte ilegal de armas, participación en narcotráfico), o que estuvo o estaría vinculada a actividades ilegales. En otros términos, consideramos a todos los desmovilizados que volvieron a delinquir por estar vinculados a estructuras armadas post-desmovilización (aunque puede ser que no hayan sido capturados y por lo tanto que sea difícil saber cuántos son exactamente), como a todos aquellos que volvieron a delinquir sin necesariamente pertenecer a esas estructuras. Esa población puede incluir a desmovilizados participando en el proceso de reintegración, como a desmovilizados que no están participando en el proceso de reintegración.

El objetivo del presente informe no es tratar de medir el impacto de la presencia de los desmovilizados en el aumento de la inseguridad. Existen diferentes variables que pueden explicar el incremento de violencia en procesos de paz (lo que lleva al investigador a enfrentarse a un problema conocido como "*equivalencia observacional"*) y hubiera resultado difícil llevar a cabo un estudio completo sobre todos los temas que quedan incluidos en problemas de seguridad. Sin embargo, tras un estudio anterior de desmovilizados afectados por la situación de inseguridad, el Área de DDR del Observatorio decidió esta vez centrarse en desmovilizados como posible causa de inseguridad, con el objetivo de analizar si existe una relación entre la inseguridad y la presencia de desmovilizados, es decir de investigar cuál es la participación de los desmovilizados en esta inseguridad, sin desconocer los otros agentes generadores de la violencia.

---

[11] Según las cifras de la ACR citadas por Semana, "Verdades y Mentiras", edición on-line, 11 de marzo de 2011, http://www.semana.com/nacion/verdades-mentiras/153189-3.aspx.

[12] Para una definición o aproximación al concepto de reincidencia, ver por ejemplo Enzo Nussio, "¿Reincidir o No? Conceptos de la Literatura Internacional Aplicados al Caso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia." Op. Cit. Nussio dice: "con el término reincidir en actividades ilegales se agrupan en este artículo todas las actividades emprendidas por desmovilizados fuera de la legalidad con un carácter sistemático, sin considerar si están ligadas a, por ejemplo, grupos armados ilegales, llamadas bandas criminales emergentes, o delincuencia común". Por su parte, en su informe de 2007, la CNRR habla de los "rearmados", como "personas y grupos de personas desmovilizadas que reincidieron en actividades relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común, bien a través de grupos ya existentes o mediante la conformación de otros." Op. cit.

No presumimos que exista una relación natural de causalidad entre el aumento de la inseguridad y la presencia de desmovilizados, ni que los desmovilizados sean *per se* delincuentes, pero quisimos investigar a) si la reincidencia de desmovilizados era un fenómeno marginal o no; b) qué tipo de delitos cometían esos individuos cuando volvían a delinquir; y c) cuáles son las razones por las cuales reinciden.

A raíz de esos objetivos, el Área de DDR del Observatorio procedió a una revisión y análisis de los diferentes datos estadísticos disponibles (hasta diciembre del año 2010) provenientes de las varias entidades públicas que tienen competencia en la materia o información sobre el asunto: la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la Fiscalía y Fiscalías seccionales, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional (Dijin), el INPEC, las Alcaldías y Policías metropolitanas de Bogotá, Montería y Villavicencio, las Comandancias de las Policías y las Gobernaciones de Córdoba, Cundinamarca y del Meta, y la Defensoría del Pueblo, entre otras.

En una segunda etapa, se entrevistó de manera individual a varios funcionarios y expertos de esas entidades, a integrantes de ONGs, líderes sociales, y funcionarios de organismos internacionales, así como a desmovilizados que viven en las tres ciudades de los estudios de caso. Entre ellos, había desmovilizados participantes activos de los programas de reintegración de la ACR, así como algunos que habían salido del programa. Finalmente se entrevistaron también a algunos desmovilizados privados de libertad en diferentes establecimientos penitenciarios de esas ciudades.

2. Limitaciones de la investigación

Diferentes factores dificultaron la investigación e impusieron difíciles limitaciones.

La principal dificultad tuvo que ver con la disponibilidad de la información. Muchas de las fuentes primarias que el Área de DDR consultó se encuentran actualmente compilando y sistematizando datos cuantitativos cruciales para el análisis, por lo que la información disponible aún es incompleta (sobre todo con respecto a los años anteriores a 2008), está sujeta a errores, y en ocasiones es contradictoria. Por ejemplo, las estadísticas de algunas instituciones que tienen esta responsabilidad no diferencian entre los autores de delitos; otras aún no especifican en los responsables o autores su condición o no de desmovilizados. La dificultad tiene que ver también con los diferentes métodos de cálculos entre entidades y con la diferencia de universo de desmovilizados que incluyen en sus bases de datos. Así, algunas entidades toman como referencia el número de delitos (sabiendo que varios delitos pueden ser cometidos por una misma persona), cuando otras contabilizan los autores de esos delitos. Con respecto a los desmovilizados reincidentes contabilizados por la ACR, esta oficina no dispone de los datos que le permitiría saber en qué año fue cometido el delito por el cual fue capturado el desmovilizado. Por lo tanto, varios de los desmovilizados que aparecen en sus bases de datos como reincidentes son individuos que fueron capturados después de su desmovilización, pero por unos delitos anteriores a su desmovilización. La misma ACR es consciente de esa laguna y aunque algunas entidades calculan que aproximadamente el 50% de los desmovilizados capturados lo fueron por delitos post-desmovilización[13], no existen datos definitivos que permitan saber con precisión a cuantos suman esos "falsos" reincidentes.

Al mismo tiempo, mientras la CNRR incluye en sus cifras de desmovilizados reincidentes a todos los desmovilizados capturados, inclusive muertos, la ACR sólo reconoce a los que fueron condenados, con el argumento de que la privación de la libertad de un desmovilizado no implica necesariamente su culpabilidad.

Por lo tanto, como lo que cada entidad entiende y contabiliza como desmovilizados reincidentes puede diferir según sus propios criterios, se constata que no existen datos precisos, unificados y aceptados por todos, de los desmovilizados implicados en actividades ilegales. Con base en todo lo anterior no se puede describir con precisión a quienes han reincidido en la ilegalidad, pues las diferentes entidades del Estado tienen interpretaciones diversas y divergentes sobre el mismo fenómeno.

3. Estructura del informe

El informe está dividido en cuatro secciones. Esta primera parte o introducción general explica la problemática, los objetivos, la metodología y las limitaciones del presente informe. El objeto de estudio, la viabilidad e utilidad de las estadísticas disponibles y los resultados esperados de la investigación fueron objetos de largas discusiones y reflexiones dentro y fuera del Área de DDR del Observatorio. Intentamos sintetizar y explicarlas claramente.

[13] Entrevista con el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, octubre de 2010.

La segunda parte está compuesta por los tres casos de estudio escogidos: Villavicencio, Montería y Bogotá. Después de analizar el contexto general de inseguridad urbana, cada estudio de caso, organizado alrededor de los tres ejes temáticos, trata de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuántos? ¿Cómo? Y ¿por qué?

El primer eje intenta analizar la magnitud o el nivel de participación de desmovilizados en acciones de delincuencia y violencia que están teniendo lugar en las ciudades consideradas como casos de estudio (¿Cuántos?). El segundo eje (¿Cómo?) analiza en qué tipo de acciones se han visto implicados ex combatientes; y el tercer eje (¿Por qué?) analiza cuáles son los tipos de relaciones y las motivaciones sistémicas, sectoriales e individuales por las cuales se han revinculado desmovilizados a la ilegalidad.

Después de estos estudios de casos, la tercera parte hace una síntesis de los resultados obtenidos así como de las tendencias generales y diferencias destacadas a partir de los tres casos de estudio. La cuarta parte concluye con un balance general de la investigación.

II. Estudios de caso

1. Villavicencio[14]

1.1 Contexto de inseguridad

La percepción de una escalada de inseguridad en Villavicencio parece tener cierta relación con las cifras de algunos delitos cometidos en la ciudad en años recientes.[15] Simultáneamente, este comportamiento ha ido acompañado de una percepción de 'inseguridad generalizada', la cual no se limita a sectores específicos de la ciudad como hasta hace algunos años.[16] Esto ha conllevado al surgimiento de denuncias provenientes de distintos grupos de la población, tales como líderes comunales, comerciantes, organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, etc.[17], y a la publicación de un informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo exclusivamente para el caso de Villavicencio[18].

[14] El Consultor quiere agradecer en particular el apoyo prestado por Johanna Camargo para la compilación y sistematización de información, así como para la elaboración del documento analítico.

[15] Véase Cámara de Comercio de Villavicencio, Observatorio de Seguridad Villavicencio 2007, 5 de octubre de 2007, p. 21, http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CCV_O._DE_SEGURIDAD.pdf. Adicionalmente sobre este tema han proliferado diferentes informes durante los últimos ocho años: algunos de ellos han sido publicados por la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio de Villavicencio y la Fundación Seguridad y Democracia. Véanse: Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 006 de 2010; Cámara de Comercio de Villavicencio, Observatorio de la Seguridad en Villavicencio 2008, Villavicencio, diciembre de 2008, http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CPE-OBS_SEG_VCIO_2008.pdf; Cámara de Comercio de Villavicencio, Observatorio de Seguridad Villavicencio 2007, Villavicencio, octubre de 2007, http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CCV_O._DE_SEGURIDAD.pdf. y Fundación Seguridad y Democracia, Balance General de la Seguridad Urbana, Bogotá, 2010.

[16] El Tiempo, "Villavicencio de pie contra la delincuencia," edición on-line, 14 de octubre de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/llano/2008-10-14/villavicencio-de-pie-contra-la-delincuencia_4599226-1.

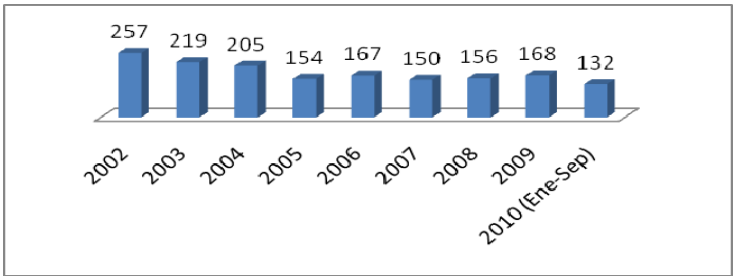
[17] Durante los últimos años han surgido constantes debates alrededor de los factores que han incidido negativamente en los niveles de seguridad en la ciudad. Estos espacios han convocado a las autoridades del orden local, departamental y nacional, así como a distintos grupos de la sociedad civil, donde se discuten las posibles causas y medidas para enfrentar estos fenómenos. Algunos medios de comunicación han dado a conocer la realización de Consejos de Seguridad, debates en el Concejo Municipal y Foros en la ciudad donde autoridades nacionales y locales, junto a algunos grupos sociales discuten sobre la situación de inseguridad en Villavicencio y concretan algunas medidas. Véanse al respecto: Consejo de seguridad realizado en enero de 2007, con la participación del entonces Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl González: Llanera, "Gobierno confirma que la tercera parte de desmovilizados se rearmaron. En el Meta no saben la cifra oficial de reinsertados. Se acuerda seguimiento al proceso y programas," edición on-line, 16 de enero de 2007, http://www.llanera.com/index.php?pageNum_noticias=170&totalRows_noticias=3520&id=4266.; Consejo de seguridad realizado en octubre 2008, con participación del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, El Tiempo, "Villavicencio de pie contra la delincuencia," http://www.eltiempo.com/colombia/llano/2008-10-14/villavicencio-de-pie-contra-la-delincuencia_4599226-1; Debate en el Concejo de Villavicencio en marzo de 2010, El Tiempo, "Nuevo crimen de sicarios en Villavicencio dejó dos personas muertas; el tema se debate a fondo," http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7681678; Consejo comunal, participación del entonces presidente Álvaro Uribe, El Tiempo, "Sicariato en Villavicencio preocupa al presidente Uribe", 19 de abril de 2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7626587; Foro desde la sociedad civil, realizado por la Fundación Nuestra Sociedad, El Tiempo, "Villavicencio, entre las 3 ciudades más inseguras del país," http://www.eltiempo.com/colombia/llano/inseguridad-en-villavicencio_8219780-4; Cabildo abierto convocado por el Concejo municipal en noviembre de 2010, El Tiempo, "Foco de delincuencia en Villavicencio sigue en aumento," Villavicencio, 3

a. Panorama general de inseguridad en Villavicencio

i. Homicidio

Las cifras de homicidio en Villavicencio durante los últimos ocho años revelan cambios significativos en su trayectoria. El período comprendido entre los años 2002 y 2004 refleja las cifras más altas de este delito en comparación con los años posteriores. Esta situación podría estar relacionada con la operación de estructuras de las Autodefensas durante ese período en la región. Como refleja el Gráfico n° I, las cifras de homicidio desde el año 2005 –período en el cual comienzan los procesos de desmovilización en la región de los Llanos Orientales–, demuestran una reducción considerable de este delito. Sin embargo, las tasas de homicidio por cien mil habitantes siguieron manteniéndose por encima de la tasa nacional tras la desmovilización[19] y desde 2008 parecen reflejar una leve tendencia al alza.

Gráfica n° 1. Total de homicidios en Villavicencio (2002 – septiembre de 2010)



Fuente: Medicina Legal

A esto se añade que el sicariato ha sido la principal circunstancia de muerte reportada en las cifras. La Secretaría de Gobierno de la ciudad reporta que el 56% del total[20] de homicidios registrados entre 2005 y 2009[21] fueron cometidos por sicarios.

ii. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones

Por su naturaleza, puede considerarse que cada uno de los componentes de este delito comporta una relación con otras actividades ilegales. Según cifras aportadas por la Policía, éste es uno de los delitos por los cuáles se han realizado más capturas en la ciudad. De hecho, en Villavicencio se ha concentrado más de la mitad de estas actividades con respecto a las cifras departamentales.

de noviembre de 2010), http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8271700.html.; Consejo de seguridad, con participación del consejero presidencial para la seguridad nacional, en noviembre de 2010: Llanera, "Consejo de Seguridad en Villavicencio con presencia del asesor Presidencial para la Seguridad Nacional Meta," 12 de noviembre de 2010, http://www.llanera.com/?id=11371.

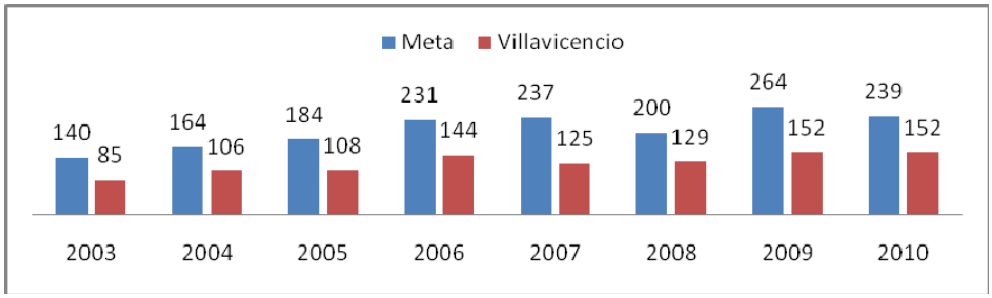
[18] Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010,* Sistema de Alertas Tempranas, Villavicencio, 4 de junio de 2010.

[19] Las tasas de homicidio nacionales por 100.000 habitantes, para los años 2006-2009 fueron de 38; 37; 34,31 y 39,39 respectivamente; mientras en Villavicencio fueron de 43; 37; 38 y 39,90 para los años mencionados. Véase, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, *Forensis 2006, 2007,* http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2006/homicidios.pdf*; Forensis 2007, 2008,* http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2007/2%20Forensis%202007%20homicidio-1.pdf*; Forensis 2008, 2009,* http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2008/2%20Forensis%202008%20homicidios.pdf*; y Forensis 2009, 2010,* http://www.medicinalegal.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=60.

[20] Este total también incluye las modalidades de homicidio por riñas y atraco.

[21] Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Villavicencio, *Informe sobre el comportamiento de eventos delincuenciales relacionados con el Informe de riesgo No. 006-10 de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Villavicencio*, Secretaría de Gobierno de Villavicencio, 2010, p. 4. Según la Policía del Meta el sicariato constituía para marzo de 2010 un 75% del total de casos, en 2009 un 57% y en 2008 un 50%. Véase: Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 14.

Gráfica n° 2. Capturas por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en Meta y Villavicencio (2003 – 2 de diciembre 2010)



Fuente: Policía del Meta

iii. Hurto

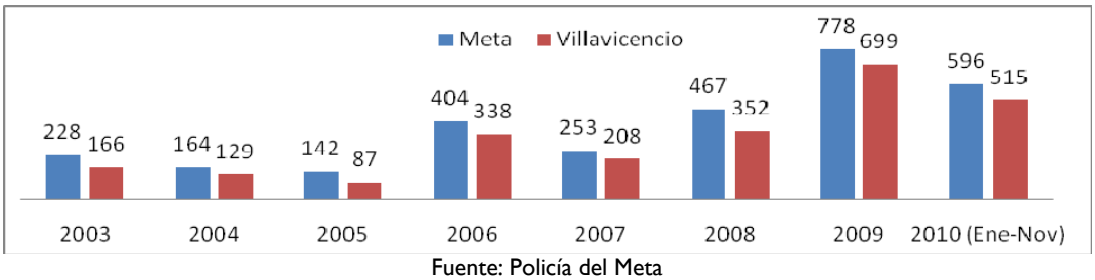
Según el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio, el hurto es uno de los delitos que genera mayor preocupación a la ciudadanía en Villavicencio.[22] Desde el año 2003 este delito ha crecido de forma alarmante en la ciudad, aun cuando se trata de un delito que no es comúnmente denunciado: para el 2003, la Policía del Meta reportó 255 casos; para el 2004, la cifra pasó a 329; en 2005 se redujo a 277; para el 2006 llegó a los 558 casos; en 2007 esa cifra llegó a los 629; para 2008 alcanzó un total de 728; en 2009, 832 casos reportados, y hasta el 2 de diciembre del año 2010 ha llegado a los 756 casos. Los últimos dos años han sido los años con más capturas por hurtos en el periodo estudiado.

iv. Microtráfico de estupefacientes

Por su parte, el expendio de drogas al menudeo es una de las actividades ilegales que según diversas percepciones, estaría siendo la causa de otros delitos en la ciudad. Si bien las percepciones sobre esta conducta se han concentrado en el expendio, las cifras sobre tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Villavicencio en su conjunto, reflejan que en razón de este delito se ha efectuado un alto volumen de capturas, y dimensionan la gravedad de esta problemática especialmente sobre la ciudad (véase Gráfica n° 3).

La presencia de 'ollas'[23] es un tema de especial preocupación para las autoridades y ha incidido en la percepción de seguridad en Villavicencio. Según la SIJÍN de esa ciudad, hasta abril de 2009 habían sido identificadas cerca de diez 'ollas', encontrándose las más grandes en los barrios Santa Fe, Brisas del Guatiquía, El Porvenir, El Industrial, La Reliquia, Porfía, El Popular, Villa Suárez, San Carlos y San José, entre otros.[24] Aun cuando algunos de estos sitios han sido desmantelados, existe preocupación entre los habitantes de diferentes barrios, pues después de estos allanamientos las formas de delincuencia migraron hacia otros sectores de la ciudad.[25]

Gráfica n° 3. Capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Meta y Villavicencio (2003 – 2 de diciembre de 2010)



Fuente: Policía del Meta

[22] Cámara de Comercio de Villavicencio, *Observatorio de la Seguridad en Villavicencio 2008,* diciembre de 2008, p. 4, http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CPE-OBS_SEG_VCIO_2008.pdf.
[23] Nombre asignado a lugares de expendio masivo de sustancias alucinógenas.
[24] Pronunciamiento del Capitán Héctor Ruiz, subcomandante de la SIJÍN en Villavicencio. Véase, El Espectador, "Villavo, en la 'olla' de inseguridad," 8 de abril de 2009, http://www.elespectador.com/articulo135145-villavo-olla-de-inseguridad.
[25] Entrevista CITpax en Villavicencio, 15 de octubre de 2010.

v. Reclutamiento de menores

Si bien no se trata de un delito ampliamente denunciado ante las autoridades locales en Villavicencio[26], organismos como la Defensoría del Pueblo han manifestado que existen varias denuncias de algunas familias ubicadas en barrios vulnerables de la ciudad, quienes han mostrado su preocupación por la presencia del Ejército Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC) y las FARC-EP, quienes se estarían llevando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes utilizándolos en el transporte de armas y droga, o como 'puntos' –nombre asignado a quienes desempeñan tareas de información-.[27]

b. Algunas explicaciones sobre la inseguridad en Villavicencio

Según fuentes consultadas para este estudio –instituciones públicas, ONG y líderes sociales–, existen varias razones que explican las percepciones y cifras existentes sobre la situación de seguridad en Villavicencio. Por una parte, estarían relacionadas con los cambios económicos y demográficos que se han producido en la ciudad durante los últimos años, y de la otra, con el proceso de desmovilización de las AUC.

La ciudad ha presenciado un desarrollo económico en auge[28], que no ha conllevado un desarrollo social.[29] El crecimiento desordenado de la población sería consecuencia de ese crecimiento económico, según las fuentes consultadas. Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que la ciudad pasó de tener una población de 253.780 habitantes en 1993, a 384.131 en 2005[30], lo cual se traduce en un incremento poblacional del 51,36% y una tasa media de crecimiento anual del 3,45%, la cual supera con creces el promedio nacional (1%) y departamental (2,03%).[31] Este crecimiento además de estar relacionado con los procesos económicos de la región y la ciudad, se encuentra vinculado a la llegada masiva de personas en situación de desplazamiento a la ciudad[32], las cuales al no tener usualmente acceso a educación o empleo[33] engrosan los cinturones de miseria de la ciudad.[34] La expansión acelerada de la ciudad se ha reflejado en el asentamiento de muchas personas en sitios precarios de alta vulnerabilidad socioeconómica y de exclusión social.[35] Este panorama de vulnerabilidad constituye un caldo de cultivo para el surgimiento de variadas formas de delincuencia en la capital del Meta.[36]

Las siguientes explicaciones están relacionadas con las dinámicas del conflicto armado en la región –la ubicación histórica de diferentes grupos armados ilegales en la ciudad como las FARC-EP y las Autodefensas en su momento– y el proceso de desmovilización de las Autodefensas.

---

[26] Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Villavicencio, se han reportado 22 casos desde el año 2007 hasta 2010. Véase Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Villavicencio, *Informe sobre el comportamiento de eventos delincuenciales relacionados con el Informe de riesgo No. 006-10 de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Villavicencio*, p. 7. Sin embargo, la Policía reporta una sola captura realizada por concepto de reclutamiento ilícito en el período 2003-2010.

[27] El Tiempo, "'Cuchillo' ya tiene más de 1.100 paramilitares y 'Martín Llanos' reorganizó sus autodefensas," 21 de septiembre de 2009, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6151447.html.

[28] Este desarrollo se basa en actividades como la explotación petrolera, la agroindustria, biocombustibles y el auge del sector turístico. Según el DANE, esta ciudad concentra sus principales actividades económicas alrededor del sector comercial en un 51.8%, y del sector servicios en un 34.7%. Véase DANE, *Boletín Censo General 2005: Perfil Villavicencio Meta,* 14 de septiembre de 2010), p. 5, http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/50001T7T000.PDF.

[29] Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 3.

[30] DANE, "Muestra censal 1993," http://www.colombiestad.gov.co/docs/IPUMS/MUESTRA_C93.zip; DANE, "Cuadros censo 2005," http://www.dane.gov.co/censo/files/cuadros%20censo%202005.xls.

[31] Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 8.

[32] Actualmente, la capital de departamento del Meta es el principal punto de llegada de un gran número de población desplazada en el oriente del país. Véase, Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 9. Hasta el año 2007, el CICR y el Programa Mundial de Alimentos identificaron a Villavicencio como la sexta ciudad en recibir mayor número de población desplazada en el país, y la tercera con mayor impacto por esta problemática, en función de la población total y la población con necesidades básicas insatisfechas. Véase CICR y Programa Mundial de Alimentos, "Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional local, condiciones de vida y recomendaciones para su atención," noviembre de 2007, p. 20, http://acnur.org/biblioteca/pdf/6236.pdf.

[33] Según el DANE el desempleo en Villavicencio es del 11,7%. Véase DANE, "Principales indicadores del mercado laboral," 30 de noviembre de 2010, p. 12, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_oct10.pdf.

[34] Entrevista CITpax en Villavicencio, 14 de octubre de 2010.

[35] Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 6.

[36] El Tiempo, "Foco de delincuencia en Villavicencio sigue en aumento", 3 de noviembre de 2010, http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8271700.html.

La presencia del Bloque Oriental de las FARC-EP en el departamento del Meta ha supuesto la participación de milicias urbanas de esa organización guerrillera sobre la ciudad. Hasta la actualidad, los integrantes de estas milicias urbanas se han mimetizado con la población civil, "realizando labores de inteligencia, extorsiones, actividades de apoyo logístico y de lavado de activos, así como actividades de distribución de estupefacientes"[37].

Por su parte, la presencia del Bloque Centauros de las Autodefensas en Villavicencio se desarrolló mediante la conformación de una estructura urbana que operó en la ciudad desde el año 2000, llamada "La Especial". Era un comando encargado de ejecutar las órdenes de los mandos del Bloque en la capital del Meta y Bogotá.[38] A través de informantes este grupo asesinó y/o desapareció a personas señaladas de tener relaciones con la guerrilla, contratistas que incumplían el pago de extorsiones, integrantes de la Unión Patriótica, víctimas del desplazamiento y presuntos colaboradores de alias "Martín Llanos"[39] en barrios de alto riesgo en la ciudad.[40] Precisamente, la disputa sostenida por esta estructura contra las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) dejó huella en el desarrollo del conflicto en la ciudad. Según las versiones rendidas en las diligencias procesales por ex combatientes de las Autodefensas, estos enfrentamientos se cobraron la vida de muchas personas en Villavicencio, especialmente, entre los años 2003 y 2004[41], lo cual podría estar relacionado con las cifras elevadas de homicidios registradas en la ciudad durante ese período.

Algunas explicaciones sobre la inseguridad en la ciudad se relacionan con las consecuencias del proceso de desmovilización en sí mismo, y no tanto con la intervención de sus actores considerados individualmente[42] –este último punto será desarrollado en apartados posteriores–. Según funcionarios cercanos a los procesos de reintegración y reconciliación en Villavicencio, la desmovilización de las estructuras de las Autodefensas en esa parte de la región fue parcial.[43] Algunos integrantes de estas facciones no se acogieron al proceso, y en su lugar fueron registradas personas que realmente no habían formado parte de la organización. Según estas fuentes, quienes no fueron registrados en el proceso, serían fundamentalmente mandos medios que actualmente siguen implicados en actividades ilegales[44], y por ende, incidiendo sobre los niveles de seguridad de varias partes del departamento, y en especial sobre Villavicencio. Es por esto que muchas personas vieron con desconfianza el desarrollo de ese proceso, dándose un "consenso en que lo que se dio en el departamento fue un proceso de 'transformación y no de reinserción'. Para ellas se desmovilizó un grupo reducido, dentro del cual muchos continúan en acciones delincuenciales"[45].

En relación con esto, quizás la más importante consecuencia de la desmovilización de las Autodefensas es el surgimiento e impacto del ERPAC, en la región de los Llanos Orientales, y particularmente sobre la capital del Meta.[46] Su presencia en Villavicencio ha abarcado el desarrollo de labores de inteligencia y recolección de información, control de micromercados de droga, reclutamiento, amenazas, y sicariato[47], conductas que inciden cotidianamente en las cifras y percepciones de inseguridad en la ciudad. Según la Defensoría del Pueblo esta estructura es actualmente la organización armada que representa mayor amenaza para la población vulnerable de Villavicencio.[48]

---

37 Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 7.

38 Verdad Abierta, "Traición y muerte en la parapolítica del Meta," 10 de junio de 2009, http://www.verdadabierta.com/parapolitica/llanos-orientales/1333-traicion-y-muerte-en-politica-del-meta.

39 Verdad Abierta, "'Paras' del Bloque Centauros reconocerán 450 crímenes," 13 de octubre de 2010, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2787-paras-del-bloque-centauros-reconocen-450-crimenes.

40 Ciudad Porfía, El Delirio, Divino Niño, 20 de julio, San Jorge, El Jardín, Manantial; Los Cristales, El Estero, Comuneros, Jordán, Santa Helena, La Ceiba, Villa Johanna, La Florida; Villa Ortiz, Popular, El Porvenir, San Isidro, Montecarlo, La Esperanza, 7 de agosto y Olímpico. Véase Ibid.

41 Verdad Abierta, "La guerra en Villavo," 12 de noviembre de 2009, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/1960-la-guerra-en-villavo.

42 Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.

43 Entrevistas CITpax en Villavicencio y Bogotá, 14 y 16 de octubre de 2010.

44 Entrevista CITpax en Villavicencio, 14 de octubre de 2010.

45 Cecilia Barraza y Luz Piedad Caicedo, *Mujeres entre mafiosos y señores de la guerra: Impacto del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la vida y seguridad de las mujeres en comunidades en pugna. Caso Villavicencio,* Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Bogotá, 2007, pp. 60-61.

46 Véase Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010, http://www.toledopax.org/uploads/Tercer_Informe_CITpax_Observatorio_DDR_Ley_Justicia_Paz_septiembre_2010.pdf.

47 Ibid., 108.

48 Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 2.

Adicionalmente, las disputas entre el fallecido jefe paramilitar alias "Cuchillo" y el empresario Víctor Carranza habrían incidido sobre los ciclos de violencia que han golpeado a la ciudad de Villavicencio. Esos enfrentamientos se habrían traducido en un recrudecimiento de los asesinatos perpetrados contra personas que sostuvieron algún tipo de relación –principalmente de testaferrato– con uno de ellos[49] en los últimos años. Por ejemplo, "cuando algo toca a Víctor Carranza, se observa que automáticamente se aumenta la inseguridad en la región"[50]. Este escenario, habría llevado a Carranza a buscar aliados en la región –se presume que estaría gestionando una supuesta alianza con "Martín Llanos"– para contrarrestar los planes de atentar contra su vida.[51]

Otra consecuencia del proceso con injerencia en la inseguridad en la ciudad es la ausencia de los supuestos 'garantes' y controladores del orden público, tras el desmonte de los grupos paramilitares que ejercían en varios barrios periféricos el monopolio de la fuerza. Según una periodista local, ciertos sectores de la ciudad extrañan la presencia de los paramilitares en esas zonas, pues en su criterio, cuando ellos ejercían control en esos barrios, crímenes como el robo o conductas como el consumo de sustancias psicoactivas no parecían desbordarse como actualmente pareciera estar sucediendo.[52] Esto se relaciona con el punto de vista de otro desmovilizado entrevistado: "aquí hay mucha gente que dice que la inseguridad aumentó desde que desaparecieron los paracos [paramilitares]"[53].

1.2 Población desmovilizada

Según la Alta Consejería para la Reintegración, un total de 804 desmovilizados es atendido por ese programa en la ciudad de Villavicencio. De esa cifra, un 34,7% corresponde a ex combatientes de las Autodefensas y un 63,43% a ex integrantes de organizaciones guerrilleras[54]. Esta ciudad alberga el 50,82% de los 1.582 desmovilizados atendidos por esa institución en todo el Meta[55], lo cual refleja una particular predilección de los desmovilizados por ubicarse en la capital del departamento y adicional a esto, recibir sus beneficios allí.

i. Ubicación

Según las entrevistas realizadas por el Área, los desmovilizados deciden ubicarse en ciudades como Villavicencio, pues consideran que en ellas se encuentran mayores oportunidades de reintegración[56]. Tales oportunidades consistirían en la posibilidad de estar más cerca de los programas, la existencia de mayores ofertas laborales, y la posibilidad de encontrar un espacio que les garantice anonimato y seguridad para ellos y los suyos. Adicionalmente, la llegada de un constante flujo de desmovilizados de organizaciones guerrilleras a los hogares de paz dispuestos en Villavicencio –uno en El Estero, otro en la vía a Puerto López y otro en la vía a Restrepo–, podría ser una de las razones por las cuales éstos tendrían mayores posibilidades de permanecer en la ciudad tras dejar dichos hogares.

Según algunos funcionarios de la ACR el departamento del Meta es atractivo para la población desmovilizada, principalmente por el tema laboral.[57] El auge de la industria petrolera, palmera, arrocera y agroindustrial, sería una de las razones por las cuales los desmovilizados deciden ubicarse en distintas partes del departamento.[58] Ahora bien, si esos son los incentivos ofrecidos por el departamento, la ubicación en su capital ofrecería más ventajas.

De otro lado, si se toma en consideración que gran parte de la población desmovilizada ubicada en Villavicencio está compuesta por personas provenientes de otras zonas del país, en función de su pertenencia a uno u otro grupo armado, el tema de seguridad comienza a adquirir relevancia. Algunos han encontrado allí un lugar donde pueden satisfacer sus expectativas de seguridad personal y familiar –bien sea en función de sensaciones de

[49] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[50] Entrevista CITpax en Villavicencio, 14 de octubre de 2010.
[51] Entrevista CITpax en Bogotá, 16 de octubre de 2010.
[52] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[53] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[54] El porcentaje de ex guerrilleros atendidos por la ACR incluye a antiguos integrantes de las FARC-EP (488 personas); ELN (21 personas) y ERP (1 persona). Adicionalmente, las cifras de ACR incluyen a 15 personas (1,87%) atendidas por el programa en la ciudad, de las cuales no se tiene información acerca de la organización de origen.
[55] ACR, "Reintegración en Colombia. Hechos y datos", diciembre de 2010, http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Documents/febrero11/factresurreccionDiciembre3.pdf
[56] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[57] Entrevista CITpax en Villavicencio, 13 de octubre de 2010.
[58] Ibíd.

inseguridad personales o tras haber recibido amenazas directas contra sus vidas en sus zonas de desmovilización–. Un antiguo mando medio proveniente de la costa Caribe lo expresa de la siguiente manera: "llegué a Villavicencio para cuidar a mi familia. Acá tenía además algunos contactos que habían pertenecido al Centauros"[59]. Otro señala: "Yo llegué a Villavicencio luego de un tiempo de haberme desmovilizado [en otro municipio]; al parecer alguien de allá quería asesinarme pero nunca supe quién, porque al que me lo dijo lo mataron"[60].

ii. Ocupaciones

Según un desmovilizado, la mayoría de los ex combatientes que participan en el proceso de reintegración se desempeñan como trabajadores independientes, apostándole a la implementación de su propio negocio.[61] Según él y otros desmovilizados entrevistados para este estudio, algunos han montado negocios de Internet, confección, provisión de frutas y verduras, panadería y hasta un centro de formación deportiva. Otros han sido vinculados laboralmente en las industrias petroleras y de construcción[62], y varios de ellos participan en el programa Salvavías[63]. De ellos, únicamente quienes se desempeñan como Salvavías son identificados como desmovilizados por parte de la población. Por otra parte, algunos desmovilizados se han vinculado a oficios que aunque no son ilegales, han generado cierta controversia. Uno de ellos es el manejo de taxi y otro los servicios de vigilancia. Villavicencio es una ciudad donde el negocio del taxismo ha crecido considerablemente[64], y ha sido visto con recelo por la gente, pues se considera que varios de sus operarios pueden ser informantes[65] o se encuentran relacionados con actividades ilegales[66] como el lavado de activos[67].

Respecto a quienes se desempeñan en los servicios de vigilancia, un desmovilizado manifestó conocer el caso de un compañero de su bloque que si bien no se desmovilizó se apartó de la organización y ejercía como celador en un hotel de la ciudad, y quien posteriormente facilitó su vinculación como vigilante en ese mismo hotel. Esta misma persona manifestó conocer el caso de un compañero desmovilizado que se desempeña como celador en una institución pública.[68] Hay casos de otros ex combatientes que trabajan como vigilantes comunitarios. Según un funcionario de la Policía en Villavicencio, se han conocido casos de empresas informales organizadas por algunos de ellos los cuales han desarrollado su trabajo con mucho empeño y que en algunos casos, habrían colaborado con unidades de la Policía.[69] No obstante, algunas de esas empresas generan desconfianza entre los habitantes, al no conocer a las personas que las integran.[70]

iii. Percepciones generales sobre la población desmovilizada

Según personas cercanas al proceso de desmovilización y reintegración, a los desmovilizados en Villavicencio no les gusta identificarse como tales. Algunos ex combatientes entrevistados para este estudio lo han expuesto de la siguiente forma: "Acá el desmovilizado busca que no lo reconozcan. Yo trato que mucha gente no sepa quién soy. Entre menos la gente sepa que somos desmovilizados, más tranquilos vivimos"[71]. "Aquí en el barrio nadie sabe que soy desmovilizado"[72], dice otro ex combatiente de las Autodefensas, quien hace pocos años llegó a Villavicencio con su familia. A esto añade: "nosotros poco hemos socializado con la gente del barrio"[73]. En relación con esto, otro desmovilizado ha señalado cómo ha optado por ocultar su situación en medio de un contexto donde la ciudadanía los juzga aún sin saber quiénes o cómo son: "En el barrio no saben que yo soy

[59] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[60] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[61] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[62] Entrevistas CITpax en Villavicencio, 11 y 12 de noviembre de 2010.
[63] El "Programa Integral de Seguridad Vial en Carreteras, Salvavías" fue lanzado por el Ministerio de Transporte y el Fondo de Prevención Vial a finales del año 2005. Desde su origen, este programa ha vinculado como auxiliares cívicos a desmovilizados en proceso de reintegración, quienes acompañan en su gestión a la Policía de Carreteras en distintos puntos del país. Véase Presidencia de la República, "Con desmovilizados, lanzan programa Salvavías para prevenir accidentes," 6 de diciembre de 2005, http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/detalleNota1.aspx?id=2534.
[64] Entrevistas CITpax en Villavicencio, 14 y 28 de octubre y 12 de noviembre de 2010.
[65] Entrevista CITpax en Bogotá, 28 de octubre de 2010.
[66] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[67] Entrevista CITpax en Bogotá, 28 de octubre de 2010.
[68] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[69] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[70] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[71] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[72] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[73] Ibíd.

desmovilizado. Me hago el bobo cuando hablan de desmovilizados. Juzgan a los desmovilizados por lo que hicieron y por envidia"[74].

Acorde con las estrategias de buscar el anonimato por parte de los desmovilizados, más allá de identificar como desmovilizados a quienes se desempeñan como Salvavías en la ciudad, los ciudadanos no distinguen en sus propios barrios quiénes son. Un estudio realizado hace unos años por UNIFEM recogió esta misma tendencia. Según sus autoras "pocas de las personas entrevistadas identifican a los desmovilizados. Son pocas las que dicen conocer alguno de ellos"[75]. En este sentido, es bastante diciente una de las voces recogidas por el mencionado estudio: "Que uno los reconozca no. Sabe que siguen haciendo fechorías. No se ha sentido un cambio, o bien [ha sido] para mal. Uno escucha de los muertos, de viciosos, de ladrones"[76].

1.3 Participación de desmovilizados en delitos

i. Cifras

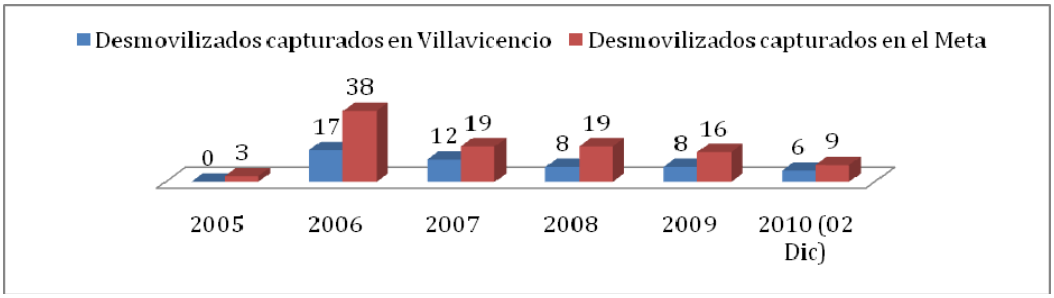
Según la Policía del Meta, desde el año 2005 hasta el 2 de diciembre 2010 fueron capturados 51 desmovilizados en la ciudad de Villavicencio. De esta cifra, 47 –el 92,16%- corresponde a ex integrantes de las Autodefensas y cuatro –el 7,84%– a desmovilizados de las FARC-EP (hay que tener el cuenta que un 60.7% de los desmovilizados en Villavicencio son ex miembros de las FARC-EP). Si se toma en consideración que durante ese período 104 desmovilizados fueron capturados en todo el departamento del Meta, los ex combatientes capturados en la capital corresponden al 49,03% de esa cifra. Esto coincide más o menos con la distribución de desmovilizados entre Villavicencio y el resto del departamento (en Villavicencio residen 804 desmovilizados y en el resto del departamento 778).

Esto significaría que un 6,34% de los desmovilizados presentes en Villavicencio y un 6,81% de los desmovilizados que residen en el resto del Meta han sido capturados por algún delito cometido antes o después del proceso de desmovilización[77]. Este porcentaje puede ser más alto por los desmovilizados reincidentes que nunca han sido capturados o debido a sub-registros de la Policía[78] y más bajo por posibles casos de desmovilizados capturados sin ser procesados. Los eventuales procesos migratorios de los ex combatientes a distintos lugares del departamento o la región también afectan estas cifras, pues es posible que varios desmovilizados que han delinquido en la ciudad hayan sido capturados en otros lugares o viceversa.

Adicionalmente, con base en las cifras reportadas por el Departamento de Policía del Meta, el número de desmovilizados capturados en la ciudad se ha reducido hasta el año 2009. El mayor número de desmovilizados capturados se concentra en los primeros dos años posteriores a la desmovilización –2006 y 2007– (véase Gráfica n° 4).

[74] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
[75] Barraza y Caicedo, Op. Cit., p. 61.
[76] Entrevista realizada a una habitante de Villavicencio, 2010.
[77] Los datos estadísticos aportados por el Departamento de Policía del Meta para el período 2005-2010 no distinguen entre desmovilizados capturados por delitos cometidos durante la militancia en las organizaciones armadas ilegales, y aquellos perpetrados posteriormente a la desmovilización. Sin embargo, según datos de la ACR, desde el año 2007 hasta 2010 fueron capturados en la capital del Meta cuatro desmovilizados de las Autodefensas en razón de delitos cometidos luego del proceso de desmovilización (homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes). Todos ellos ya han sido condenados.
[78] Por ejemplo, en el curso de la investigación se conoció el caso de dos ex combatientes de las FARC-EP supuestamente involucrados en un acto de terrorismo que no está incluido en los registros. Véase El Tiempo, "La Policía frustró atentado terrorista en Villavicencio", 12 de agosto de 2010.

Gráfica n° 4. Desmovilizados capturados en Villavicencio y el Meta (2005 - 2 de diciembre de 2010)



Fuente: Policía del Meta

Sin embargo, aun cuando se trata de cifras poco alarmantes, se observa que las capturas de desmovilizados realizadas en Villavicencio representan porcentajes significativos respecto a los totales de capturas de ex combatientes en todo el departamento del Meta. Para el año 2006, las capturas de desmovilizados en la ciudad representaron un 44,7% del total de capturas de ex combatientes en todo el departamento; en 2007, representaron un 63,15%; para el 2008, un 42,1%; en 2009, representaron un 50% y hasta inicios de 2010, representaban un 66%.

ii. Percepciones y distorsiones de percepciones

Las percepciones de los observadores del proceso acerca de la magnitud del fenómeno de antiguos combatientes involucrados en actividades ilegales parecen coincidir en la escasa representatividad de los desmovilizados que participan en dichas actividades. Los representantes de instituciones estatales cercanas al proceso de reintegración normalmente sostienen que hay "poca reincidencia por parte de los desmovilizados".[79] Y otras instituciones como la Policía, la Gobernación o la Alcaldía, que otrora consideraban a esta población como la principal causa de inseguridad, han cambiado de parecer, según lo manifestó un funcionario cercano a los procesos de reintegración. Por ejemplo, en 2007 el entonces gobernador del Meta, Juan Manuel González, afirmó en un Consejo de Seguridad ante el entonces Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, que el mayor índice de violencia provenía de los desmovilizados.[80] Según la fuente consultada, sólo hasta cuando se analizaron en detalle las cifras que involucraban a desmovilizados capturados en la ciudad, las instituciones locales pudieron comprender que la incidencia de ellos en acciones ilegales era más baja de lo estimada.[81]

Los desmovilizados entrevistados tienen otra impresión. Algunos creen que muchos de sus compañeros se han "reactivado", especialmente en los primeros años posteriores a la desmovilización. Uno de los desmovilizados entrevistados dijo que hoy en día se habría disminuido el número de ex combatientes que estarían delinquiendo "fuertemente", ya que aquellos estarían "en la cárcel o muertos".[82]

De hecho, existen algunas distorsiones que han permeado las percepciones de la comunidad, las cuales pueden haber contribuido a la sobredimensión de la participación real de algunos ex combatientes en la inseguridad de Villavicencio. En primer lugar, el uso casi indistinto de los términos "desmovilizado" y "paramilitar", se ha asociado también con quienes participan en estructuras armadas ilegales. En ocasiones estos términos también se han utilizado de forma casi indistinta cuando se hace referencia a la delincuencia común, lo cual sumado a lo anterior, complejiza las posibles distorsiones. Según un desmovilizado entrevistado para este estudio, existen muchos prejuicios en la comunidad del barrio al cual llegó tras haberse desmovilizado en otro municipio del Meta: "Recién llegué acá, la gente sí decía que cuidado, que había mucho paraco [paramilitar], mucho desmovilizado […] y es que hay muchos 'marihuaneros' y muchos ladrones pero la gente aduce que son desmovilizados o paramilitares"[83]. Hasta se han conocido casos controversiales donde las autoridades han sido

[79] Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre de 2010.
[80] Llanera, "Gobierno confirma que la tercera parte de desmovilizados se rearmaron. En el Meta no saben la cifra oficial de reinsertados. Se acuerda seguimiento al proceso y programas.," 16 de enero de 2007, http://www.llanera.com/index.php?pageNum_noticias=170&totalRows_noticias=3520&id=4266.
[81] Entrevista CITpax en Villavicencio, 13 de octubre de 2010.
[82] Entrevistas CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.
[83] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.

señaladas de haber sospechado de ex combatientes por el "simple hecho de ser desmovilizados".[84] En segundo lugar, al igual que en otras ciudades, muchos desmovilizados que habitan en Villavicencio han ocultado su identidad como tales. A pesar de esto, algunos habitantes de la ciudad han manifestado con cierta convicción que muchos de ellos han vuelto a delinquir[85].

Otro tipo de distorsión podría tener el efecto de minimizar la percepción de desmovilizados identificados con actividades ilegales en el caso de Villavicencio. A diferencia de otros contextos donde los desmovilizados están claramente identificados con un trabajo específico, -especialmente conductores de moto-taxis[86] en la costa (véase el caso de Montería)-, en Villavicencio la comunidad en general parece no tener una idea clara de lo que hacen los desmovilizados, más allá de quienes se desempeñan como Salvavías en las carreteras de la ciudad. Debido a esto, los habitantes de la ciudad de Villavicencio parecen tener una percepción más difusa de los desmovilizados, lo que les dificulta percibirlos como un grupo homogéneo dedicado a un tipo de actividad en particular.

A la complejidad del fenómeno se suman las percepciones sobre desmovilizados que estarían participando en el programa de la ACR y al mismo tiempo delinquiendo en actos como el sicariato, robo y expendio de drogas. Según personas cercanas al proceso de reintegración y voceros de organizaciones de la sociedad civil que en algún momento le han brindado acompañamiento a esta población, varios desmovilizados "tienen un pie acá y un pie allá"[87], donde los mandos y las redes parecieran estar aún están presentes[88].

1.4 Tipos de delitos cometidos

I. Cifras

Según cifras de la Policía del Meta, desde el año 2005 los desmovilizados capturados en Villavicencio han participado en los siguientes tipos de delitos (de mayor a menor frecuencia): homicidio; concierto para delinquir; extorsión; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; hurto a personas; lesiones personales; terrorismo; fabricación o porte de estupefacientes; secuestro extorsivo; violencia intrafamiliar y estímulo al uso ilícito de drogas.

[84] En El Tiempo se publicó una noticia sobre el caso de un desmovilizado del Bloque Héroes del Guaviare de las Autodefensas que si bien participa en el programa de reintegración, fue capturado por el delito de concierto para delinquir. Según los testigos en este caso, el desmovilizado se habría vinculado con el ERPAC, señalamientos que él niega, y por el contrario afirma que desde su desmovilización reorganizó su vida al lado de su esposa y sus tres hijos. El Tiempo, "Desmovilizado de los 'paras', en líos con la justicia," 15 de noviembre de 2010, edición online. Un caso parecido fue descrito por una funcionaria de la ACR. Ella sostuvo que un desmovilizado fue liberado tras haber sido acusado de un homicidio por falta de pruebas. El desmovilizado insistía en su inocencia y decía que lo habían detenido "por el simple hecho de ser desmovilizado". Entrevista CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.

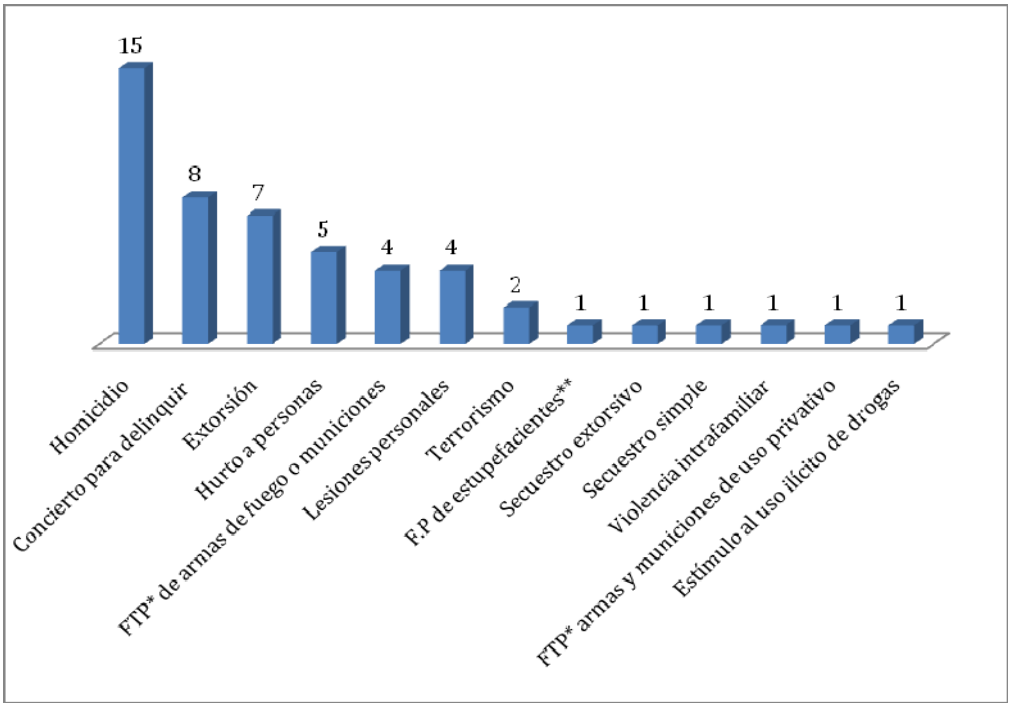
[85] Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.

[86] El moto-taxismo en Villavicencio es un fenómeno muy marginal, pues existe casi exclusivamente en el barrio alejado de Ciudad Porfía.

[87] Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre y noviembre de 2010.

[88] Ibíd.

Gráfica n° 5. Capturas de desmovilizados en Villavicencio según tipo de delito cometido (2005 - 2 de diciembre de 2010)



Fuente: Policía del Meta
* Fabricación, tráfico y porte
** Fabricación o porte

De todas las personas capturadas en Villavicencio entre 2005 y el 2 de diciembre de 2010 por diferentes delitos, las capturas de personas desmovilizadas corresponden a los siguientes porcentajes: un 4,3% por concierto para delinquir; un 4% por extorsión; 3,8% por homicidio; 0,6% por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y 0,13% por hurtos a personas.

Considerando estos porcentajes, en términos generales la participación de ex combatientes en delitos es relativamente baja en Villavicencio. Entre los delitos con mayor participación de desmovilizados se encuentran el homicidio, concierto para delinquir y extorsión –delitos muchas veces relacionados con la delincuencia organizada y con alto impacto sobre las percepciones de inseguridad–. Con respecto a los hurtos a personas, uno de los delitos que más ha afectado la percepción de inseguridad en Villavicencio y que se relaciona con la delincuencia común, la participación de los desmovilizados es mínima según las cifras de la Policía.

ii. Percepciones y observaciones

En términos generales, la ciudadanía ve a los desmovilizados implicados en todo tipo de delitos. El sicariato, control social o actividades relacionadas al tráfico y venta de drogas son los delitos que más suelen identificar con ellos. Las opiniones sobre su implicación en el delito de hurto están divididas. Por un lado, hay quienes conocen casos de desmovilizados implicados en hurtos, pero por el otro hay quienes están convencidos de que los desmovilizados se dedican a crímenes de mayor impacto. En este apartado recorremos las percepciones existentes sobre la participación de ex combatientes en distintos tipos de acciones ilegales en Villavicencio.

Liderazgo en la ilegalidad

Antes de hacer un recorrido por los distintos tipos de delitos, queremos destacar un punto reiterado en las entrevistas y que se refiere al rol que cumplen los desmovilizados dentro de cualquier tipo de actividad ilegal. En general, los desmovilizados que delinquen son identificados como líderes dentro de grupos criminales.[89] Es importante destacar estos aspectos de liderazgo y experiencia delincuencial ya que justamente en ellos yace la peligrosidad de la población desmovilizada que en parte justifica las políticas de DDR.[90]

[89] Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre y noviembre de 2010.
[90] Stockholm Initiative, *Stockholm Initiative on Disarmament, Demobilisation and Reintegration. Final Report,* Rolf Tryckeri AB, Stockholm, 2006, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/43/56/cf5d851b.pdf.

Según una persona entrevistada para este informe, los desmovilizados "son los que organizan grupos estructurados o bandas delincuenciales como tal vez réplicas de los grupos a los que pertenecieron y en los cuales sólo cumplían órdenes, al salir toman 'el liderazgo' para conformar estos grupos"[91]. Esta posición de líderes asumida por varios ex combatientes se ve reflejada en algunos ejemplos. Según una fuente, el antiguo encargado de Villavicencio de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada organizó un "grupo delincuencial con 5 a 10 personas para hacer extorsiones en zonas aledañas".

El ERPAC, por su parte, también valora la experiencia de los desmovilizados. Según un periodista: "Los desmovilizados tienen un alto rango dentro del grupo. El ERPAC tiene grados como el Ejército, los desmovilizados son de sargentos para arriba. Hay una estructura jerárquica y la formación militar cuenta"[92].

Actividades relacionadas con el ERPAC

Según los entrevistados para este estudio, varios desmovilizados estarían relacionados con las acciones que lleva a cabo el ERPAC. La CNRR sostiene que el ERPAC cuenta con la "participación de ex jefes y parte de la tropa que fueron integrantes principalmente del Bloque Centauros"[93]. En este sentido, durante los últimos años han sido capturados varios desmovilizados en la ciudad sindicados de pertenecer a esa estructura y desempeñar tareas de alta responsabilidad. Algunos de los casos más recientes son el de Eduard Alfonso Suárez Rodríguez, alias "Calamisco", un desmovilizado del Bloque Héroes del Llano y Guaviare, quien fue capturado por la Policía[94], al estar presuntamente manejando las finanzas de ese grupo[95]. Otro caso es el de Manuel Eduardo Nurray Cordoba, alias "Turbeño", un desmovilizado del Bloque Héroes del Llano que fue capturado por la Policía en un populoso sector de la ciudad[96], quien estaría vinculado con esa estructura y su manejo financiero.

En el Tercer Informe del Observatorio, el Área de DDR reportó que el ERPAC además de componerse de antiguos integrantes de los Frentes Héroes del Llano y Guaviare, ha vinculado a "integrantes de los Paisas que en su mayoría quedaron en la facción de los Leales a Miguel Arroyave; desmovilizados no participantes del proceso de reintegración; y niños, niñas, adolescentes y jóvenes"[97]. Según cifras del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, de los últimos 163 judicializados en el Meta por pertenecer al ERPAC, 75 son desmovilizados de las Autodefensas de los cuales 72 hacían parte de los Héroes del Llano, bloque comandado entre otros por el ya fallecido alias "Cuchillo".[98] De todas formas, según una fuente cercana a los procesos judiciales, es una minoría que hace presencia en la ciudad de Villavicencio.[99] Aunque el actuar del ERPAC se concentra principalmente en las zonas rurales, hay estrechos vínculos con lo que está ocurriendo en Villavicencio, desarrollándose interconexiones entre los circuitos rurales y urbanos de su operación.[100]

Varias fuentes coinciden en que la "removilización" de antiguos combatientes se concentró en los primeros años posteriores a la desmovilización. Un desmovilizado entrevistado para este estudio afirma que "al principio había una pelea entre alias "Cuchillo" y los Macacos/Paisas. En esta guerra murieron muchos desmovilizados, unos porque estaban involucrados, otros porque se resistían, esto fue en 2006-2007"[101]. Otra fuente sostiene que "los desmovilizados que se fueron con el ERPAC otra vez, se desmovilizaron, cobraron el sueldo y después en 2006-2007 se fueron otra vez". Esta misma fuente agrega que alias "Cuchillo" dio una orden tácita de irse de nuevo lo que habría causado muertes de desmovilizados en esta época. Estas observaciones coinciden con el

[91] Entrevista CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.
[92] Entrevista CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.
[93] CNRR, *La Reintegración: Logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. II Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación*, Bogotá, 2010. Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010, p. 108.
[94] El Espectador, "Policía de Bogotá capturó al jefe de finanzas de alias 'Cuchillo'," edición online, 8 de marzo de 2010.
[95] El mismo alias "Cuchillo" que está liderando el ERPAC es otro ejemplo que se podría mencionar en este contexto de desmovilizados que asumieron el liderazgo dentro de estructuras ilegales. Véase Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, Área de DDR - *La evolución de las estructuras armadas post-desmovilización: pasado, presente y futuro*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010.
[96] Notillano, "Sigue andanada contra "Cuchillo". Dos cabecillas fueron capturados en la Operación Patria 220," 10 de diciembre de 2010, http://www.notillano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=688:sigue-andanada-contra-cuchillo-dos-cabecillas-fueron-capturados-en-la-operacion-patria-220&catid=35:segunda-emision&Itemid=55.
[97] Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, Área de DDR - *La evolución de las estructuras armadas post-desmovilización: pasado, presente y futuro*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010.
[98] Información del CTI, sede Villavicencio.
[99] Entrevistas CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.
[100] El Espectador, "Capturan 22 miembros de la organización de 'Cuchillo'," edición online, 21 de septiembre de 2009.
[101] Entrevista CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.

hecho de que en el año 2006 hubo un número elevado de desmovilizados de las Autodefensas asesinados según cifras de la Policía (véase apartado sobre *Motivos de reincidencia*).

Dentro del ERPAC los desmovilizados vinculados desempeñarían distintos tipos de actividades. Hay quienes funcionan como 'puntos de contacto' y aportan información estratégica a la estructura[102]. Un desmovilizado ve factible que dentro de los participantes del programa de reintegración existieran informantes al servicio del entonces jefe máximo de la estructura, alias "Cuchillo"[103]. Otra de las posibles actividades ejercidas por desmovilizados dentro del ERPAC, es su participación como instructores en campos de entrenamiento debido a su experiencia en el campo militar.[104] Estos campos se encuentran en zonas rurales lejanas de los cascos urbanos.

Desmovilizados de las FARC

Con respecto a su proveniencia, los entrevistados tienden a diferenciar entre desmovilizados de la guerrilla y de las Autodefensas. En términos generales, los ex guerrilleros se ven como menos propicios para cometer o verse involucrados en delitos, pero hay indicios de que algunos ex guerrilleros son 'infiltrados de las FARC'. Distintos observadores se adhieren a esta visión que parte de la convicción de que no todos los desmovilizados de las FARC son verdaderos desertores sino que algunos habrían sido desmovilizados por esa organización con el fin de usarlos como informantes en la ciudad.[105] Según el periódico *El Espectador*, en agosto de 2010, dos personas fueron detenidas por la Policía en el barrio El Estero de Villavicencio, cuando fueron sorprendidas portando una granada sin seguro. Según el comandante (E) de Policía del Meta, Juan Carlos Pinzón, los detenidos serían desmovilizados de los frentes 40 y 51 de las FARC-EP. Las autoridades presumieron la comisión de un 'atentado terrorista'[106]. Esta noticia podría confirmar que algunos desmovilizados de las FARC no se habrían desvinculado de su organización.

Sicariato

Hay quienes ven una coincidencia entre la desmovilización y el posterior aumento del sicariato.[107] ¿Cómo estarían involucrados entonces los desmovilizados en este delito? En un artículo de *El Tiempo*, el comandante de la Policía del Meta, coronel Marco Tulio Avendaño, dijo que "algunos desmovilizados se han 'vendido' al mejor postor para cometer asesinatos".[108]

De todas formas, es difícil identificar a los desmovilizados como pieza clave en los casos de sicariato. Lo cierto es que la mayoría de los desmovilizados asesinados han sido víctimas de sicarios.[109] También se conocen situaciones que involucran a desmovilizados con las redes de sicarios en el alquiler de las armas, como el supuesto caso de un antiguo miembro del Frente Antonio Nariño de las FARC-EP, quien fue capturado por la Policía por ser presuntamente responsable de esa conducta[110]. Sin embargo, las opiniones se encuentran divididas acerca de si quienes actúan como sicarios son o no efectivamente desmovilizados[111].

Microtráfico

El microtráfico se ha vuelto un fenómeno importante en la ciudad de Villavicencio. Varios entrevistados para este estudio vinculan a los desmovilizados con este delito, especialmente como personas que "controlan los expendios de droga" o que "han conformado bandas de microtráfico".[112] Según una funcionaria del Ministerio

---

102 Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010, p. 108.
103 Entrevista CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.
104 Entrevistas CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010. Según información de varias fuentes, los campos de entrenamiento son móviles y se usan por aproximadamente tres meses.
105 Entrevistas CITpax en Villavicencio y Bogotá, octubre y noviembre de 2010.
106 El Tiempo, "La Policía frustró atentado terrorista en Villavicencio," 12 de agosto de 2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7859762.
107 Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre y noviembre de 2010.
108 "Policía del Meta explica las causas de los crímenes en Villavicencio," El Tiempo, 17 de marzo de 2010.
109 Según cifras de la Policía, desde 2005 a 2010, 18 de los 24 casos de asesinatos perpetrados contra desmovilizados corresponden a la modalidad de sicariato.
110 El Tiempo, "Hay pistas para capturar los sicarios que han sembrado muerte en Villavicencio," edición on-line, 17 de abril de 2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7610168
111 Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre y noviembre de 2010.
112 Entrevistas CITpax en Villavicencio, octubre y noviembre de 2010.

Público, en el desmantelamiento de una de las 'ollas' más grandes de la ciudad, la llamada 'Olla del Cero Uno'[113], se encontraron algunos desmovilizados.[114]

Hurtos
El robo ha aumentado en los últimos años y Villavicencio es una de las ciudades con más hurtos comunes a nivel nacional (véase arriba *Contexto de inseguridad*). Según varios observadores, los desmovilizados no son los mayores responsables de este tipo de crimen que atribuyen principalmente a la delincuencia juvenil. Sin embargo, se han conocido casos de desmovilizados que "delinquen por su propia cuenta". Una líder comunitaria mencionó el caso de dos jóvenes entre los 27 y 28 años conocidos en el barrio como desmovilizados, quienes se han dedicado a robar. En uno de sus robos, supuestamente mataron a un taxista. Según ella "estuvieron en la cárcel, uno de ellos ya ha sido puesto en libertad y llegó otra vez al barrio"[115].

1.5 Motivos de reincidencia

A continuación se presentan algunos factores de riesgo identificados por el equipo, que podrían facilitar el retorno a actividades ilegales por parte de ex combatientes en el caso de Villavicencio.

i. Contextos de ilegalidad

La presencia de contextos de ilegalidad en diferentes zonas de Villavicencio, y de modo general en toda la región de los Llanos Orientales, es una de las razones que ha conllevado a la reincidencia de algunos desmovilizados.[116] En estos escenarios se llevan a cabo constantemente actividades ilegales -bien sea por la operación de grupos armados ilegales como el ERPAC o las FARC-EP o por redes de delincuencia de alto alcance-, quienes han terminado convirtiéndose en potenciales saboteadores (*spoilers)*[117]del proceso de desmovilización y reintegración, pues varios desmovilizados ubicados en distintos puntos de la ciudad están viviendo "sistemáticas operaciones de reclutamiento"[118], implementadas mediante amenazas e intimidaciones, o bien mediante "ofertas atractivas" para ellos.

Es posible que el recurso a una u otra estrategia de reclutamiento se defina en virtud de la posición ocupada al interior de la organización (antiguo mando medio o combatiente raso), de la situación económica del desmovilizado, e incluso del grado de confianza existente entre el "reclutador" y el ex combatiente.

Amenazas e intimidación
En Villavicencio la presencia del ERPAC constituye una fuerte amenaza para varios ex combatientes, quienes han sido presionados para integrar esa estructura[119]. El testimonio de un desmovilizado raso de las Autodefensas entrevistado para este estudio refleja la existencia de esta estrategia de reclutamiento en la ciudad: "Me amenazaron para irme otra vez. Un tipo, anteayer, un desmovilizado me amenazó para salir de la ACR. El man [hombre] quiere que la gente vaya a trabajar. El man es costeño, dijo que era paraco. El man dijo que el programa era una mierda. Nunca antes me había pasado esto. Mucha gente se traslada por amenazas, pero yo no le paro bolas [no le hago caso]"[120].

Sin embargo, a pesar de la gravedad de este problema señalado reiteradamente por varios desmovilizados, algunos funcionarios cercanos al proceso manifiestan no tener conocimiento sobre amenazas provenientes de grupos armados para retornar a actividades ilegales, aduciendo que se trata de una problemática propia de otros municipios de la región[121].

---

113 Para mayor información, véase: El Tiempo, "Policía del Meta arremetió contra la 'olla' del Cero Uno", 14 de agosto de 2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5852649.
114 Véase también El Espectador, "Villavo, en la 'olla' de inseguridad," 8 de abril de 2009.
115 Entrevista CITpax en Bogotá, octubre de 2010.
116 Aunque los contextos de ilegalidad afectan obviamente no sólo a los desmovilizados sino a toda la población, es decir influyen para que tanto se vinculen nuevos integrantes, como se revinculen desmovilizados, sólo analizamos aquí el impacto de esos contextos en la reincidencia de los desmovilizados.
117 Stephen John Stedman, "Spoiler Problems in Peace Processes," en *International Security*, 1997, p. 5.
118 Carlos Otálora y CNRR, *Riesgos de la reintegración por reciclaje de desmovilizados,* octubre de 2009, http://www.cnrr.org.co/bcnrr/numero10/CNRR_boletin10ddr.pdf.
119 MAPP-OEA, *XI Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia*, 25 de junio de 2008, p. 9, http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/XIInformeEspanol.pdf.
120 Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.
121 Entrevista CITpax en Villavicencio, 10 de noviembre de 2010.

Ofertas económicas
Según una fuente institucional, por lo general los desmovilizados que viven en la legalidad "viven mal"[122]. Aun cuando varios ex combatientes han sido vinculados a la industria petrolera u otro tipo de actividades formales en auge en el departamento del Meta[123], varios de ellos se desempeñan en actividades informales como se ha indicado anteriormente, y en ocasiones, algunos desmovilizados han señalado que el dinero recibido de la ACR no les alcanza para cubrir la totalidad de sus necesidades y las de sus familias[124].

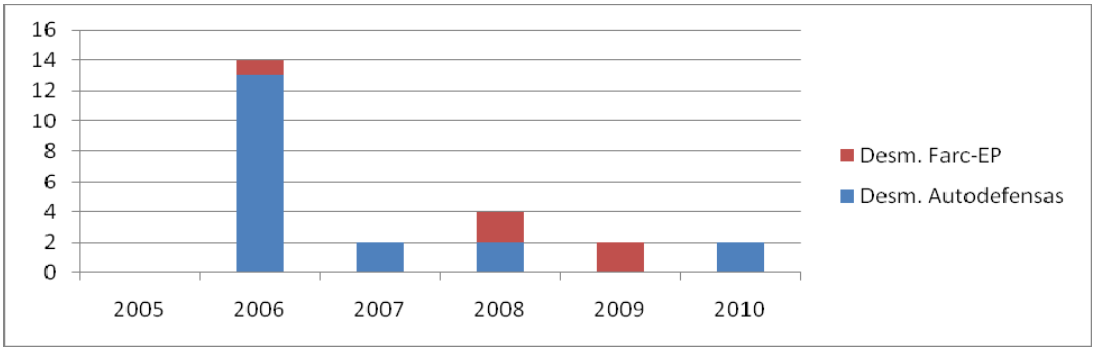
Según un artículo en Verdad Abierta, una de las razones que habrían justificado la rápida expansión del ERPAC en los Llanos Orientales consiste en los reclutamientos hechos por vía de la amenaza y con grandes sumas de dinero de por medio[125]. Un antiguo mando medio de las Autodefensas proveniente de la Costa Caribe nos manifestó en entrevista cómo algunas personas le han hecho diferentes propuestas para retornar a una organización armada ilegal: "Yo trato de que mucha gente no sepa quien soy, pero aún así, hace seis meses me hicieron una oferta para regresar"[126]. Aunque él manifestó no estar dispuesto a retornar a las armas, sí aseguró conocer muchos casos de antiguos compañeros que estarían recibiendo ofertas similares.

ii. Inseguridad física

Como se observó en la caracterización de la población desmovilizada, existen varios ex combatientes provenientes de distintas partes del país, que han llegado hasta Villavicencio buscando protección personal. Sin embargo, las posibles amenazas de viejos enemigos, la latencia del conflicto armado y su impacto en la ciudad y en el Meta, e incluso las ofertas de algunos antiguos compañeros para vincularse a nuevas estructuras, son algunas razones que habrían incentivado la reincidencia en actividades ilegales.

No obstante, no puede desconocerse que si bien respondiendo a esta problemática varios desmovilizados han retornado a la ilegalidad, otros se han convertido en víctimas de la inseguridad existente (véase Gráfica n° 6). Como el Área de DDR del Observatorio lo señala en su Segundo Informe, "la concentración de la población desmovilizada […] en zonas con altos niveles de inseguridad está teniendo efectos negativos en cuanto al desarrollo del proceso de reintegración".[127] Una evidencia de la situación aguda de inseguridad personal de personas desmovilizadas es el número de desmovilizados asesinados. Los desmovilizados son no solamente generadores de inseguridad sino también "víctimas de inseguridad" en Villavicencio (véase Gráfica n° 6).

Gráfica n° 6. Desmovilizados asesinados en Villavicencio (2005- 2 de diciembre de 2010)



Fuente: Policía del Meta

[122] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[123] Entrevista CITpax en Villavicencio, 13 de octubre de 2010.
[124] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[125] Verdad Abierta, "'Cuchillo' ya tiene más de 1.100 paramilitares y 'Martín Llanos' reorganizó sus autodefensas (El Tiempo)," 21 de septiembre de 2009, http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/rearmadados/1669-cuchillo-ya-tiene-mas-de-1100-paramilitares-y-martin-llanos-reorganizo-sus-autodefensas-el-tiempo.
[126] Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
[127] Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Segundo Informe*, CITpax, Madrid, noviembre de 2009, p. 9, http://www.citpax.org/descargarfichero.php?fichero=CITpax_Segundo_Informe_Observatorio_DDR_Ley_Justicia_y_Paz_Colombia_noviembre_2009.pdf.

Según distintas fuentes, la mayoría de desmovilizados residentes en la ciudad se ubican generalmente en barrios marginales[128], donde pueden asentarse con los recursos de los que disponen[129]. En ellos, la Defensoría del Pueblo ha encontrado "los mayores factores de riesgo asociados al rearme, la realización de actividades criminales y la vinculación a redes de sicariato"[130], pues han sido identificados como lugares donde existen distintos circuitos de ilegalidad en los cuales, como se expuso en párrafos anteriores, se lleva a cabo el reclutamiento de integrantes para actividades delictivas.

iii. Inseguridad jurídica

Al igual que muchos desmovilizados en el país, los ex combatientes de Villavicencio entrevistados para este estudio manifestaron su preocupación sobre el estado actual de su situación judicial. Uno de ellos, al poco tiempo de llegar a la ciudad fue capturado por concierto para delinquir, aunque pagó una condena de tres años de casa por cárcel con permiso para estudiar y trabajar, que cumplió en su totalidad. El entrevistado manifestó su temor de que otros compañeros sufran esa misma situación y decidan retornar a una organización armada[131]. Otro ex combatiente advirtió que muchos de sus antiguos compañeros, e incluso él mismo en alguna oportunidad, están siendo citados por la Fiscalía; aunque dijo no conocer muy bien las razones, se refirió a las posibles consecuencias de esa situación de la siguiente manera: "están citándolos a todos; yo creo que la cosa se va a volver a calentar".

Como ellos existen otros desmovilizados preocupados por esta cuestión y la de sus antiguos compañeros. Según un desmovilizado de Villavicencio entrevistado por el diario *El Tiempo*, "cuando entramos al proceso nos dijeron: Si usted no debe nada, queda libre. Si debe, tiene que pagar […] muchos piensan que si el Estado les cierra las puertas, abandonan el proceso. Es que no se sabe qué va a pasar con esa Ley. Puede ser para bien o para mal"[132].

iv. Fallas en el programa de reintegración

Las expectativas frustradas de algunos desmovilizados frente a los beneficios que recibirían por parte de la ACR ha sido identificada por algunos de ellos y por organizaciones no gubernamentales como una de las causas de reincidencia en actividades ilegales en la ciudad. Según algunos desmovilizados muchos de sus antiguos compañeros han retornado a organizaciones armadas ilegales "porque el gobierno les incumple económicamente"[133]. Según otro desmovilizado, a él le parece "que cuando los muchachos dejen de recibir el dinero de la ACR pueden recomponer el grupo"[134].

En enero de 2007, en el marco de un consejo de seguridad, el entonces Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, aceptó que cerca de la tercera parte de ex combatientes en el Meta habrían retornado a la ilegalidad: "efectivamente se ha detectado problemas graves con los desmovilizados y al aceptar que en muchas regiones, incluyendo al Meta, no está llegando el apoyo acordado, se está haciendo esfuerzos por reparar los errores"[135]. Varios desmovilizados entrevistados para este informe han manifestado de manera recurrente las dificultades a las que se enfrentaron muchos de sus compañeros al inicio de su programa de reintegración debido a las fallas que se presentaron en el programa a nivel regional. Uno de ellos lo expone de la siguiente manera: "Al principio mucha gente se fue (no tenían trabajo, no recibían plata de la ACR). No podría estimar cuántos eran pero muchos se han ido. A otros no les llega el pago, entonces se meten a delinquir. La ACR no soluciona nada, a mí tampoco me solucionó nada para lo del proyecto productivo. [Una ONG] sí me ayudó más"[136]. A esto se suman otras voces que cuestionan el supuesto "paternalismo" de la ACR frente a los desmovilizados actualmente. A su juicio, "cuando a los desmovilizados les corten el chorro"[137], no tendrán más remedio que retornar a la ilegalidad.

---

128 Entrevistas CITpax en Villavicencio, 14 de octubre y 10 de noviembre de 2010.
129 Entrevista CITpax en Villavicencio, 10 de noviembre de 2010.
130 Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 11.
131 Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
132 El Tiempo, "Desmovilizados de la Auc del Meta temen por su situación jurídica", 3 de diciembre de 2010, http://www.eltiempo.com/colombia/llano/situacin-jurdica-de-los-desmovilizados-del-meta_8515260-4.
133 Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
134 Ibíd.
135 Llanera, "Gobierno confirma que la tercera parte de desmovilizados se rearmaron. En el Meta no saben la cifra oficial de reinsertados. Se acuerda seguimiento al proceso y programas." 16 de enero de 2007.
136 Entrevista CITpax en Villavicencio, 12de noviembre de 2010.
137 Entrevista CITpax en Villavicencio, 13 de octubre de 2010.

v. Experiencia militar

El conocimiento militar y sobre labores de inteligencia de algunos desmovilizados realza su vulnerabilidad frente a eventuales propuestas de grupos armados ilegales como el ERPAC. Esta estructura post-desmovilización ha asistido durante los últimos tres años a una gran expansión en distintos puntos del país, concentrándose con especial fuerza en la región de los Llanos Orientales. Según algunos informes de inteligencia del Ejército y del CTI, dicha estructura habría propasado los mil combatientes, gracias a operaciones sistemáticas de reclutamiento.[138] En este escenario, cada una de las personas que forman parte del ERPAC es vinculada a actividades con base en su experiencia.[139] Quienes tienen una trayectoria militar considerable se desempeñarían en tareas de liderazgo y mayor relevancia para la estructura; quienes no, generalmente son vinculados como puntos de contacto e información e incluso como sicarios.[140]

Según la Defensoría del Pueblo, "[…] los desmovilizados son catalogados como "mano de obra calificada", que al encontrarse en situaciones particulares de vulnerabilidad pueden contribuir a la expansión de las nuevas agrupaciones"[141]. La experiencia militar adquirida en los grupos de los que formaban parte ha preocupado a varias personas en la ciudad. Incluso un ex combatiente manifestó: "el desmovilizado sale siendo una "máquina de guerra" y es muy difícil que se resocialice. Por eso los programas deberían dictar cosas que sirvan verdaderamente para algo"[142].

vi. Ausencia de arraigo

Si bien no son muy numerosos los afectados por esta situación, la proveniencia de otras zonas del país y la llegada en solitario a una ciudad como Villavicencio son variables que potencian el riesgo de delinquir para un ex combatiente. Según funcionarios cercanos al proceso, quienes no tienen un arraigo en función de una familia, un hogar o empleo estable, son el tipo de personas que muchas veces tienen un pie en la ACR y el otro en acciones ilegales.[143] Según la esposa de un desmovilizado de Villavicencio, "si en algo ha fracasado el proceso es porque ellos [los desmovilizados] han estado solos, sin familia y sin acompañamiento"[144].

1.6 Conclusiones

Existen percepciones que ligan a los ex combatientes con el aumento de inseguridad en la ciudad de Villavicencio. Según un sociólogo entrevistado por el diario *El Espectador*, "el retiro de la guerra de más de tres mil desmovilizados en el Llano, de cuatro grandes grupos de autodefensas que actuaban en esta región, empieza a tener consecuencias en la seguridad ciudadana. Muchos de estos jóvenes salieron de combatir y llegaron a Villavicencio y a otros grandes centros urbanos a esperar la ayuda integral del Gobierno y se dieron cuenta de que no les era rentable económicamente"[145]. Sin embargo, existe poca evidencia estadística que identifique a los desmovilizados como una pieza clave en la actual coyuntura de inseguridad en Villavicencio. Este tipo de percepciones se debe entonces o bien a una exageración de la realidad existente o bien a que las cifras sobre la participación de desmovilizados en actividades ilegales muestran sólo una parte de la realidad.

Si consideramos las cifras –que pueden estar afectadas por sub-registros–, la participación de ex combatientes en actividades ilegales es relativamente baja (4,3% de los capturados por concierto para delinquir, 4% por extorsión y 3,8% por homicidio). Entonces, la percepción de los pobladores sobre los desmovilizados como responsables en gran número de este tipo de delitos, a menudo relacionados con la delincuencia organizada o grupos armados ilegales, sería errónea. Y si tenemos en cuenta el porcentaje de desmovilizados que han sido capturados en algún momento posterior a su desmovilización, para el caso de Villavicencio se puede calcular más o menos 7% de reincidencia, lo que es una tasa comparativamente baja con el promedio nacional. Adicionalmente, la mayor parte de desmovilizados capturados y asesinados se presentaron en los dos primeros años posteriores a la desmovilización (2006 y 2007).

---

138 Verdad Abierta, "'Cuchillo' ya tiene más de 1.100 paramilitares y 'Martín Llanos' reorganizó sus autodefensas (El Tiempo)."
139 Entrevista CITpax en Bogotá, 16 de octubre de 2010.
140 Ibíd.
141 Defensoría del Pueblo, *Informe de Riesgo No. 006 de 2010*, p. 12.
142 Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
143 Entrevistas CITpax en Villavicencio, 13 y 14 de octubre y 11 de noviembre de 2010.
144 Entrevista CITpax en Villavicencio, 11 de noviembre de 2010.
145 El Espectador, "Villavo, en la 'Olla' de la Inseguridad", 4 de agosto de 2009.

Cuando se trata de explicar el reciente aumento de la inseguridad en Villavicencio es necesario tener en cuenta otros factores como el rápido crecimiento de la ciudad debido al desarrollo económico que ha ido acompañado de la llegada de un gran número de desplazados buscando oportunidades, así como las dinámicas post-desmovilización. Creemos que la desmovilización – no los desmovilizados como personas – ha cambiado el contexto de seguridad en un nivel estructural. Donde había un uso de violencia monopolizado por los grupos de autodefensa, se han presentado disputas por el control territorial que han causado más violencia. Además, tales grupos controlaron hasta cierto grado la delincuencia en barrios marginales de Villavicencio con un sistema paralelo de administración de justicia, suponiendo la implementación y consolidación del Estado de derecho importantes desafíos para las autoridades.

Para concluir, en el caso de Villavicencio el tema de reincidencia de antiguos miembros de grupos armados no parece ser alarmante. Basado en un ejercicio de observación en terreno y en cifras de las autoridades, es posible afirmar que la mayoría de los desmovilizados no se han dedicado en ningún momento a actividades ilegales y su participación en los delitos registrados en Villavicencio no es muy significativa.

2. Montería

2.1 Contexto de inseguridad

Montería es una ciudad intermedia, localizada en la parte sur de la costa Caribe colombiana, capital del departamento de Córdoba con una población de 409.476 habitantes (313.593 en el núcleo urbano y 95.883 en áreas rurales). La ciudad representa el 19,8% de la población del departamento que es de 1.582.718 personas según proyección del DANE. En los últimos años la ciudad ha cambiado, en especial la zona céntrica y las que corresponden a los barrios de estratos medios y altos. Se nota el dinamismo y ampliación del comercio representado en miles de negocios, consultorios, oficinas y talleres de todos los niveles y tamaños. Las viviendas cuentan con servicios adecuados para el suministro de agua y alcantarillado, energía eléctrica y gas, así como para la recolección de basuras. Por sus calles transitan cada vez más vehículos y miles de motociclistas, la mayoría convertidos en moto-taxistas porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Mejoramiento en los parques y otros espacios públicos dan un aspecto de ciudad organizada y limpia.[146]

La importancia de Montería para las distintas clases de inversores, así como para los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares, narcotráfico y los de la post-desmovilización) radica en que es el centro político, administrativo, judicial, financiero, comercial, empresarial y de educación superior no sólo del departamento sino de zonas de Sucre, los Urabá antioqueño y chocoano y el bajo Cauca. Desde hace varios años, antes de la desmovilización, se convirtió en lugar propicio para invertir con dineros lícitos e ilícitos, no sólo porque el medio centenar de asentamientos informales que hacen parte de su población les aporta una numerosa mano de obra de adolescentes y jóvenes sin oportunidades de estudios técnicos o profesionales ni de empleo, y que tienen familias incompletas y problemas de convivencia en un medio de alto nivel de riesgos sociales, sino además por la cercanía y colaboración que mantuvo la dirigencia del departamento con los principales jefes paramilitares de las AUC, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.

Existen varias explicaciones sobre la situación de inseguridad en la ciudad. Nos limitaremos a las que creemos tienen mayor incidencia: la permanencia del conflicto armado, los altos índices de desempleo e informalidad, la pobreza y la exclusión social y la violencia doméstica y comunitaria.

1. La permanencia del conflicto armado.
El departamento de Córdoba ha pasado por sucesivos períodos de conflicto armado, varios acuerdos de paz y un proceso de negociación que han involucrado a poblaciones de distintos municipios.[147] Los cambios que han

[146] Víctor Negrete B., *Carta a un cordobés ausente,* Semanario virtual Caja de herramientas, Edición 217, 30 de julio de 2010 y *La situación de Córdoba requiere con urgencia un manejo integral,* Edición 177, 25 septiembre 2009. *Montería: entre la villa soñada y el Miami costeño,* Documentos para la reflexión n° 1, Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú Montería, 2006, pp. 33-38.

[147] Ver Víctor Negrete B., *Situación de conflicto y pobreza en el departamento de Córdoba y perspectivas de paz,* Acción contra el Hambre y otros, Montería, 2008, pp. 11-34. Víctor Negrete B., *Córdoba en emergencia: la actual fase del conflicto. Semanario virtual,* Edición 163, 19 de junio de 2009. Los periodos de conflicto son los siguientes: a) Enfrentamiento liberal-conservador (1949-1959), con presencia de guerrillas liberales en el alto Sinú y San Jorge y en límites con el Urabá antioqueño. Involucró a poblaciones de Montería, Tierralta (incluyendo Saiza), Canalete, Montelibano, Puerto Libertador, San Carlos, Chimá, Ayapel. b) Expansión terrateniente (1960-1966) en Montelíbano y Puerto Libertador, a punta de despojos de tierras, homicidios, desplazamientos y violaciones ejecutados por sicarios del interior del país. c) Surgimiento, desarrollo y

originado son profundos en todos los sentidos, especialmente en la inseguridad.

En los últimos 25 años, a Montería han llegado más de 70.000 desplazados por la violencia, calamidades naturales y pobreza en el campo. Hay más de 3.000 víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación. En el año 2010 hubo 10 masacres en Córdoba, una de ellas en Montería, a escasas calles de la Casa de Justicia.

Por otra parte, la Policía informó que hasta el 27 de noviembre de 2010, habían hecho 4.955 capturas en el departamento por diferentes delitos, incluyendo miembros de las llamadas bandas emergentes Los Paisas, Rastrojos y Urabeños; decomisado cocaína, base de coca, bazuco y marihuana; incautado armas y recuperado motocicletas. Indicó también que hay más de 6.000 solicitudes de escoltas, la mayoría de dirigentes políticos y funcionarios públicos.

El director del CTI de la Fiscalía declaró que en Córdoba hay 1.150 desaparecidos en los últimos años. El 20% de estas desapariciones en Montería han sido cometidas por los grupos armados ilegales, el resto son voluntarias o por establecer. En 2009 hubo 415 personas desaparecidas y en el 2010 la cifra llegó a 219.[148]

2. Altos índices de desempleo e informalidad.
El DANE dio a conocer que en el año 2009 había 238.000 personas en edad de trabajar. De estas, 137.000 estaban ocupadas: 42.000 en actividades formales y 95.000 en actividades informales. Las principales labores que desempeñaban (44.000 personas) eran el comercio, o las actividades en restaurantes y hoteles; en los servicios comunales, sociales y personales trabajaban 38.000; 18.000 trabajaban en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones y 18.000 también en el sector de la industria manufacturera. Esta última abarca las confecciones, embotelladoras, frigorífico, artesanías, bisutería, calzado, panadería, carpintería, alimentos y bebidas, muebles y enseres metálicos y talleres industriales, entre otros. La tasa de desempleo en el 2008 fue de 12,9 y de 15,8 en el 2009.[149]

3. Pobreza.
El municipio de Montería tiene aproximadamente 80.000 familias. De éstas, el programa Familias en Acción de la Presidencia de la República[150] atiende a 61.716 menores de 38.387 familias, siendo 8.916 desplazados y estando 52.800 inscritos en el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN). El porcentaje de familias en el municipio que se encuentran en el umbral de la pobreza representa el 72% de la población total, es decir, 294.822 personas. Esto significa que 233.106 menores no reciben los beneficios del SISBEN.[151]

4. Exclusión social y violencia intrafamiliar y comunitaria.
En Montería viven gran número de desplazados, desmovilizados, victimas, potenciales y activos miembros de grupos armados ilegales, desempleados y pobres del departamento y es el lugar con mayor número de homicidios y actos de inseguridad. Habitan en asentamientos y barrios populares, trabajando en el sector informal; los niños, adolescentes y jóvenes están expuestos a agresiones, violaciones, delincuencia y reclutamiento por parte de pandillas, mafias y grupos armados ilegales; la violencia intrafamiliar y comunitaria es bastante alta y la inseguridad ciudadana es un hecho; los suicidios ocurren con frecuencia. El consumo de

desmovilización de la guerrilla de izquierda Ejército Popular de Liberación (EPL) (1967- 1991) y otros grupos que incursionaron en el departamento y se desmovilizaron a principio de la década de los noventa como la Corriente de Renovación Socialista y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Las FARC desde mediados de la década de los ochenta se encuentran en el sur y en límites con Antioquia. d) Surgimiento y fortalecimiento del proceso de las Autodefensas en la región Caribe (1985-2002) con la presencia de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente y otros paramilitares. Entre Córdoba y Urabá nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y Córdoba fue "la casa paterna" de la AUC. En el departamento operaron seis bloques de las AUC (Casa Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová, Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas), los frentes 5,18 y 58 y una columna móvil de las FARC. e) Proceso de negociación del Gobierno con las AUC (2003-2006). f) Surgimiento de los cuatro grupos de la post-desmovilización (2006-2010). En la actualidad han conformado dos grandes grupos (Urabeños y Los Paisas-Rastrojos) con presencia en los 30 municipios del departamento.

[148] El Meridiano de Córdoba, Montería, 2 de enero de 2011; Montería, 4 de diciembre de 2010; Montería, 27 de noviembre de 2010; Montería, 22 de noviembre de 2010.

[149] Banco de la República y DANE, *Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER Córdoba 2009*.

[150] El programa Familias en Acción de la Presidencia de la República está dirigido a familias del nivel 1 del SISBEN, los de pobreza extrema y desplazados por la violencia con hijos menores de 6 años y entre 7 y 18 años que reciben subsidios escolares y de nutrición.

[151] Acción Social, Programas Familias en Acción y Red Unidos, Montería, 2011.

estupefacientes va en aumento y el microtráfico se extiende cada día[152].

2.2 La población desmovilizada

En el departamento se desmovilizaron los grupos Córdoba, Héroes de Tolová y el Anillo de seguridad. El Elmer Cárdenas, Montes de María y el Minero con presencia en el departamento lo hicieron en otros lugares.

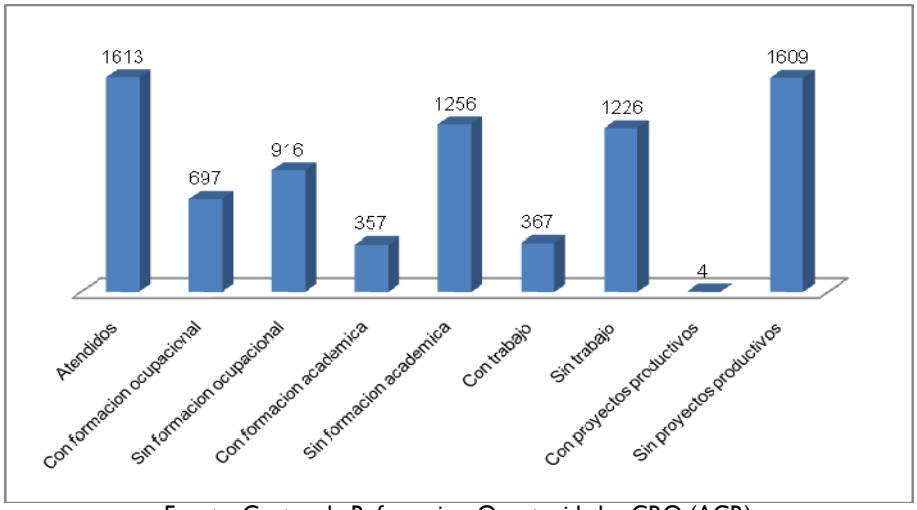
En los actos de desarme y desmovilización que muchos presenciaron en la plaza de Santa Fe de Ralito en la Zona de Ubicación en Tierralta, hubo dos hechos que llamaron la atención: a. Un alto número de combatientes no estuvieron de acuerdo con la desmovilización. b. Los comentarios de personas con conocimientos en la materia, que aseguraban que no todos los grupos estaban desmovilizándose y que en las últimas semanas un número indeterminado de jóvenes de los barrios populares y asentamientos informales en Montería fueron reclutados para participar en el evento.

La cifra de los 1.690 desmovilizados oficialmente en los dos actos del año 2005, pertenecientes a los bloques Córdoba y Héroes de Tolová más el Anillo de seguridad de la Zona de Ubicación compuesto entonces por 300 hombres, fue creciendo a medida que pasaban los meses hasta completar 3.783, el 8,4% aproximadamente de los desmovilizados del país. Esto fue debido al retorno de población desmovilizada en otros lugares del país hacia los municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica y Buenavista. Según las cifras de la Alta Consejería para la Reintegración, el número de combatientes cordobeses que hicieron parte de diferentes bloques en distintos lugares del país fueron las siguientes: Mineros 706, Catatumbo 410, Central Bolívar 191, Héroes de Granada 150, Norte 148, Vencedores de Arauca 132, Pacífico 131 y resto de bloques 794. Además de esta cifra, la Policía sospechaba que había una población flotante de 1.000 desmovilizados aproximadamente que no aparecieron registrados pero estuvieron vinculados en los distintos bloques.

La información disponible permite conocer algunas características de los desmovilizados de base en los aspectos de formación ocupacional, académica y trabajo, edad y género, lugares de residencia, violencia intrafamiliar y comunitaria en la que están inmersos, rasgos sicosociales y otros aspectos que también inciden en sus personalidades y conductas.

i. Formación ocupacional, académica y trabajo.
La mayoría de los desmovilizados eran de Montería. De 1.613 registrados el 56,7% carecía de formación laboral u oficio conocido de ninguna clase, el 77,8% no contaba con formación académica, el 76% estaba desempleado y el 99,7% no hacía parte de ningún proyecto productivo. Estas limitaciones tan marcadas representaron un gran reto para la reinserción.

Gráfica n° 9. Desmovilizados con formación ocupacional, académica, trabajo y proyectos productivos (2006)

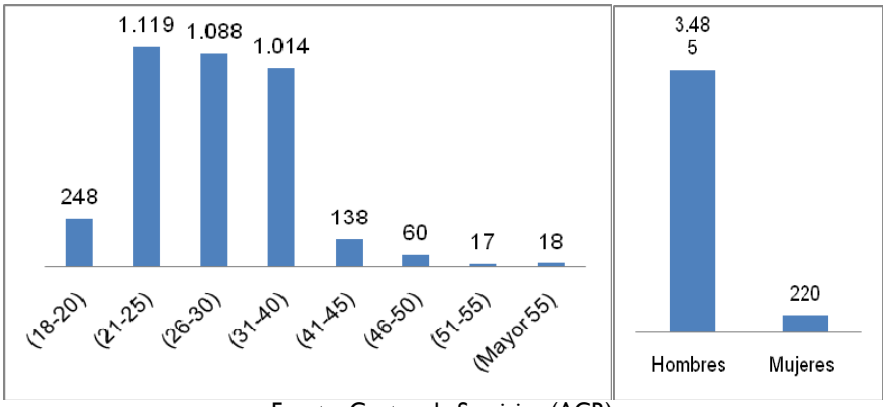


Fuente: Centro de Referencia y Oportunidades CRO (ACR)

[152] Víctor Negrete B., *Carta a un cordobés ausente*, Semana del 24 al 30 de enero de 2010, www.razónpublica.com.

ii. Edad y género.
De los desmovilizados el 87% tenía edades comprendidas entre 21 y 40 años, el 6,6% entre 18 y 20 años y el 6,2% entre 41 y más de 55 años. Es decir, el 93,2% estaba apto para trabajar y capacitarse, o volver a las armas y a las actividades ilegales. La gran mayoría eran hombres (94%).

Gráfica n° 10. Edad y género de los desmovilizados

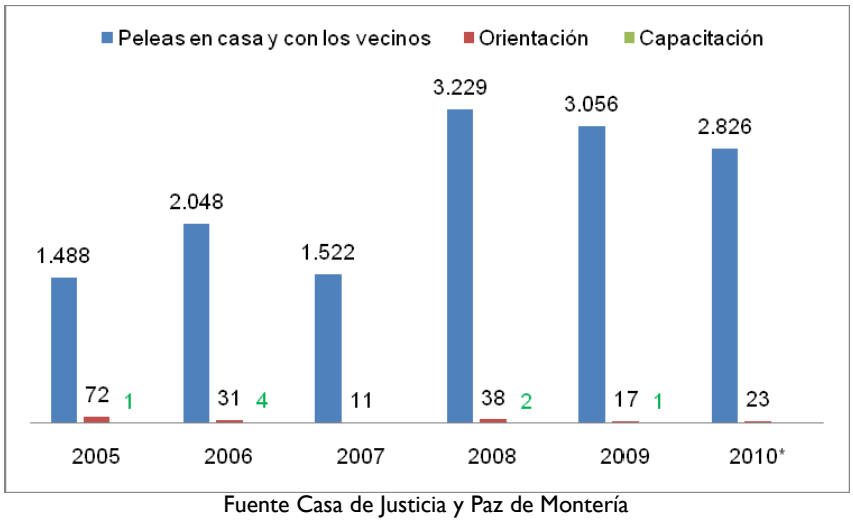


Fuente: Centro de Servicios (ACR)

iii. Violencia intrafamiliar y comunitaria.
Otro factor que es necesario tener en cuenta en el medio donde viven los desmovilizados es la violencia intrafamiliar y comunitaria. Desde el año 2005 funciona en Montería la Casa de Justicia y Paz, atendida por oficinas de la Fiscalía, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Personería, Consultorio Jurídico, Bienestar Familiar, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y servicios de Sicología y Trabajo Social. A ella acuden personas de más de 30 barrios humildes en busca de solución a los problemas que se les presentan en sus casas y vecindades, como peleas o conflictos caseros y con los vecinos, incumplimiento de contratos, delitos, calumnias, no pago de arriendos o servicios y en general por violación de derechos humanos. También dictan capacitaciones, llevan a cabo conciliaciones y prestan servicio de orientación sicológica.

Desde su creación hasta noviembre de 2010, ha atendido 20.312 consultas. El 69,7% de las consultas, 14.169 casos, tienen que ver con la existencia de problemas familiares y con los vecinos, seguido por incumplimientos de contratos con el 7,1%, los delitos con el 5,1%, las calumnias con el 2,4% y casos relacionados con atención en salud, servicios públicos y asuntos laborales con el 2,2%. Llama la atención que 192 personas, el 0,9%, acudió en busca de orientación y sólo 8 personas en busca de capacitación.

Gráfica n° 11. Casos de consulta en la Casa de Justicia y Paz de Montería (2005 – noviembre de 2010)



Fuente Casa de Justicia y Paz de Montería

iv. Rasgos sicosociales.
Al empezar el proceso de reintegración, los grupos de desmovilizados presentaron las siguiente características socioafectivas según los estudios efectuados por los profesionales de la ACR: fuerte cohesión de grupos, dificultad para establecer lazos afectivos, altos niveles de desconfianza, alto nivel de agresividad, autoritarismo en sus relaciones interpersonales, poco desarrollo de habilidades de convivencia, preocupación por su seguridad personal, sentido de responsabilidad y disciplina militar.

Estas características coinciden con el estudio comparativo llevado a cabo por el sicólogo Gustavo Brunal[153] en la cárcel nacional Las Mercedes de Montería a dos grupos de personas condenadas por delitos graves y delitos menores y un grupo en libertad. El primer grupo lo integraron 113 desmovilizados postulados a la Ley 975 de 2005, acusados de concierto para delinquir agravado, homicidios, desaparición forzada, masacres y torturas. De acuerdo con el estudio el promedio de edad del grupo era de 30 años, 50% solteros, 40% vivía en unión libre, con frecuentes separaciones de sus parejas. El 40% hacía parte de familias nucleares, 46% tenía comunicación con los padres, el 14% manejaba una relación inadecuada con los padres y el 30% poca comunicación con los hermanos. El 26% con antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas y 8% de sustancias sicoactivas. El 28% con antecedentes de ausentismo escolar, 36% perdió años escolares, 22% fueron expulsados de colegios y 71% presentaron problemas de conducta durante su vida escolar. En convivencia social el 10% tuvo problemas con las familias y el 46% con la autoridad. En cuanto a figuras sustitutas más representativas fueron los abuelos para el 35,7%, amigos para el 28,6% y hermanos para el 21,4%. El 89,4% del grupo presentó rasgos sicopatológicos.

Según el estudio, *"los integrantes de este grupo están conformados por personas que no confían en los demás, tienen antecedentes de comportamientos impulsivos, especialmente en la edad escolar. Igualmente presentan problemas con las autoridades legalmente establecidas y con su familia por su poco respeto a las normas. Se consideran personas irritables, resentidas, desafiantes y difíciles en su trato. Han tenido antecedentes de crímenes violentos, mostrando insensibilidad ante las consecuencias sociales de su propia conducta, no aceptando responsabilidad por su propio comportamiento."*

"De esta manera, en la medida que el medio sociocultural favorezca las acciones delictivas de estos grupos, se contribuirá a la producción y reproducción de este fenómeno. El estudio confirma la relación existente entre las variables psicológicas y sociales y su influencia en las diferentes modalidades delictivas cometidas por los integrantes del grupo."

2.3 Participación de desmovilizados en delitos

La Policía acusa a numerosos desmovilizados de cometer homicidios o de participar en este tipo de delito, de fabricación y porte de armas, de cometer hurtos, daños en bien ajeno y consumo de estupefacientes. En las investigaciones de la Fiscalía aparecen vinculados por hurto, homicidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. La ciudadanía en general les asocia con asesinatos, drogas, juegos de azar, robos, amenazas, intimidación, con los moto-taxis (que siempre relacionan con actividades ilícitas), sicariato, violencia contra sus mujeres e hijos, riñas y venganzas.[154]

A principio de enero de 2011 en la cárcel nacional de mediana seguridad Las Mercedes de Montería había 1.217 internos sindicados y condenados por distintos delitos. Entre los principales figuran: 338 por homicidios, 314 por concierto para delinquir. 127 por tráfico de estupefacientes, 126 por porte ilegal de armas, 103 por hurto calificado y agravado, 95 por acceso carnal violento y abusivo, 37 por extorsión y 14 por rebelión y terrorismo. Del total estaban108 postulados a Justicia y Paz y 382 vinculados a las llamadas "bandas criminales". De estos últimos 152 aproximadamente son desmovilizados.[155]

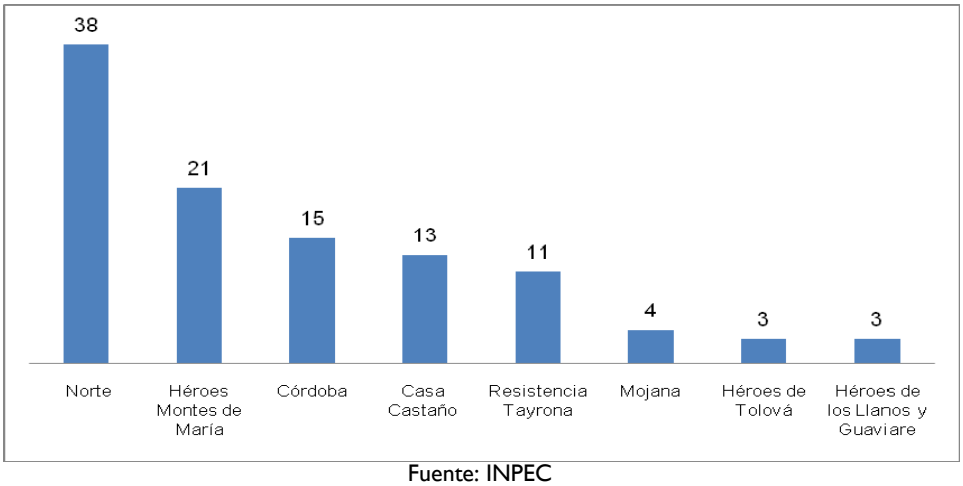
1. Características de los postulados a Justicia y Paz.

La siguiente información, contenida en fichas del INPEC, proporciona datos valiosos sobre los postulados y las perspectivas reales de su reintegración. Se hace énfasis en los aspectos más relacionados con los objetivos del estudio.

[153] Gustavo Bernal, "Perfil psicosocial de personas condenadas por delitos de homicidio en comparación con delitos menores y población libre del departamento de Córdoba", Trabajo de grado, Universidad del Norte, Barranquilla, 2010, sin publicar.
[154] Conversaciones con la Unidad de la Policía que atiende a desmovilizados, funcionarios de la Fiscalía y representantes de organizaciones no gubernamentales. Montería, octubre y noviembre de 2010 y enero de 2011.
[155] Entrevistas con funcionarios del INPEC en Montería, diciembre de 2010 y enero de 2011.

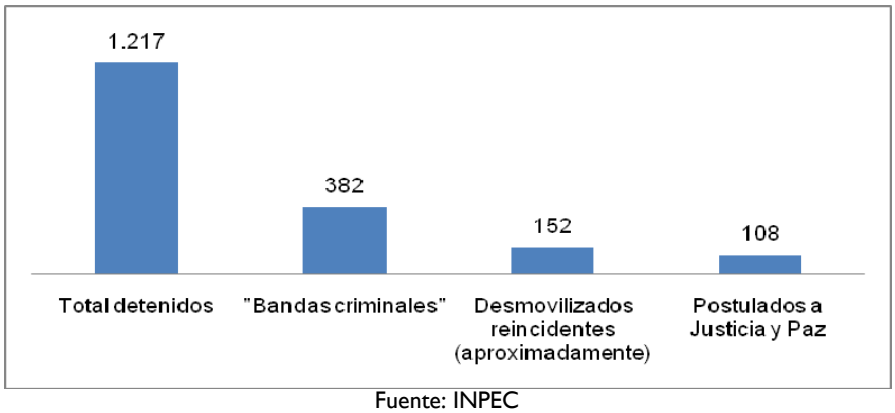
Los 108 postulados a Justicia y Paz pertenecieron a los siguientes bloques: Norte, Héroes Montes de María, Córdoba, Casa Castaño, Resistencia Tairona, Mojana, a Héroes de Tolová y Héroes del Llano y Guaviare.

Gráfica n° 12. Bloques a los que pertenecían los postulados a Justicia y Paz detenidos en la cárcel de Montería (2010)



Fuente: INPEC

Gráfica n° 13. Número y clases de Internos en la cárcel de Montería (2010)



Fuente: INPEC

Los motivos por los que ingresaron al grupo armado ilegal fueron las siguientes: por falta de oportunidades laborales (22), de manera voluntaria (17), por falta de oportunidades académicas (14), por estar de acuerdo con la ideología (9), por desempleo (5), venganza (9), seguridad, conflicto familiar, reclutamiento forzoso y por ir contra la guerrilla (3 en cada caso), retaliación, seguridad, resentimiento contra las fuerzas militares y rechazo social (1 en cada caso), y sin datos (16). Los integrantes (patrullero 48, comandante 19, operador 4, enfermero 2, escolta 2, recaudador de extorsiones 1, encargado de finanzas 1, informante 1, sin datos 30) permanecieron de 1 a 3 años (36); de 4 a 7 años (28); de 8 en adelante (18) y sin datos (26).

En relación con su formación y experiencia laboral, 42 tienen el grado de bachiller incompleto, 11 lo han completado; 28 no han acabado la educación primaria (mientras 5 sí la han completado) y no existe información sobre 21.

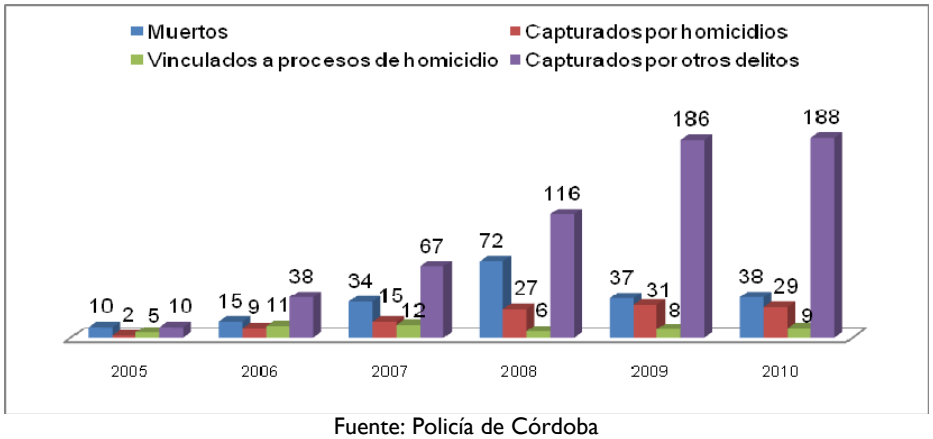
La mayor parte tienen experiencia en actividades agrícolas (14), siendo los restantes conductores (9), ganaderos (8), albañiles (7), artesanos (5), vigilantes (5), mecánicos (4), vendedores (3), administrador de finca, operador de máquinas, electricista, ebanistería y reparador de electrodomésticos (2 en cada caso), y minero, comerciante, enfermería, farmaceuta, amansador y carnicero (1en cada caso), entre otros.

En relación con su situación procesal, 50 habían estado recluidos anteriormente; 39 no, y no existen datos sobre 58. 26 han sido condenados, 24 imputados (y de 58 no existen datos). Los motivos por los que algunos han sido detenidos son homicidios (51), concierto para delinquir (30), extorsión y porte ilegal de armas (3 en

cada caso), desaparición forzada y tráfico de estupefacientes (2 en cada caso), terrorismo, rebelión y secuestro (1 en cada caso).

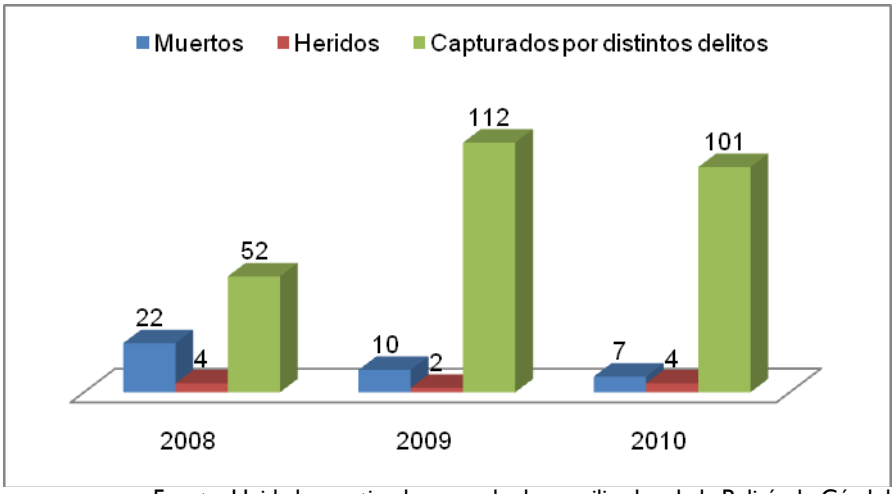
A continuación se muestran a través de las Gráficas, el número de desmovilizados muertos y capturados: 206 desmovilizados muertos de forma violenta y 769 capturados y vinculados por otros delitos para un total de 975 casos en Córdoba. En Montería los muertos llegan a 56 (desde el 2005, ver Gráfica n° 2), 10 heridos y 265 capturados por distintos delitos. La Gráfica n° 15 recoge los datos sobre desmovilizados a partir del 2008 cuando la Policía creó una unidad encargada de hacer seguimiento estadístico a este grupo.

Gráfica n° 14. Desmovilizados muertos y capturados en Córdoba (2005-2010)



Fuente: Policía de Córdoba

Gráfica n° 15. Desmovilizados muertos, heridos y capturados por diferentes delitos en Montería (2008 – noviembre de 2010)



Fuente: Unidad que atiende casos de desmovilizados de la Policía de Córdoba

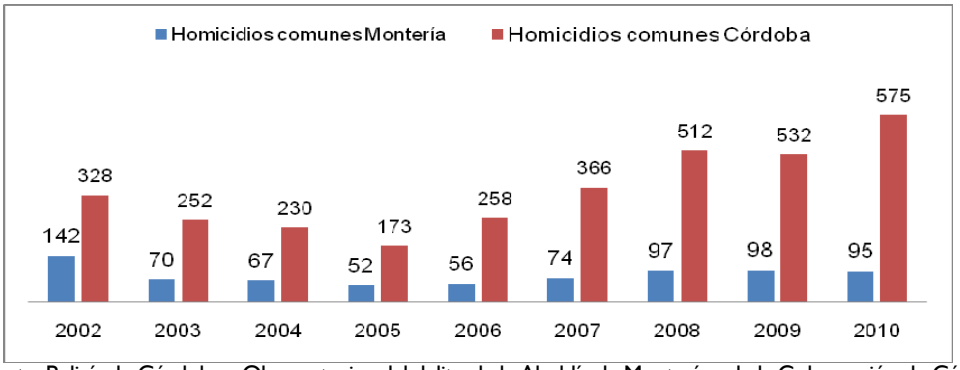
2.4 Tipo de delitos cometidos

En cuanto a inseguridad, la ciudad presenta un cuadro preocupante de delitos de distintos tipos. Sobresalen los homicidios comunes y de desmovilizados, lesiones comunes, hurto a personas, residencias, comercio y motocicletas, incautación de drogas, tráfico de estupefacientes y reclutamientos.

1. Homicidios comunes.

El año anterior al proceso de negociación con las AUC (2002), Montería registró una de las cifras más altas de su historia en homicidios comunes. Durante los tres primeros años que permaneció el proceso (2003-2005) las cifras bajaron y aún sin terminar la desmovilización en otras partes del país, empezó a crecer y así se ha mantenido hasta el presente; lo mismo sucedió con los homicidios en el departamento como se puede apreciar en la siguiente Gráfica. El porcentaje de muertos en Montería equivale al 23,2% del total departamental.

Gráfica n° 16. Homicidios comunes en Montería y Córdoba (2002-2010)

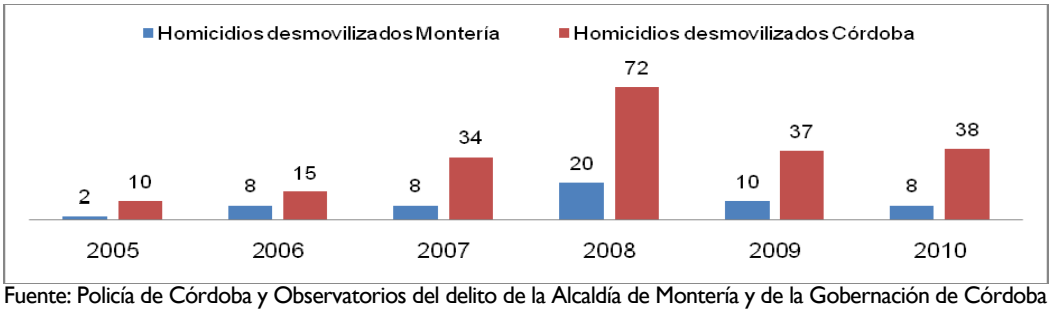


Fuente: Policía de Córdoba y Observatorios del delito de la Alcaldía de Montería y de la Gobernación de Córdoba

2. Homicidios de desmovilizados.

Entre el 2005 y el 2010 el número de desmovilizados muertos en Montería fue de 56 y en el departamento de 206. El año crítico fue 2008 cuando mataron a 20 y 72 respectivamente, debido, al parecer, a una especie de campaña adelantada por los nuevos grupos con el fin de reagrupar de manera voluntaria o bajo presión de amenazas o muertes a ex compañeros con experiencias y conocimientos sobre el oficio, además de venganzas, peleas y resultado de actividades delictivas[156].

Gráfica n° 17. Homicidios desmovilizados en Montería y Córdoba (2005-2010)

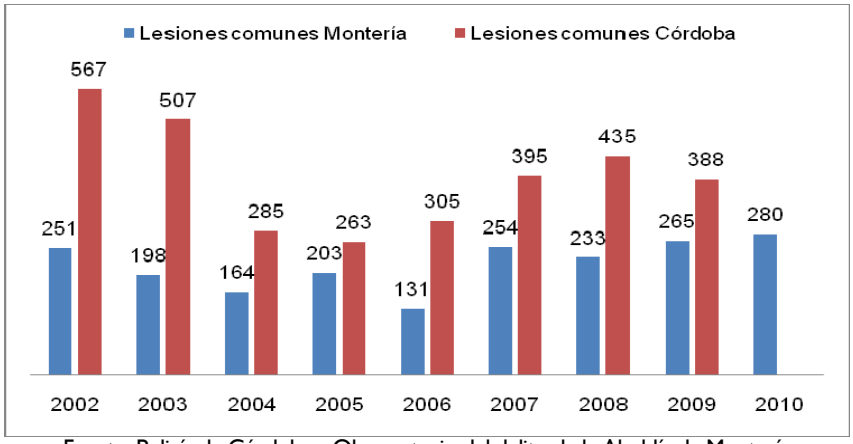


Fuente: Policía de Córdoba y Observatorios del delito de la Alcaldía de Montería y de la Gobernación de Córdoba

3. Lesiones comunes.

Desde el año 2005, con una disminución en el 2006, el número de lesiones comunes en Montería está creciendo. Son resultado de riñas, agresiones, atracos, hurtos, desavenencias e intolerancias tanto al interior de las familias como en los establecimientos educativos, barrios, lugares de trabajo, calles y plazas.

Gráfica n° 18. Lesiones comunes en Montería y Córdoba (2002-2010)

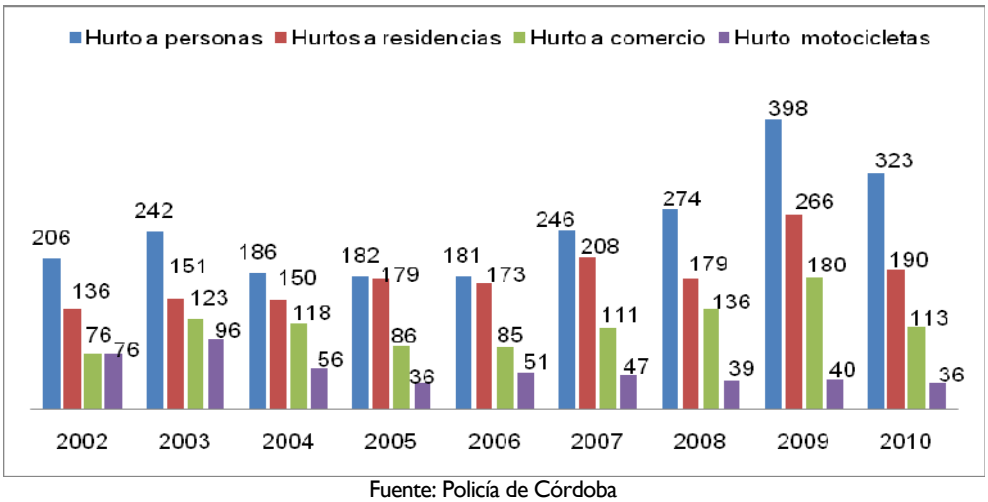


Fuente: Policía de Córdoba y Observatorio del delito de la Alcaldía de Montería

[156] Entrevistas a desmovilizados, periodistas y suboficiales de la Policía de Córdoba. Montería, noviembre y diciembre de 2010.

4. Hurto a personas, en residencias y comercio, y de motocicletas.
La percepción de la ciudadanía y los medios de comunicación es que Montería es cada vez más insegura. La siguiente Gráfica muestra como estos delitos se mantienen en el tiempo. El hurto, atraco y fleteo a personas sucede todos los días y por lo regular la mitad de los casos no son denunciados. Las armas que más utilizan para cometerlos son el revólver y las armas blancas. Al parecer hay bandas de fleteros integradas por delincuentes llegados de Cartagena, Barranquilla y Antioquia, asociados con los locales.[157] El hurto en residencias se ha mantenido alto a partir del 2005 a pesar de la vigilancia por parte de celadores, y es cada vez más numeroso en sectores de barrios y urbanizaciones. El robo en comercios, con menos casos que los anteriores, continúa alto a pesar de la vigilancia privada y alarmas instaladas. El hurto de motos también preocupa porque es el vehículo más utilizado para cometer diferentes tipos de delitos. La ciudad cuenta en promedio con 450 agentes de la Policía que no han logrado bajar los índices de estos delitos.[158]

Gráfica n° 19. Hurtos en Montería (2002-2010)



Fuente: Policía de Córdoba

5. Incautación de drogas.
La incautación de drogas en el municipio de Montería en los últimos ocho años ha sido muy variable. Sin embargo hay que destacar los decomisos de cocaína (81,2% del total), marihuana (15,2%) y en menor escala la base de coca y el bazuco.

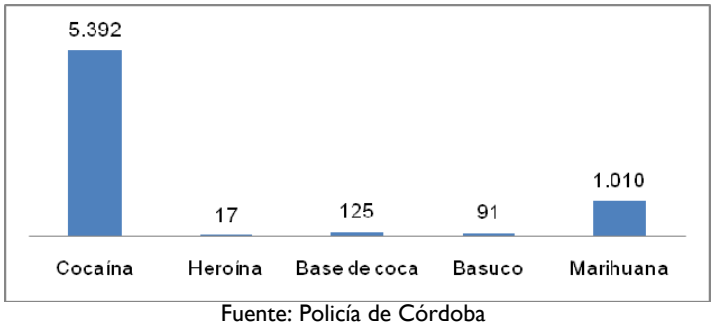
Cuadro n° 1. Incautación de drogas (kilos) en Montería (2003-2010)

Droga incautada	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Cocaína	1	1	4	2.176	1	2.179	23	1.007	5.392
Heroína	0	0	0	0	17	0	0	0	17
Base de coca	2	3	14	36	9	30	26	5	125
Bazuco	10	9	12	17	7	3	26	7	91
Marihuana	22	22	265	71	532	21	26	51	1.010
Total	35	35	295	2.300	566	2.233	101	1.070	6.635

Fuente: Policía de Córdoba

[157] El Meridiano de Córdoba, Montería, 21 de abril de 2009.
[158] Entrevistas con periodistas, comerciantes y líderes comunitarios. Montería, diciembre de 2010.

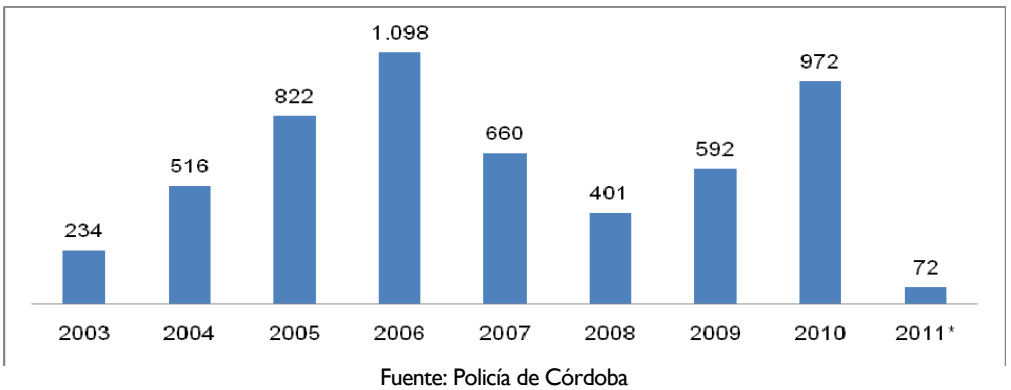
Gráfica n° 20. Incautación de drogas (kilos) en Montería (2003-2010)



Fuente: Policía de Córdoba

6. Capturas por tráfico de estupefacientes.
El número de capturas por tráfico de estupefacientes varía bastante: creció entre el 2003 y el 2006, luego bajó en los dos años siguientes y va en ascenso desde el 2009. De acuerdo con la Policía, en Montería existen cuatro 'ollas' desde hace muchos años con más de 40 puntos de venta. Algunos estiman que estas cifras son más altas, teniendo en cuenta que la venta y distribución las hacen, además, en establecimientos educativos, en negocios diversos y en casas fuera de toda sospecha.[159]

Gráfica n° 21. Capturas por tráfico de estupefacientes en Montería (2003 - 25 de enero 2011)



Fuente: Policía de Córdoba

7. Reclutamiento.
Apenas un año después de la desmovilización de las AUC en Córdoba, los medios informaron que en los barrios Cantaclaro, Mogambo, Furatena, Nueva Esperanza y Villa Paz de Montería estaban reclutando jóvenes.[160] La situación llegó a tal punto que la Defensoría del Pueblo emitió en septiembre de 2008 el informe de riesgo número 018-08, llamando la atención sobre el riesgo de reclutamiento en que se encontraban miles de adolescentes y jóvenes de más de cuarenta asentamientos y barrios de la ciudad. La situación continuó sin interrupción hasta principio del 2009 cuando se conocieron los casos de jóvenes que fueron reclutados para "trabajar" en Nariño, Antioquia, Guajira y Norte de Santander.[161] La persistencia ha sido tal que en el Plan de prevención y protección de derechos humanos del departamento, protocolizado el 30 de junio del 2010, con presencia y participación de todas las instituciones con competencia en la materia, el reclutamiento fue considerado uno de los principales temas de riesgo. En la actualidad el reclutamiento sigue en varios lugares de Montería y el departamento.

2.5 Motivos de reincidencia

i. La actividad delictiva convertida en modo de vida

[159] Entrevistas CITpax en Montería, noviembre de 2010.
[160] El Meridiano de Córdoba, Archivo AUC, 15 de abril de 2007 y 22 de mayo de 2007. Ver también Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz, *Tercer Informe*, CITpax, Madrid, septiembre de 2010.
[161] Ibíd. 18 de febrero de 2009 y 26 de marzo de 2009.

Si uno analiza con cuidado muchos casos de adolescentes y jóvenes tanto de áreas urbanas como rurales que se vincularon voluntaria o forzadamente a las AUC y después de la desmovilización forman parte de otras estructuras armadas ilegales, delincuencia común y organizada y grupos de tráfico y consumo de drogas, nos damos cuenta que es un proceso complejo que debe entenderse de la manera más comprehensiva posible.

Hasta el momento se puede constatar que: a). en la mayoría de los casos, como ya está documentado, estos muchachos provienen de asentamientos informales y comunidades pobres del campo y la ciudad, casi todos con problemas de conflicto y violencia de mucho tiempo atrás, acompañados de pobreza y exclusión social. b). La ilegalidad en todo sentido es en gran medida la alternativa que les ofrece posibilidades para sobrevivir, mucho más que las actividades legales, a las que no tienen acceso por distintos motivos. Entre otras actividades, participan en homicidios, amenazas, extorsión, hurtos, atracos, desplazamiento, estafas, fleteo, desapariciones, tráfico de estupefacientes, cultivos ilícitos, juegos de azar, redes de prostitución, contrabando, abigeato, manejo y provisión de logística para actividades ilícitas (motocicletas, vehículos, armas, sitios de protección), capacitación a nuevos integrantes de las estructuras ilegales y labores de inteligencia, entre otras. c) La pertenencia a estos grupos, y la continuidad en ellos les genera sentimientos de liderazgo, compromiso, sacrificio y responsabilidad. d) Aunque poco estudiados, los valores, principios, normas y creencias que inculcan y practican en las familias, establecimientos educativos y las comunidades, son la base, a la larga, que determina la vinculación o no a estas actividades ilegales y criminales. e) Los que ingresan voluntariamente respaldan y justifican esta decisión en que comparten la ideología de los grupos, el reconocimiento que adquieren en las localidades, cumplen deseos de venganza y les proporciona seguridad; añaden además la falta de oportunidades económicas, educativas y sociales y problemas en el hogar, entre otros, que no tienen discusión porque son ciertas. f) Lo que sigue es la preparación y capacitación para el cumplimiento de sus funciones dentro de la organización de acuerdo con sus habilidades, condiciones físicas y disposición mental. g) Un alto número de ellos termina convirtiendo la actividad delictiva en su modo de vida y a menos que tenga impedimentos físicos, de edad o de cualquier otro tipo, estará dispuesto a la reincidencia. h). Los reclutados a la fuerza, aunque terminen acostumbrados a la actividad son más propensos a no volver y un porcentaje no cuantificado se reintegra a la sociedad.[162]

ii. En desacuerdo con la desmovilización

Cuando ocurrió la desmovilización de los grupos que operaban en Córdoba, según las entrevistas realizadas por el Área a algunos desmovilizados, gran número de los combatientes no estuvieron de acuerdo con la decisión de los comandantes. Así mismo, indicaron que otros grupos no participaron en estos actos, por lo que podía ocurrir que una parte de ellos retornara a las armas, como ha sucedido en ciertos casos.

iii. Ofertas y amenazas

"Es cierto que a mí y a otros compañeros nos buscaron meses después de la desmovilización. Yo estaba estudiando entusiasmado y con juicio, había vuelto con mi mujer, reencontré a mi hija pequeña y no pensaba regresar. Yo fui enfermero en la organización. Me ofrecieron 600 mil pesos mensuales, de manera diplomática les comenté que la formación que estaba recibiendo era muy buena y posiblemente les serviría más si me dejaban terminarla, aunque tenían que pagarme más. Yo se que si me negaba tajantemente podían considerar que me aliaría con el grupo contrario y en este caso me declararían enemigo que debían tirar al piso (matar). Ante la disyuntiva, unos regresaron y a otros los mataron.[163]

iv. El fracaso de los proyectos productivos

"Los grandes proyectos productivos, los que tenían que ver con cultivos de caucho, cacao, forestales, ganadería intensiva y palma de aceite fracasaron por distintos motivos. Muchos de nosotros pensamos que era la redención que buscábamos porque nos aseguraba, eso nos dijeron, trabajo permanente y duradero y al final quedábamos como propietarios. Las cosas no sucedieron así. Queríamos trabajo o empleo permanente en la ciudad y el campo pero la falta de apoyo de la gobernación, alcaldías, empresarios, comerciantes y hacendados fue escasa. Pocos lo lograron. En general no hay proyectos productivos colectivos. No sabemos cuántos pero algunos, decepcionados, regresaron a abrir monte, a cuidar cultivos."[164]

[162] Reunión con miembros del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú. Montería, diciembre de 2010.
[163] Entrevistas a desmovilizados en Montería, noviembre de 2010.
[164] Ibíd. Montería, noviembre de 2010.

Por su parte el diario *El Meridiano* de Córdoba señalaba que los proyectos productivos no son rentables. "Los desmovilizados quieren inmediatez, mucha producción y que generen más empleo" sostuvo Humberto Solano, vocero de las asociaciones de desmovilizados, quien agregó que "los 914 ex combatientes estaban escépticos por la forma como se lleva a cabo el proceso."[165]

Al principio, en el 2006, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció la puesta en marcha de proyectos productivos en el área rural destinada a participantes, desplazados por la violencia y campesina del lugar. Los proyectos eran de cultivos de caucho, cacao, maracuyá, plantación de acacia y ganadería intensiva. Ocuparían 4.784 hectáreas y beneficiarían a 1.869 cabezas de familia. Desafortunadamente estos proyectos fracasaron, entre otras cosas, porque estaba en duda la legalidad de las tierras y la identidad de los verdaderos propietarios.

v. Las fallas en el programa de reintegración

Las dificultades que se han presentado en el proceso de reintegración han sido reflejadas en diferentes artículos de prensa. *El Meridiano* de Córdoba ha reseñado algunas: "Los desmovilizados volvieron a protestar por falta de pagos; bloquearon la avenida circunvalar (29 de julio de 2006)". "Reincorporados de los bloques Córdoba y Catatumbo protestaron ante el Centro de Referencias porque no les han pagado varios meses por concepto de la ayuda humanitaria que el gobierno les entrega (2 de septiembre de 2006)". "26 detenidos en la cárcel Las Mercedes entraron en huelga de hambre por incumplimiento de los pactos hechos por el gobierno en Ralito (8 de diciembre de 2006)". "Inicialmente atendían a 600 desmovilizados. Muchos no quieren asistir a clases. El proceso ha sido difícil y lento. Se montaron 20 grupos pero funcionaron 5. Ahora asisten 300 porque la ACR los está obligando (31 de mayo de 2007)". "Enfrentamiento con Frank Pearl, consejero para la reintegración, cuestionaron sus declaraciones sobre oportunidades laborales que supuestamente han ofrecido (24 de septiembre de 2007)". "Hay que reconocer que al principio hubo fallas e improvisaciones. A medida que el proceso avanzaba mejoraron en capacitación, salud y acompañamiento sicosocial pero falta mucho por hacer, sobre todo en proyectos productivos y empleo. Nosotros nos hemos aguantado porque hemos visto mejoría y esperamos que sigan cumpliendo, no así otros compañeros que prefirieron volver a las viejas andanzas, yo creo que se precipitaron cuando tomaron esa decisión".[166]

Hasta el 2010 la ACR con sede en Montería atendió a 1.702 participantes con 170 proyectos aproximadamente. "Son proyectos individuales porque casi nadie quiere trabajar en colectivo", aseguraron los participantes que accedieron a dar declaraciones. "Funcionan unos 100 aproximadamente, en realidad no son proyectos nuevos, por lo regular son los mismos trabajos que desempeñábamos antes de ingresar a las AUC". Recuérdese que cuando ocurrió la desmovilización de los 1.613 registrados, 697 poseían algún oficio y 367 contaban con empleo (ver Gráfica n° 9). La formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la institución encargada de la capacitación de los participantes, ha servido fundamentalmente para actualizar o perfeccionar sus conocimientos sobre oficios como albañilería, electricidad, electrodomésticos, carpintería, mecánica, panadería, soldadura, enchapes, mantenimiento de motores y tiendas, entre otros.[167] Esta aseveración la corrobora la información de los postulados cuando informaron sobre experiencia laboral, arte u oficios que poseían. En realidad son pocos los que elaboran sus planes de negocios y crean sus unidades productivas como solicitud o exigencias de la institución.

Según los profesores consultados, poco más del 50% de los que asisten lo hacen por recibir el subsidio que les reconocen, un 35% manifiesta interés en superarse y dispuestos a la reintegración y al resto le falta convencimiento.[168]

En cuanto a empleo la situación no ha sido fácil. En un principio, como salida ocupacional, la Policía orientó un diplomado durante 6 meses a 870 participantes con el propósito de prepararlos como Salvavías y vigías comunitarios para atender el tráfico en calles y carreteras, así como la seguridad en espectáculos públicos, colegios y playas. Además de contribuir a su capacitación, la intención fue ayudar a ubicarlos en empleos permanentes o temporales. Al final sólo se contrataron a 10 personas en puestos fijos y a algunos con contratos temporales. La respuesta de empresarios, comerciantes e industriales ha sido mínima. Existe temor,

[165] El Meridiano de Córdoba, Montería, 15 de julio de 2006
[166] Entrevistas con desmovilizados que asisten a cursos del SENA. Montería, noviembre de 2010.
[167] Entrevistas a desmovilizados con proyectos individuales. Montería, noviembre-diciembre de 2010.
[168] Entrevistas con funcionarios y profesores del SENA. Montería, noviembre y diciembre de 2010.

prevención y estigmatización contra ellos. Algunos han conseguido empleos ocultando su condición de desmovilizado.[169]

vi. Rechazo y estigmatización

"Cuando uno es desmovilizado lo miran mal, con desconfianza y con miedo. Hay vecinos que viven asustados porque temen que lleguen a matarme y a ellos les pueda pasar algo. Cuando oyen motos que pasan cerca a la casa donde vivo y ven que el conductor y parrillero son jóvenes y llevan puestos cascos que les cubren los rostros, especialmente en horas donde hay poca gente en las calles, imaginan que son sicarios. Alcanzo a mirarlos cuando corren las cortinas y cierran las puertas. Si uno organiza una reunión o fiesta en su casa o le hace algún arreglo a la vivienda o compra algo nuevo, están convencidos que es producto de algo malo que hice... a veces la policía llega a preguntarme de donde obtuve el dinero, seguro porque alguien los llamó y dio el aviso. Otra cosa: como uno no tiene dinero para comprar buena ropa y zapatos, anda en moto como conductor o parrillero, en bus, bicicleta o a pie y no tenemos pinta de galán, pues la mayoría somos morenos, no tan bien parecidos, con corte de pelo bajito, un poco ordinarios con el lenguaje y el comportamiento y otros gestos que no se por qué la gente nos asocia enseguida con gente peligrosa, uno ve como lo analizan rápidamente, hacen una imagen de nosotros y así nos tratan. Esto no es bueno, algunos no lo soportan y terminan echando todo a la mierda".[170]

Con respecto al acompañamiento sicosocial, el programa contempla de 1 a 3 charlas mensuales de dos horas en promedio, visitas a las familias y organización de eventos lúdicos. Los grupos son de 30 participantes en promedio, si bien cada sicólogo atiende a 60 o más personas. Los comentarios sobre el programa son diversos: agentes de la Policía que les hacen acompañamiento consideran que muchas charlas no son pertinentes, improvisadas algunas veces, carecen de objetivos precisos, presentan vacíos y no se observan resultados. Algunos desmovilizados consideran que ellos y sus familias no reciben el acompañamiento adecuado, las visitas son escasas o muy espaciadas y manifiestan que asisten por el subsidio.

vii. Inseguridad jurídica

"Sí, es verdad, estamos preocupados por el fallo de la Corte Constitucional que nos deja en una situación incierta por no saber que va a pasar con nosotros. Lo primero que se nos ocurrió fue suspender las declaraciones que estamos haciendo. No hay razón para que sigamos haciendo confesiones si a la larga las pueden convertir en pruebas contra nosotros. No queremos perder la confianza en la ley pero necesitamos que nos den las garantías suficientes para poder continuar con el proceso. Estamos a la expectativa. No creo que aumente el número de reincidentes. Si lo hacen, serán muy pocos.[171]

2.6 Conclusiones

Los desmovilizados de las AUC incrementaron la inseguridad en el departamento y en Montería. 206 han muerto desde el 2005 y 975 están vinculados o capturados en el mismo lapso por distintos delitos. Es posible que los porcentajes sean mayores pero las estadísticas de las instituciones que tienen esta responsabilidad aún no especifican en los responsables o autores su condición o no de desmovilizados.

En el período 2002-2010, aproximadamente la tercera parte de los delitos en el departamento los cometieron en la capital. Al finalizar el año 2010 los efectivos de la Policía en el departamento sumaban más de dos mil, correspondiéndole a Montería entre 450 y 500. Por el crecimiento de los distintos delitos los medios de comunicación, gremios y líderes sociales y políticos han expresado su preocupación y solicitud para aumentar el pie de fuerza pública tanto en Montería como en las zonas de conflicto y área rural. La academia, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias han solicitado en repetidas ocasiones la presencia y acompañamiento de los organismos de cooperación internacional, el intercambio de ideas y propuestas con voceros de los gobiernos departamental y nacional y la adopción de un plan de trabajo que contemple el desarrollo y la paz en el departamento.

[169] Entrevistas con los responsables de la Unidad que atiende casos de desmovilizados en la Policía. Montería, noviembre de 2010 y enero de 2011.
[170] Entrevistas con desmovilizados. Montería, diciembre de 2010 y enero de 2011.
[171] Entrevista con desmovilizados procesados. Montería, enero de 2011.

La percepción que se tiene de la *peligrosidad* de los desmovilizados al parecer se justifica más en el resto del departamento que en la capital. La gente en el campo los asocia más con los grupos armados ilegales activos y en la ciudad con la delincuencia común.

La inseguridad que vive Córdoba y Montería es producto de factores que deben tratarse de manera integral: pobreza, desempleo y subempleo, corrupción, grupos armados ilegales, narcotráfico, violencia intrafamiliar y comunitaria, deterioro ambiental, despojo y concentración de tierras y riesgo social en que se encuentran niños, adolescentes y jóvenes.

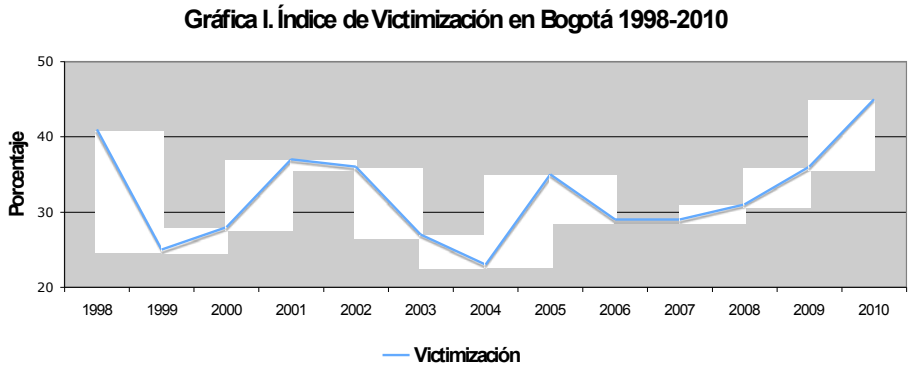
El programa de reintegración en sus diferentes componentes y en su conjunto debe ser revisado a la luz de sus resultados y la situación que vive el país y Córdoba en particular.

3. Bogotá

3.1 Contexto de inseguridad

La percepción de inseguridad en Bogotá se ha incrementado entre 2006 y 2010, coincidiendo con el aumento del número de homicidios, lesiones personales, y hurtos tanto a personas, como de motos, y en residencias y bancos. Además, durante dicho período se produjo la mayor proporción de desmovilizaciones de grupos de autodefensa y de guerrilla en la última década.

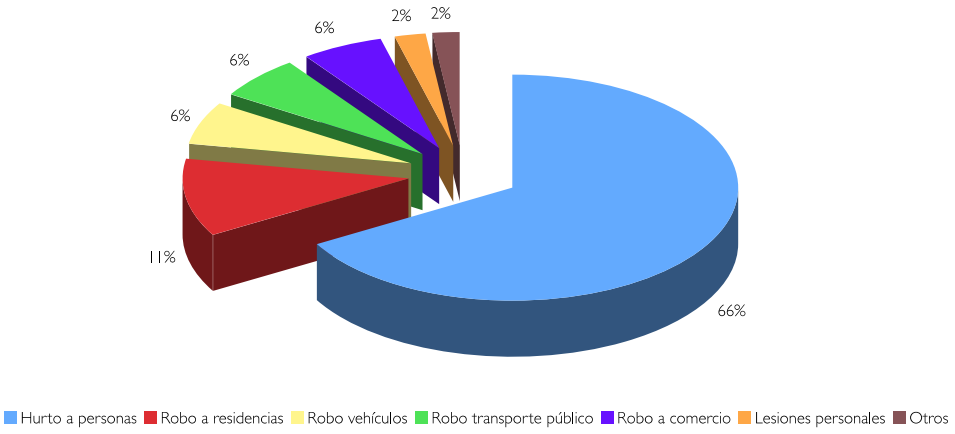
En 2010, el porcentaje de residentes en Bogotá que reportaban haber sido víctimas ellos o sus familiares de un delito en el último año alcanzó el 45%, una cifra que supera cualquiera de las reportadas por la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de la ciudad desde 1998. La Gráfica n° 1 muestra que la más reciente tendencia de aumento en el reporte de victimización se inicia en 2007, con un 29%.



Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá

En la encuesta de junio de 2010, la Cámara de Comercio señala que el 66% de los delitos reportados corresponde a hurto a personas y el 11% corresponde a robo en residencias (ver Gráfica n° 2). Entre quienes reportan hurtos a personas, el 53% corresponde a robos de teléfonos celulares, el 20 % a robo de dinero, y el 8% a robo de objetos personales como billetera, reloj y joyas. Comparativamente, en 2009 los principales delitos reportados también fueron hurto a personas (80%) y robo en residencias (12%). La distribución del hurto a personas era en ese año de 38% de robo de celulares, 20% de robo de dinero, 20% de robo de objetos personales, y 22% de otros robos. En 2008 las proporciones eran similares a estas últimas.

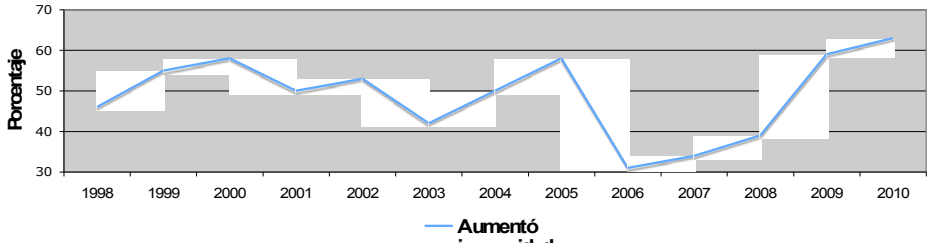
Gráfica 2. Proporción de delitos reportados en Bogotá en 2010



Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá

A la pregunta sobre si percibían una variación en los niveles de seguridad en la ciudad, la proporción de encuestados que afirmaba percibir un aumento en la inseguridad alcanzó en 2006 un mínimo para la última década (31%), año en el cual se inicia una tendencia creciente con pico en 2010 (63%). Tales resultados se muestran en la Gráfica n° 3.

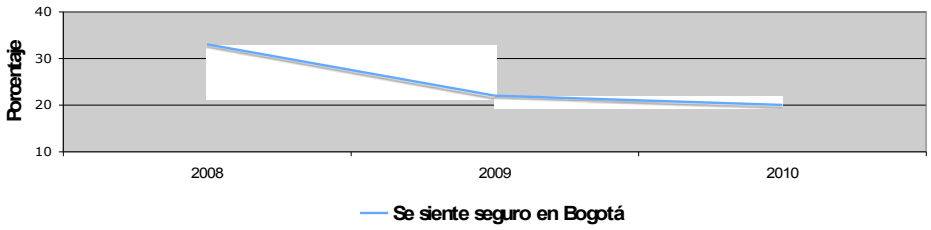
Gráfica 3. Percepción de inseguridad en Bogotá 1998-2010



Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá

En la misma línea, la proporción de residentes que dice sentirse seguro en Bogotá, según la Encuesta de Percepción "Bogotá Cómo Vamos", viene en descenso desde 2008, tal como lo muestra la Gráfica n° 4.

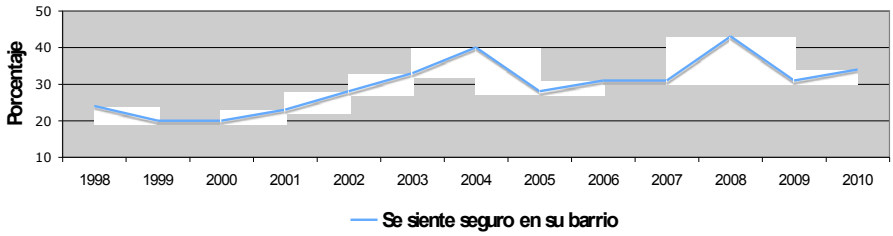
Gráfica 4. Percepción de seguridad en Bogotá 2008-2010



Fuente: Encuesta de Percepción Bogotá Cómo Vamos. Ipsos-Napoleón Franco

Según esta misma encuesta, una mayor proporción de residentes de la ciudad afirma sentirse segura en su barrio cuando se compara el inicio de la década en 2001 (23%) con el año 2010 (34%). Como muestra la Gráfica n° 5, entre 2006 y 2010, la variación ha sido positiva pero ligera (tres puntos porcentuales).

Gráfica 5. Percepción de seguridad en el barrio 1998-2010

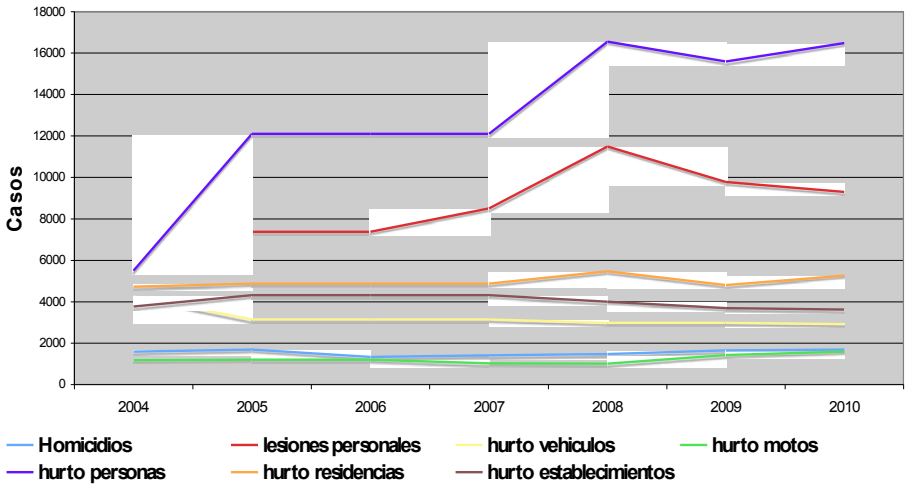


Fuente: Encuesta de Percepción Bogotá Cómo Vamos. Ipsos-Napoleón Franco

¿Se corresponde este aumento en la percepción general de inseguridad en la ciudad con los datos disponibles sobre comisión de hechos delictivos? El registro oficial de la evolución de delitos de alto impacto en la ciudadanía, elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, señala que entre 2006 y 2010 ha habido un aumento en el hurto a personas, lesiones personales, hurto en residencias y de motos, y ha habido un leve incremento en el homicidio y en el hurto en bancos.[172] Otros delitos como el hurto de establecimientos y vehículos muestran disminuciones leves, tal como se aprecia en la Gráfica n° 6.

[172] El hurto en bancos pasó de 6 casos en 2006 a 20 en 2010.

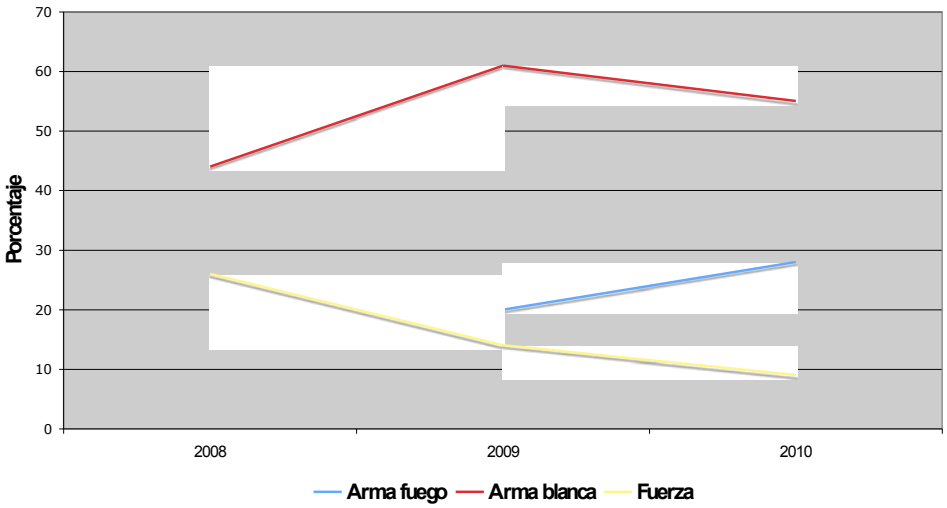
Gráfica 6. Evolución de delitos en Bogotá 2004-2010



Fuente: Boletín de Estadísticas, Alcaldía Mayor de Bogotá, CEACSC
Datos de 2010 recolectados entre enero y noviembre, y proyectados a diciembre

De manera complementaria, la encuesta de la Cámara de Comercio señala que los encuestados reportan un aumento en la proporción de delitos cometidos con armas de fuego y arma blanca entre 2008 y 2010, y una disminución de la proporción de delitos cometidos sólo con intimidación y uso de la fuerza física. Tales tendencias se muestran en la Gráfica n° 7.

Gráfica 7. Evolución del método delictual 2008-2010



Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá

El Observatorio de Seguridad en Bogotá de la Cámara de Comercio de la ciudad reporta que los casos de secuestro y extorsión continuaban una tendencia a la baja en 2010 respecto al inicio de la década. Entre enero y junio de 2010 se reportaron seis casos de secuestro, un promedio que es apenas la tercera parte del promedio de los años 2000 a 2010. Y entre enero y junio de 2010 se reportaron 47 casos de extorsión, un promedio inferior a ocho casos mensuales, lo cual que dista del promedio de 14 casos por mes reportados entre enero de 2007 y junio de 2010.

¿Dónde se concentran los delitos de alto impacto que se cometen en la ciudad? Según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 29,6% de los homicidios

entre enero y septiembre de 2010 se concentraron en Kennedy y Ciudad Bolívar.[173] El Observatorio de Seguridad en Bogotá de la Cámara de Comercio les asigna a estas localidades el 28,7% en el mismo período.

Respecto al hurto de vehículos, la Alcaldía Mayor de Bogotá calcula que el 56,9% de casos en el primer semestre de 2010 se produjo en cinco localidades: Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén y Puente Aranda. El Observatorio de la Cámara de Comercio les asigna a estas localidades el 52,8% de los casos en ese período.

Según el Observatorio de Seguridad en Bogotá, el 43% de los hurtos en residencias en el primer semestre de 2010 se produjeron en Suba, Kennedy y Usaquén. El 30,6% de los hurtos a personas se produjeron en ese período en Suba, Chapinero y Kennedy. Y el 31% de los hurtos en establecimientos se produjeron en Suba, Kennedy y Chapinero.

De manera preliminar, podemos concluir que el aumento de la percepción de inseguridad en Bogotá viene acompañado de una tendencia creciente de un buen número de delitos de alto impacto, en particular el hurto a personas, de motos y en residencias. El aumento en el número de homicidios, aunque leve, parece constante desde 2004. Además, otras actividades delictivas no registradas son mencionadas por ciudadanos como fuentes de su sensación de inseguridad, según las encuestas de Ipsos-Napoleón Franco, Estadística y Análisis, y Datexco en los informes antes mencionados. Estas actividades son el tráfico de drogas, la presencia de pandillas, milicias y grupos armados en los barrios.

La aparente convergencia entre el aumento en la percepción de inseguridad y el aumento en el número de casos reportados de delitos ya mencionados coincide además temporalmente con un incremento en el número de desmovilizados que se han asentado en Bogotá. ¿Contribuye la presencia de desmovilizados en Bogotá al aumento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía, o al aumento reciente de delitos como el homicidio y el hurto? Tal es la cuestión que se analiza a continuación.

3.2 Población desmovilizada

No existen mediciones confiables y constantes en el tiempo sobre la percepción de los residentes en Bogotá frente a los desmovilizados. Pero existen algunos indicadores que pueden ayudar a dibujar un panorama.

El 36% de los encuestados en Bogotá por el Barómetro Latinoamericano en 2008 creía que la seguridad del país empeoraría con la desmovilización de guerrilleros y de paramilitares. Tal porcentaje de pesimismo superaba el porcentaje consolidado nacional de 28%.[174] Por otra parte, una encuesta de la Fundación Seguridad y Democracia en ese mismo año señalaba que el 75% de los encuestados en Bogotá consideraba que la presencia de desmovilizados contribuía al incremento en la inseguridad de la ciudad.[175]

El hecho de que la ciudadanía en Bogotá muestra importantes índices de desconfianza frente a la presencia de desmovilizados se confirma de manera cualitativa con el testimonio de los propios ex combatientes. Mesas de deliberación política desarrolladas en 2008 entre ex combatientes en Bogotá confirman que el estigma y la discriminación de la sociedad es uno de los problemas principales que afrontan en su proceso de reintegración.[176] Sin embargo, ellos mismos contribuyen en ocasiones a extender esa percepción. "Yo en Bogotá no me siento segura", admitía una desmovilizada entrevistada, "porque todos los desmovilizados se vienen para acá".

El liderazgo de la ciudad comparte el recelo de la ciudadanía. Las dos últimas administraciones municipales de Bogotá han expresado públicamente su preocupación sobre el posible impacto negativo que los desmovilizados podían causar en la ciudad[177].

---

173 CEACSC, "Caracterización del homicidio enero-septiembre comparado años 2009 y 2010", presentación electrónica, Alcaldía Mayor de Bogotá.

174 Latin American Public Opinion Project, *Barómetro de las Américas. Colombia. Cultura política de la democracia en Colombia 2008. El impacto de la gobernabilidad*, USAID, Vanderbilt University, UNDP, IADB, Centro Nacional de Consultoría, Observatorio de la Democracia-Universidad de los Andes, Bogotá, 2008.

175 Pablo Casas, "Criminalidad y victimización en las ciudades más grandes de Colombia", en Cuadernos del Informe de Desarrollo Humano para Bogotá, p. 5. "La seguridad: un desafío permanente para Bogotá", PNUD, Bogotá, 2008, pp. 43-72.

176 Juan Esteban Ugarriza, "Los ex combatiente proponen: aportes y percepciones sobre la reintegración en Colombia", documento de trabajo, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, Universidad Externado de Colombia, 2009.

177 Alcaldía de Bogotá, "Ciudadanos ex-combatientes: un desafío de reconciliación e inclusión para Bogotá", Programa de Atención Complementaria a la Población Reincorporada con Presencia en Bogotá, 2006; Andrés Restrepo, sub Secretario de

¿Pero qué informaciones sustentan tal percepción negativa sobre los desmovilizados? Una posibilidad es que la percepción de los residentes en Bogotá sobre los desmovilizados esté influida por las estadísticas de reincidencia en la ilegalidad de la población de ex combatientes a nivel nacional (véase por ejemplo el segundo informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre reintegración en Colombia). Si los ciudadanos de Bogotá supusieran que estos cálculos de reincidencia nacional aplican al caso de Bogotá, quizás sería lógico que percibieran la presencia de desmovilizados en la ciudad como uno de los factores que explicaría el aumento en los índices de inseguridad detallados anteriormente. Pero, ¿existen indicios de que estas proporciones son similares en Bogotá y a nivel nacional?

3.3 Participación de desmovilizados en delitos

Como se ha sugerido anteriormente, el aumento en la percepción de inseguridad y en el aumento de la frecuencia de algunos delitos de alto impacto en la ciudadanía desde 2006 coinciden en el tiempo con un incremento en el número de desmovilizados en la ciudad, tal como lo muestra el Cuadro n° 1. La disminución de las cifras entre 2007 y 2008 se explica por los método de conteo introducidos para ese período por la Alta Consejería para la Reintegración, creada en septiembre de 2007, y no necesariamente a la llegada o salida de desmovilizados de la ciudad.

Cuadro n° 1. Desmovilizados en Bogotá (2007 - junio de 2010)[178]

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Promedio atendidos por ACR	N/D	N/D	2.967	3.080	4.231	3.919
Porcentaje atendidos por ACR/Total desm.	N/D	N/D	64,93%	74,84%	89,37%	73,19%
Total desmovilizados[179]	2.474	4.327	4.569	4.115	4.734	5.354

Fuente: ACR, Alcaldía de Bogotá

A diferencia del caso nacional, en Bogotá existe una clara mayoría de desmovilizados provenientes de los grupos de guerrilla (Cuadro n° 2).

Cuadro n° 2. Desmovilizados en Bogotá (mayo de 2010)

Ex grupo	Número	Porcentaje
AUC	1.723	32,17%
FARC	3.046	56,90%
ELN	419	7,83%
ERG	18	0,33%
ERP	40	0,73%
EPL	29	0,53%
Sin dato	79	1,47%
TOTAL	**5.354**	**99.96%**

Fuente: Cálculos propios a partir de datos sobre participantes atendidos por ACR en 2010.

Los ex combatientes tienden a vivir en zonas de la ciudad donde el costo de vida es relativamente más bajo. Esto se refleja en las proporciones de desmovilizados que la Alcaldía Mayor de Bogotá calcula residen en las diferentes localidades, reflejadas en el Cuadro n° 3.

Seguridad y Convivencia, citado en Despacho del concejal Carlos Vicente de Roux, "Bogotá enfrenta serios problemas en materia de seguridad" 2009; informe del debate realizado en el Concejo de Bogotá el 18 de junio de 2009, disponible en http://www.carlosvicentederoux.org/apuestaporbogota.shtml?apc=a-h1;07;-;;&x=2870 (última fecha de consulta: octubre de 2009). Así lo reiteró también la secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en entrevista con CITpax, 2010.

[178] Los datos entre 2005 y 2007 son cálculos del Programa de Atención Complementaria a los desmovilizados de la Alcaldía de Bogotá. Los datos entre 2008 y 2010 fueron suministrados por ACR. Las cifras incluyen ex combatientes en Hogares de Paz, ICBF y CRO Juvenil, pero no incluyen alrededor de 1.500 desmovilizados que según la Alcaldía de Bogotá habían cumplido su proceso de reintegración en 2007 y residían en Bogotá. Sobre esta población, ver Mauricio Acosta, Julia Gabrysch y Maristella Góngora (eds.), "Experiencias de jóvenes ex-combatientes en proceso de reintegración a la vida civil en Bogotá D.C.", Fescol, Alcaldía de Bogotá, Federación Nacional de Concejos de Juventud, 2007.

[179] Existe un número indeterminado de desmovilizados que viven en la ciudad pero no han sido contabilizados por ACR.

Cuadro nº 3. Desmovilizados en Bogotá por localidad (mayo de 2010)		
Localidad	**Número**	**Porcentaje**
Ciudad Bolívar	629	18,7
Kennedy	448	13,3
Rafael Uribe	429	12,8
San Cristóbal	420	12,5
Bosa	337	10,0
Usme	271	8,1
Suba	227	6,8
Engativá	163	4,8
Tunjuelito	131	3,9
Eje Centro	120	3,6
Fontibón	56	1,7
Usaquén	44	1,3
Puente Aranda	33	1,0
Antonio Nariño	25	0,7
Barrios Unidos	12	0,4
Chapinero	9	0,3
Teusaquillo	7	0,1
TOTAL (localizado)	**3.361**	**100%**

Fuente: ACR, Alcaldía Mayor de Bogotá

El aumento constante del número de desmovilizados entre 2005 y junio de 2010 coincide con el inicio de una tendencia de mayor percepción de inseguridad. Esto se acompaña de una tendencia de aumento en el número de hurto a personas y en residencias, y un leve aumento en el número de homicidios, y de uso de armas blancas y de fuego en la comisión de delitos reportados.

Resulta ligero atribuir a los residentes de una localidad todos los fenómenos de delincuencia que allí se presenten. De igual forma, el mayor número de desmovilizados por localidad no nos permite concluir que el impacto en la inseguridad allí será mayor que en otras localidades con menor número de ex combatientes. Para resolver esta cuestión sería necesario determinar cuántos desmovilizados que han reincidido en la ilegalidad lo han hecho en el barrio de su vecindad, en otros barrios, o incluso fuera de Bogotá. Tal información no está disponible.

Aunque debemos reconocer que existe una coincidencia entre un aumento en algunos delitos, el aumento en la percepción de inseguridad, y la llegada de desmovilizados a la ciudad, hasta ahora no tenemos ningún indicio de que la relación sea causal, es decir, que los desmovilizados sean culpables del fenómeno.

La imposibilidad de determinar una relación causal, sin embargo, no impide que analicemos la participación de los desmovilizados en las actividades ilegales de la ciudad, con el fin de estimar su impacto.

¿Cuál es la magnitud de la relación aparente entre desmovilizados e inseguridad? No existen datos fiables y contundentes que nos permitan responder con precisión esta pregunta, pero sí existen seis fuentes de información que nos ayudan a tener una idea general de la participación de los desmovilizados en delitos en Bogotá.

La primera fuente de información es la Alta Consejería para la Reintegración. De forma estricta, la ACR considera prueba de reincidencia en la ilegalidad la existencia de una condena (no captura) por delitos posteriores a la desmovilización. En su registro, hay 8 ex combatientes capturados y condenados en Bogotá entre 2007 y 2010 por delitos posteriores a la desmovilización, 7 de AUC y uno más no identificado. Esto representa menos del 1% del total nacional de desmovilizados condenados post-desmovilización en el registro de ACR, y sólo el 0,15% de todos los desmovilizados radicados en Bogotá en 2010. En tres casos la condena se da por homicidio, en un caso por extorsión, y en cuatro casos por hurto.

La segunda fuente de información es la Policía Nacional. La Dijin reporta 42 capturas de desmovilizados por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá entre enero de 2006 y noviembre de 2010. Esta cifra se traduce en que, según la Policía, aproximadamente un 0,78% de los desmovilizados de Bogotá ha sido capturado entre 2006 y 2010. Ya que no hay operaciones contra Bandas Criminales en Bogotá y Cundinamarca, no hay capturas de desmovilizados en Bogotá bajo esta modalidad.

La tercera fuente es la Veeduría Distrital. Según se lee en uno de sus informes de 2010, su registro cuenta con 78 desmovilizados que reincidieron en actividades ilegales en Bogotá hasta 2009.[180] Esta cifra sugiere que alrededor del 1,64% de los desmovilizados de Bogotá habría reincidido entre 2006 y 2009, teniendo como base la cifra de 4.734 desmovilizados reportados por ACR en ese último año. El Programa de Atención a los desmovilizados de la Alcaldía de Bogotá reporta 78 casos de desmovilizados, cuyos beneficios de reintegración fueron suspendidos o retirados debido a actos delictivos y faltas graves post-desmovilización a febrero de 2009, y que representaban entonces el 2,1% de los desmovilizados en proceso de reintegración.[181] Sin embargo, dicho cálculo no tiene en cuenta a los desmovilizados en la ciudad que no hacían parte del programa gestionado por la ACR.

La cuarta fuente es el cruce de datos de autoridades carcelarias y judiciales, es decir el INPEC y la Fiscalía General de la Nación. El Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación señaló en 2010 que un porcentaje cercano al 97% de quienes son capturados en un lugar son recluidos en la cárcel más cercana. Con base en ese criterio, resulta interesante examinar cuántos desmovilizados han sido privados de la libertad en cárceles de Bogotá como una medida de capturas en la ciudad. Según datos del INPEC, en junio de 2010 permanecían privados de la libertad 166 desmovilizados en tres cárceles de Bogotá. Este número corresponde al 1,5% del total de presos en ese momento. Un total de 43 desmovilizados había sido ya condenado, lo cual corresponde al 0,9% del total de condenados hasta ese mes.

¿Cuáles de estos delitos se cometieron con posterioridad a la desmovilización, y por tanto deben ser considerados indicios de reincidencia? Aunque no existen datos definitivos, el Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía calculaba en 2010 que aproximadamente el 50% de los desmovilizados capturados lo fueron por delitos post-desmovilización. Si hacemos uso de este criterio, entonces el número de desmovilizados que presuntamente habrían reincidido en Bogotá y estaban privados de la libertad en junio de 2010 se acercaría a 83, cifra muy parecida a la reportada por la Veeduría Distrital, y que correspondería al 1,55% de los desmovilizados en Bogotá entre 2006 y 2010.[182]

La quinta fuente es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, apoyada en cifras de la Alta Consejería para la Reintegración. Según el segundo informe de la CNRR, la ACR lleva un registro de 5.890 desmovilizados que han sido capturados entre 2003 y 2009. A septiembre de 2010, esa cifra se incrementó a 5.968. De este último total, 325 corresponden a desmovilizados en Bogotá, 39% ex guerrilleros y 61% ex paramilitares. Sin embargo, dichas cifras no discriminan quiénes fueron capturados por hechos anteriores o posteriores a la desmovilización.

La Oficina Jurídica de la ACR tenía a julio de 2010 un registro de 772 delitos posteriores a la desmovilización por los cuales los desmovilizados habían sido privados de la libertad en Colombia. Por sí sola, esta cifra no es muy útil para responder a nuestros interrogantes. En el supuesto de que en Bogotá se concentrara el 12% de esos delitos, dado que Bogotá albergaba en 2010 más o menos tal porcentaje de los desmovilizados del país, el número de delitos registrados por ACR como posteriores a la desmovilización sería 92. Aún si cada delito fuera cometido por un desmovilizado distinto, el porcentaje de reincidencia sería de 1,71%.

La sexta y última fuente es el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Basados en datos de la Fiscalía General de la Nación seccional Bogotá y cálculos propios, el CEACSC registra que entre 2006 y 2010 se han reportado 352 delitos en los que el victimario, según denuncias, habría sido un desmovilizado. Suponiendo que cada delito hubiera sido efectivamente cometido por un desmovilizado, se podría calcular en 6,3% el porcentaje de desmovilizados de Bogotá que habría reincidido en la ilegalidad. Sin

[180] Veeduría Distrital de Bogotá, "Informe de rendición de cuentas de la gestión administrativa y contractual del año 2009", Alcaldía Mayor de Bogotá, marzo de 2010.
[181] Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá D.C., "Polifonía de voces", Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 25.
[182] El cálculo de 83 desmovilizados privados de la libertad por delitos posteriores a la desmovilización en Bogotá no incluye a quienes pudieran haber sido capturados y liberados antes de junio de 2010.

embargo, el 85% de los delitos imputados corresponde a "rebelión", lo que deja claro que se trata de delitos previos a la desmovilización. Aún si el otro 15% de delitos se hubiera cometido con posterioridad a la desmovilización (alrededor de 52 casos), el porcentaje de desmovilizados en Bogotá que habría reincidido llegaría a 0,97%.

El siguiente cuadro resume los cálculos de posibles casos de reincidencia en la ilegalidad de desmovilizados en Bogotá anteriormente presentados.

Cuadro nº 4. Cálculo de reincidencia de desmovilizados en Bogotá (2006-2010)

Fuente de información	*Casos de delitos post-desmovilización 2006-2010*	*Proporción de desmovilizados de Bogotá*
ACR	8	0,15%
Policía Nacional	42	0,78%
Veeduría Distrital/Alcaldía de Bogotá	78*	1,64%
INPEC/Fiscalía General	83	1,55%
CNRR	92	1,71%
CEASC	52	0,97%

Fuente: elaboración propia.
* Dato de 2009.

Por tanto, usando los datos con los que cuentan las instituciones mencionadas, sólo podemos deducir razonablemente que se tienen indicios de la posible reincidencia de entre el 0,15% y el 1,71% de los desmovilizados en Bogotá. Los datos además sugieren que casi la mitad de los casos de reincidencia se daría principalmente por hurto y porte ilegal de armas. En decir, los datos disponibles por las autoridades no soportan la hipótesis de que los desmovilizados tienen una participación importante en los delitos de alto impacto en la ciudadanía que presentan una tendencia creciente en los últimos años. Queda por considerar, sin embargo, si estos datos en efecto reflejan la realidad de la ciudad.

La privación de la libertad de un desmovilizado no implica su culpabilidad, por lo que la información antes presentada no nos permite describir con precisión a quienes han reincidido en la ilegalidad. Sin embargo, la misma información sugiere que, incluso a pesar de la estigmatización que sufren como sospechosos de actos delictivos, no hay evidencia de que efectivamente los desmovilizados contribuyan significativamente al aumento de los índices de hurtos y homicidios en Bogotá en los últimos años.

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá cree que aunque las cifras no muestran un impacto de gran magnitud de los desmovilizados en la ciudad, sí alertan de los riesgos en el futuro próximo. "El 38% de los desmovilizados que hemos consultado dicen que los han invitado a hacer parte de bandas. Y ellos tienen la habilidad y la mente para ello"[183].

Por otra parte, en su opinión, las cifras de capturas no reflejan la totalidad de lo que en verdad ocurre. "Yo tengo notificación de 4.200 hurtos, en las que sólo tengo 137 capturas. Mire la diferencia". Así mismo, manifiesta que en Bogotá es más difícil para los desmovilizados ser capturados, pues construyen "redes, grupos, aliados" que se solidarizan y los protegen.

La Secretaria piensa que hay muy poca información sobre dónde están los desmovilizados de la ciudad, qué hacen, qué piensan y qué necesitan. "De los 5.354 desmovilizados en la ciudad, sólo sabemos dónde están 2.600". En su opinión, el Gobierno Nacional tardó mucho en reaccionar frente a esta desinformación, y espera una mejora en el futuro cercano.

En particular, la Secretaria apunta a que puede haber una mayor demanda de "gatilleros" [sicarios] en la ciudad que puede explicar el aumento reciente en los homicidios. Según explica, los homicidios con arma de fuego en la ciudad usan en 2010 un menor número de proyectiles que hace diez años, signo aparente de "profesionalización" de quienes los cometen. Además, señala que hay un aumento en el número de homicidios por venganza, lo que puede indicar una mayor demanda de individuos que los cometan. "No tengo certeza de cómo los desmovilizados han influenciado mi ciudad", admite. Pero respecto al aumento de algunos índices de inseguridad, supone que "parte del crecimiento tiene que ver con desmovilizados. En los barrios saben quién es quién y qué habilidades tienen".

[183] Entrevista CITpax con la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, 2010.

3.4 Tipos de delitos

En Bogotá, según el Programa de Atención al desmovilizado de la Alcaldía Mayor, los principales delitos posteriores a la desmovilización entre 2008 y 2009 eran hurto (21,1%), fabricación, tráfico y porte de armas (15,4%), concierto para delinquir (10,3%), homicidio (7,7%), secuestro (6,4%), porte ilegal de estupefacientes (6,4%) y extorsión (3,9%).[184] Estas cifras sugieren que los 78 desmovilizados reincidentes en la ilegalidad en Bogotá estarían involucrados en alrededor de 16 hurtos y seis homicidios entre 2006 y 2009. Estos datos no son suficientes para apoyar la tesis de que los desmovilizados estarían detrás del aumento de los hurtos (2.800 casos más por año) y homicidios (300 casos más por año) entre 2006 y 2009.

La Secretaria sugiere que los desmovilizados podrían participar en el 1% de los homicidios en la ciudad, porcentaje muy superior al que sugieren los datos expuestos anteriormente. Aunque cree que su cálculo no es "ni mucho ni poco", piensa que es un preocupante signo de advertencia.

3.5 Motivos de reincidencia

Aunque la información existente no apoya la hipótesis de que el impacto de los desmovilizados en la seguridad de Bogotá haya sido muy grande, no se puede desconocer que algunos ex combatientes en la ciudad han reincidido en la ilegalidad, y así han contribuido a la inseguridad urbana. Entonces vale la pena preguntarse: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre los desmovilizados y la inseguridad?

Existen varios motivos por los que un desmovilizado puede reincidir en la ilegalidad:

i. Contextos de inseguridad

Según datos facilitados por la ACR relativos a un estudio interno, usando una base de datos de 3.083 desmovilizados considerados en alto riesgo de reincidencia, se muestra una correlación entre, por un lado, la ubicación geográfica de ex combatientes en zonas de presencia de bandas y grupos armados, y por el otro la situación de desempleo a la que se enfrentan.

a. Inseguridad física
La manera más evidente por la cual la inseguridad en el barrio o la ciudad empuja al desmovilizado al uso de la violencia es que, cuando hay problemas de seguridad, los desmovilizados buscan armarse o defenderse, incrementándose las posibilidades de que reincidan.

Adicionalmente, los problemas de seguridad agravan la situación económica, lo cual aumenta el riesgo de reincidencia. "Cuando hay problemas de seguridad, los participantes dejan de asistir a la ruta de reintegración y de recibir dinero, y se ponen en riesgo de reincidencia". Además, "los desmovilizados tienen una percepción magnificada de sus riesgos de seguridad: los ex guerrilleros creen que los persiguen sus ex compañeros, y los ex paramilitares temen a las bandas criminales"[185].

¿Qué se está haciendo en Bogotá para minimizar el impacto negativo de los contextos de inseguridad en los desmovilizados? Ellos pueden solicitar un estudio de riesgo de seguridad por parte de la Policía, pero en ciudades como Bogotá el proceso es muy lento por la alta demanda. "La Policía no puede responder con celeridad", como señaló una funcionaria de la ACR.

El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó la muerte de 23 desmovilizados en Bogotá entre 2004 y 2009. En un caso el presunto culpable reportado es un amigo, en otro caso es un conocido de la víctima, y en 21 casos más el autor es desconocido. En el mismo período, el Instituto reporta un total de 9.140 homicidios en Bogotá, por lo que los desmovilizados representarían el 0,25% de víctimas.[186] Es decir, de cada 397 víctimas, una era un desmovilizado. La Policía Nacional reporta sin embargo una cifra de 65 muertes de desmovilizados hasta 2009, lo que señalaría que una de cada 140 víctimas de homicidio entre 2004 y 2009 era un

[184] Op. Cit., Programa de Atención al Proceso de Desmovilización en Bogotá D.C., 2009, p. 25.
[185] Entrevista CITpax a funcionaria de la ACR, 2010.
[186] La Alcaldía de Bogotá reporta 9.130 casos de homicidio en ese mismo período.

desmovilizado.[187] Como tercera fuente de información, el Centro de Estudios y Análisis en Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá reporta 48 casos entre 2006 y 2009, es decir, que uno de cada 190 casos de homicidio en este período la víctima había sido un desmovilizado (ver Cuadro n° 5).[188]

Cuadro n° 5. Desmovilizados víctimas de homicidio en Bogota (2006-2009)

Año	Casos
2006	13
2007	16
2008	10
2009	9

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, CEACSC

Los desmovilizados se quejan de la inseguridad en Bogotá. "En la ciudad uno corre peligro por todo: delincuencia común, accidentes, robos. Donde vivimos la inseguridad está alta", aseguró uno de ellos en las entrevistas realizadas por el Área. Los profesionales de la ACR encargados de trabajar con los participantes del proceso de reintegración en Bogotá explicaron en entrevista que existen siete localidades donde los contextos aparecen como más críticos: Santafé, Mártires, Candelaria, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usaquén y Bosa. Además, preocupan en particular lugares donde operan bandas criminales y redes ilegales como Caracolí, Altos de Cazucá, Palermo, Tres Esquinas y Corabastos.

En Ciudad Bolívar, los sectores de Ismael Perdomo, Jerusalén, Lucero, El Tesoro y Monte Blanco cuentan con presencia de bandas criminales ligadas a antiguas estructuras paramilitares, y sufren por tanto de problemas de reclutamiento ilegal.[189] Esta localidad, sin embargo, es una de las más atractivas para el desmovilizado que acaba de llegar a la ciudad, debido al bajo costo de vida comparado con otros sectores. De ahí que sea la localidad con mayor número de ex combatientes, según cálculos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. "Primero el desmovilizado va a vivir a los cerros altos, que es más barato y se parece más al campo, pero es más peligroso y ofrece menor anonimato. Con el tiempo va bajándose, hasta que se va de Ciudad Bolívar", explica una profesional de la ACR de la zona. Pronto los desmovilizados se enfrentan a los problemas de una urbanística desorganizada en la localidad, donde hay pocos servicios bancarios o trabajos formales. "Ha habido desmovilizados en bandas de extorsionistas, en pandillas de jóvenes que se dedican al atraco, y al microtráfico de drogas y que valoran el manejo de armas de los desmovilizados. También en bandas que cobraban peajes a buses, dos mil pesos por viaje, en el sector de Paraíso", cuenta un desmovilizado. Otra participante del proceso de reintegración es crítica con sus compañeros en Ciudad Bolívar: "Más de tres o cuatro (desmovilizados) en una casa no es bueno. Forman un grupo, forman una riña y después hay pandillas".

La segunda localidad con mayor número de desmovilizados es Kennedy. Expertos en temas de seguridad urbana denuncian que allí hay presencia de grupos armados ilegales, pandillas y delincuencia organizada, particularmente en Patio Bonito, Las Margaritas, Corabastos, Kennedy Central y los límites con Bosa.[190] Según explica un desmovilizado, "en El Amparo y Corabastos hubo desmovilizados del M-19 en cooperativas, luego las FARC entraron, y luego los paramilitares. En la zona se creó un "cartuchito" [área] de microtráfico donde Cuchillo tenía gente organizada". El alto número de desmovilizados que vive en la zona se expone a un contexto en el que a diario se combina el trabajo legal con el ilegal de tráfico de armas, drogas y lavado de activos.

La tercera zona de mayor concentración de desmovilizados es la de Rafael Uribe Uribe y el Eje Centro. Según señalaba un desmovilizado en entrevista, "los que tienen problemas de consumo de drogas tienden a ir al centro de la ciudad, y algunos habitan en zonas como Santafé, Mártires y Candelaria". Entre los desmovilizados consultados corre el rumor de que en la localidad de Santafé hay un "boom" de construcción de edificios y locales con dinero de ex paramilitares, de Águilas Negras y de la mafia, sectores que aprecian el conocimiento de los desmovilizados en el manejo de armas y los contratan como servicio de seguridad. Según uno de ellos, unos pocos desmovilizados tienen negocios propios como burdeles y bares, mientras otros prestan seguridad

[187] Entrevista CITpax a la Mayor Beatriz Bejarano, oficina de enlace en temas de desmovilización de la Policía Nacional, 22 de noviembre de 2010.
[188] La Alcaldía de Bogotá registra un total de 7.543 homicidios en ese período.
[189] Fernando Ávila y Magda P. Núñez, "Bogotá cercada", Arcanos 15, abril de 2010, pp. 46-63.
[190] Op. Cit. Fernando Ávila y Magda P. Núñez, 2010.

en este tipo de establecimientos. "Hay mucha población flotante de desmovilizados que no vive en la zona, pero llega a trabajar en comercio informal legal y en microtráfico", comenta.

Otro desmovilizado denuncia que, en Rafael Uribe Uribe, el comercio formal se habría reunido con desmovilizados a proponerles trabajos de seguridad. "A unos comerciantes les robaban la caja en las noches. Hasta que unos pensionados de la Policía reunieron una plata y le ofrecieron a unos desmovilizados: acaben con tres hijueputas que nos tienen azotados. Algunos aceptan esas ofertas", dice.

Además de escuchar ofertas ilegales, algunos desmovilizados en el sector también actuarían por cuenta propia. "En San Cristóbal y Santa Rosa a unos compañeros les decían el trío dinámico: uno de AUC, uno de ELN y otro de FARC", cuenta un desmovilizado. "En la peladez [juventud], iban al "Bronx" a alquilar armas, atracaban, y luego las devolvían". Otro de ellos comenta que "en Santafé, desmovilizados consiguen trabajos de segunda, cuidando carros o en microtráfico. Muchos trabajan en el día, y luego compran droga en el "Bronx" que la venden entre diez de la noche y una de la mañana".

La combinación del consumo y tráfico de drogas hace de esta zona un contexto de alto riesgo para la reincidencia de los desmovilizados. "Calculamos unos cien a ciento veinte desmovilizados en la mendicidad. Hay veinte que trabajan en el "Bronx"", explica el coordinador del Programa de Atención al desmovilizado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En su opinión, la falta de acompañamiento estatal y familiar hace de algunos desmovilizados un sector social particularmente vulnerable. "Es gente a la que se les dio plata y se le dejó sola", dice.

Profesionales de ACR consultados reconocen que muchos desmovilizados llegan a Bogotá a vivir a los barrios más pobres, más baratos y más expuestos al crimen. "Las redes de familias, amigos y conocidos en la delincuencia ponen a los desmovilizados en peligro de reincidencia", asegura una persona de la Unidad de Reintegración Económica de ACR. "Eso los enfrenta al mercado de la ilegalidad en el barrio o la ciudad", complementa otro profesional de la Oficina de Asesoría Jurídica. "Además, los desmovilizados visitan y viven en lugares de riesgo de reclutamiento", agrega.

¿Están volviendo los desmovilizados de Bogotá a los grupos armados? "Hay compañeros desmovilizados hace tres y cuatro años que se están yendo otra vez a la guerra", asegura un desmovilizado entrevistado. Sin embargo, para el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los ex combatientes "veteranos" o mandos medios no serían tan atractivos para las bandas criminales existentes, pero sí para las nuevas. "Si la organización viene de atrás, no necesitan mandos medios. Prefieren subir a un subalterno. Quizás haya mandos medios en nuevos grupos, pero no en los viejos".

En ese contexto, son los jóvenes quienes aparecen como más vulnerables al reclutamiento, según la Unidad de Fidelización de la ACR. "Las milicias están reclutando jóvenes en los colegios", corrobora un desmovilizado. "Los jóvenes no piensan en el día de mañana, se tiran el dinero. Y terminan en otras bandas".

b. Desempleo

La necesidad de encontrar fuentes de ingresos económicos puede llevar a algunos desmovilizados a participar de actividades ilegales en Bogotá. Sin embargo, el empleo por sí solo no garantiza que el ex combatiente no esté tentado a delinquir, ya que alrededor de 35.000 tenían de hecho algún tipo de empleo antes de ingresar al grupo armado, tal y como se pudo constatar durante la elaboración de los perfiles de desmovilizados en Colombia para la base de datos SAME, gestionada por la Organización Internacional para las Migraciones.

"Algunos se mantienen atracando, o mendigando. Dicen: "yo no nací para trabajar, sino para conseguirme la plata fácil"", comentó un desmovilizado en entrevista. Para la ACR, en el caso de muchos desmovilizados, "el gusto por el trabajo y el esfuerzo no fue inculcado en la familia. El ejemplo familiar no existe". Adicionalmente, hay un poderoso desincentivo: tener empleo hace al desmovilizado más localizable, y lo pone en riesgo de inseguridad/reincidencia.

Quienes prefieren no trabajar representan un extremo del problema. En el otro extremo, se encuentran quienes desean trabajar pero se topan con el problema estructural de desempleo formal que afecta a la ciudad, y que restringe las opciones de ingreso económico a los desmovilizados. Como agravante, su pasado y condición actual hacen al desmovilizado menos competitivo a la hora de buscar un empleo. "El empleador siente que corre riesgo al emplear al desmovilizado", reconoce la ACR. Y aún superando esa percepción

negativa, en muchos casos el desmovilizado no está plenamente calificado para la oferta. "La educación a la que tienen acceso no es la más competitiva", opina uno de los expertos de la OIM.

La ACR no tiene un registro actualizado de cuáles desmovilizados están empleados y cuáles no, o de cuáles están en la informalidad. "La ruta de reintegración no da resultados en empleo", se queja un desmovilizado. Otro, que ha se ha estabilizado laboralmente como maestro de obra en construcción y contratista, reconoce las bondades del programa de ACR, pero igual comenta que "no aporta mucho económicamente". Pese a estas quejas, los mismos desmovilizados se encargan en ocasiones de desperdiciar las ocasiones que se presentan. "Cupos de empleo se pierden porque el desmovilizado no asiste a las citas, o tiene mala pinta, o consume alcohol o drogas", explica la ACR.

En medio del espectro que cubre problemas de motivación y de oferta, se encuentra el obstáculo de que los empleos disponibles no siempre convergen con las capacidades y expectativas de los desmovilizados. "El empleo no es atractivo para los desmovilizados cuando la oferta es de aseo, o de empleados domésticos", explica una psicóloga de ACR. "Muchos saben de cirugía y enfermería, pero al no tener validación no pueden ejercer", añade. Según su experiencia, los desmovilizados en Bogotá se emplean usualmente en construcción, como vendedores ambulantes, peluquería en el caso de las mujeres, y en planes de negocio propios como café Internet, limpieza, panadería, confección y tiendas.

Respecto al resto del país, esa psicóloga considera que en Bogotá existe la ventaja de que es posible encontrar trabajo más rápidamente. "El tiempo de enganche puede ser uno o dos meses", dice. "En Arauca o Yopal dependen de tiempos de cosechas, o de desplazarse horas para ir al sitio de trabajo, que son fincas. En Pereira muchos trabajan en minería. En otros lugares fuera de Bogotá no hay tanta diversidad de posibilidades".

Como señala uno de los expertos de la OIM, es más difícil para un desmovilizado conseguir un trabajo estable en Bogotá que en otras partes del país, ya que "ser competitivo es más difícil". Esta percepción es compartida por algunos profesionales de la ACR, que reconocen que en la ciudad se piden requisitos de calificación escolar y pasado judicial que se convierten en trabas para el empleo del desmovilizado.

Aunque los desmovilizados en Bogotá pueden acceder a una mayor diversidad de empleos, es claro que se dificulta la consecución de uno que pueda llenar sus expectativas económicas y vocacionales al punto de hacerle descartar la participación en actividades ilegales. Este problema de ingresos redunda en el de seguridad, en tanto sus bajos ingresos económicos los llevan a residir en zonas de alto riesgo.

Al ser problemas sistémicos de toda la ciudad, no es sensato pensar que una decisión de política pública en Bogotá pueda en el corto plazo eliminar los factores de inseguridad y desempleo que afectan a los desmovilizados. Sin embargo, sí sería posible adoptar medidas que atenúen el impacto de estos factores. En el caso de la inseguridad, valdría la pena explorar medidas que físicamente alejen a los desmovilizados de las zonas de alto riesgo. En el caso del empleo, dado que no garantiza por sí solo que el desmovilizado se abstenga de participar en actividades ilegales, es necesario atar las oportunidades disponibles a un proyecto de vida que lo motive a la legalidad, tal como familia, hijos, vivienda o una empresa propia.

ii. Inseguridad jurídica

Mientras la inseguridad y el desempleo son factores que afectan al conjunto de la ciudad, los desmovilizados enfrentan además problemas específicos o agravados para su perfil poblacional. Y sus principales problemas sectoriales son la inseguridad jurídica y su pasado en el grupo armado.

"El principal tema es la seguridad jurídica", indicaba el jefe de la Unidad de la Justicia y Paz de la Fiscalía en 2010. "Cuando se les quita el principio de oportunidad, todos entran en pánico, y dicen, "me vuelvo a la delincuencia"". Muchos desmovilizados en Bogotá, como en todo el país, han tenido que enfrentar órdenes de captura por hechos anteriores a la desmovilización. "Hay mandos paras a los que los están obligando a que paguen", explica un desmovilizado. "Si hay orden de captura, la gente se va (para los grupos armados). Pagar cárcel es lo más tenebroso para ellos", dice.

Además de este problema jurídico, la historia de guerra de cada desmovilizado afecta las posibilidades de que delinca de nuevo en el futuro. Algunos desmovilizados consultados hablan con naturalidad de actividades como el cultivo, tráfico y expendio de droga, en términos que las sugieren como legítimas para ellos. "Algunos no quieren que su hijos sigan en la guerra, pero conservan sus ideas y pensamientos guerreristas". Algunos

desmovilizados reconocen además que muchos de sus compañeros traen vicios de su vida de guerra que afectan su comportamiento en la sociedad. "Algunos viven de un secuestro, de un robo. "Si allá lo hacíamos, acá lo seguimos haciendo", explica uno de ellos. Otro más sentencia: "De donde vienen, vienen con eso, y es difícil dejar de ser lo que eran, y siguen en lo mismo".

Aparte de la inseguridad jurídica y su historia de guerra, hay otros factores sectoriales mencionados por los desmovilizados que podrían ayudar a explicar sus riesgos de reincidencia: problemas de arraigo, participación en operativos militares, estigma social, presión económica, y falta de oportunidades de participación social o política. Hacen falta estudios sistemáticos que revelen cómo se relacionan estos factores con los antes mencionados.

iii. Situación personal

A pesar de que existen factores sistémicos y sectoriales que afectan a los desmovilizados de manera colectiva, a nivel individual hay desmovilizados que deciden volver a delinquir, y otros que deciden no hacerlo. ¿Por qué?

Una desmovilizada entrevistada reconoció que en algún momento pensó en regresar a las armas. "Yo porque ya tengo una bebé. Un día hace tiempo lo pensé, cuando estaba sola. Ahora no. Así me vaya mal, ante todo está mi hija", dice. Sus compañeros ofrecen testimonios sobre casos similares. "Cuchillo les ofrecía y decían que no, que mi hija, que yo me la rebusco de otra manera", cuenta uno de ellos. "Tengo que dar buen ejemplo a mis hijos. Como me toque. No quiero que caigan en lo mismo", dice otro. "El proyecto de vida con la familia es la diferencia. El acompañamiento humano es crucial", afirma otro desmovilizado. "Cuando hay hijos, prefieren no delinquir", agrega.

Sin embargo, psicólogos de la ACR advierten que la familia puede motivar tanto a que un individuo vuelva a delinquir, como a que se abstenga de hacerlo. ¿En qué casos ocurre lo primero? "La familia es un factor protector cuando el desmovilizado quiere reencontrase con la familia extensa, quiere hacer una familia nuclear o reencontrarse con la que dejó al irse", explican. "El apoyo de la esposa es clave para el desmovilizado, sobre todo cuando hay problemas de consumo de drogas y alcohol". Por el contrario, la familia es un factor de riesgo "cuando los desmovilizados se vincularon al grupo por herencia, es decir, sus hermanos, tíos, etc. son o fueron parte de grupos. También cuando hubo violencia intrafamiliar. Y también cuando deben sostener una familia y no tienen trabajo".

Un estudio de familias de desmovilizados en Bogotá, Yopal, Arauca, Pasto y Cúcuta revela que hay recurrencia de violencia intrafamiliar, en especial de la mujer a los niños, y entre cónyuges. Sorprendentemente la fuente de violencia más frecuente es el cónyuge no desmovilizado. "En el contexto cultural de Colombia hay abuso físico y sexual, y eso no es ajeno a las familias de desmovilizados".

Además de la familia, en la ACR hay sospechas de que el consumo de drogas y alcohol puede ayudar a explicar por qué algunos individuos reinciden y otros no, aunque aún no hay estudios que las sustenten, o que sugieran que el problema es mayor que para el conjunto de los colombianos. La ACR además se encuentra indagando por factores psicológicos que ayuden a explicar la reincidencia. Aunque aún no hay resultados concretos, un sondeo preliminar ha encontrado altos niveles de estrés postraumático entre los desmovilizados. Es importante anotar que todavía no es posible establecer una relación entre estos niveles de estrés y las posibilidades de delinquir. De igual manera, los sondeos preliminares sugieren que no hay grandes proporciones de perfiles psicóticos o antisociales, por lo que en general los desmovilizados estarían potencialmente en iguales condiciones que un ciudadano corriente de mantenerse al margen de la ilegalidad.

3.6 Conclusiones

¿Hay alguna relación entre el aumento en la percepción de inseguridad, la mayor frecuencia de delitos reportados y la llegada de ex combatientes a vivir en Bogotá? Los datos de los que disponen hasta hoy las principales instituciones del Estado no permiten dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, el análisis realizado para este informe permite concluir que no hay información que sustente de manera razonable la hipótesis según la cual la presencia de desmovilizados en Bogotá permite explicar de manera significativa el incremento en los índices de inseguridad, entendidos como la percepción de inseguridad y los delitos registrados por las autoridades. No obstante, esta misma información también señala que hay desmovilizados involucrados en actividades ilegales en la ciudad.

Tal panorama implica que los defensores de la hipótesis antes mencionada, entre quienes se incluyen las autoridades locales de Bogotá, están en mora de recabar datos de mayor calidad que permitan validarla, y así depender menos de percepciones subjetivas, valiosas pero insuficientes a la hora de diseñar políticas públicas en materia de seguridad.

Adicionalmente, es posible que los desmovilizados participen en delitos que no reportan un aumento sustancial en el último quinquenio, o que no son objeto de un seguimiento tan minucioso como los delitos de alto impacto ciudadano mencionados en la primera parte de este texto. Pero con la información disponible, el análisis aquí presentado sugiere que los desmovilizados que han reincidido en la ilegalidad en Bogotá se han integrado a contextos de ilegalidad ya existentes, más no han provocado ellos mismos un aumento significativo en la inseguridad urbana.

Para quebrar la relación desmovilizados-inseguridad, Bogotá cuenta con la ventaja de un programa estatal complementario que podría enfocarse hacía los factores críticos mencionados. Además, la ciudad cuenta con cinco características que favorecen el trabajo en estos aspectos.

Primero, ofrece mayores posibilidades de anonimato, y por tanto una mejor percepción subjetiva de seguridad de parte de los desmovilizados. "Nadie sabe que soy desmovilizado en el barrio o en la empresa donde trabajo", comentó a este respecto uno de los participantes del proceso de reintegración entrevistado por el Área.

Segundo, la mayoría de desmovilizados en la ciudad son ex guerrilleros, quienes tenderían menos al crimen que los ex paramilitares. Esta es una percepción en la que coinciden funcionarios de la OIM, la ACR, la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y los mismos desmovilizados. Para uno de los expertos de la OIM, "la militancia de muchos ex paramilitares estuvo marcada por la economía, mientras la guerrilla no paga". Según explica, "los ex guerrilleros son más campesinos y más escépticos de los vicios urbanos, y están acostumbrados al sacrificio del trabajo y la vida austera". En cambio, los ex paramilitares vendrían de cascos urbanos, con un modo de vida claramente distinto a la rural, que incluye el acceso a otro tipo de servicios, tanto lícitos como ilícitos. Uno de los profesionales de ACR que trabaja en Bogotá asegura que es más fácil trabajar con ex guerrilleros "porque realmente quieren cambiar de vida". En palabras del jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, "el guerrillero tiende a ser más dócil". El análisis de los casos de reincidencia en la ilegalidad lleva al Programa de Atención al desmovilizado de la Alcaldía de Bogotá a concluir que "hay una mayor tendencia de participación en delitos e infracciones por parte de ex combatientes de grupos paramilitares".[191] Los desmovilizados de guerrilla perciben lo mismo. "La guerrilla no da plata para una cantina", dice uno. Otra explica que "en las FARC no se puede tomar vicio ni nada, porque se sabía lo que pasaba. Ellos (los paras) en una pelea se drogan, hacen cosas. En las FARC, algunos hacían maldades, pero si un superior se daba cuenta, los fusilaban. No es permitido." Aunque todas las fuentes creen que hay desmovilizados de guerrillas involucrados en actividades ilegales en Bogotá, en general también coinciden en que buscan una vida más anónima, y están menos dispuestos a ponerse en riesgo en actividades ilegales.

Tercero, Bogotá tiene una economía más desarrollada que otras regiones del país, en la que la informalidad aparece como solución temporal para obtener un empleo. En palabras de un desmovilizado, "la oportunidad de rebusque genera arraigo".

Cuarto, las bandas criminales no tienen presencia masiva sino localizada, por lo que las ofertas de trabajos ilegales vienen de otras partes del país. Por eso, es plausible que quienes delinquen muchas veces lo hagan fuera de la ciudad o de Cundinamarca. "A veces se pierden dos tres semanas. Se van a Villavicencio o incluso a la Costa, y Santa Marta", comenta una profesional de ACR sobre los participantes del proceso de reintegración en Bogotá. "Cuchillo tenía discotecas en "Villavo", donde también hay microtráfico, y se llevaba desmovilizados para que administraran unos días y les pagaba tres millones de pesos", cuenta un desmovilizado.

Y quinto, algunos desmovilizados coinciden en que la ciudad ofrece muchas ventajas. "El entorno se vuelve seguro, mimetiza a la persona, y la gente se rebusca en la oferta local y distrital", dice uno de ellos. "El rolo [bogotano] es frío, hay sobrepoblación y deficiencias de cobertura. Pero con el tiempo, la gente se va amañando en Bogotá". Aunque para algunos la ciudad puede ser un lugar de paso, es un hecho de que miles de desmovilizados llegaron para quedarse, y su impacto, positivo y/o negativo, está aún por medirse de manera adecuada.

[191] Op. Cit., Programa de Atención al Proceso de Desmovilización en Bogotá D.C. 2009, p. 25.

Por último, señalar que son cinco los factores principales que abren las puertas de la ilegalidad a los desmovilizados en Bogotá: la falta de garantías jurídicas, la cultura de la ilegalidad, la falta de proyecto de vida (como una familia, hijos, o vivienda), el desempleo, y los contextos de inseguridad.

En particular, un proyecto de vida y un empleo por sí solos no tendrían gran impacto en la probabilidad de que los desmovilizados no delincan. Sin embargo, el análisis sustenta la hipótesis de que cuando ambos están presentes las probabilidades de reincidencia deberían reducirse. Por el contrario, si un desmovilizado tiene empleo pero no un proyecto de vida, o si tiene un proyecto de vida pero no un empleo, se generarían incentivos perversos para volver a delinquir.

La relación entre los cinco factores entre sí hace necesaria una cuidadosa planificación de políticas públicas para desmovilizados que los aborden simultáneamente y de manera armónica. Por demás, es necesario un estudio más profundo sobre cómo los cinco factores principales se ven a su vez afectados por otros mencionados, además del consumo de droga y alcohol y del estrés post-traumático.

III. Resultados, tendencias y diferencias

Sobre la magnitud del fenómeno

Con respecto a la magnitud del fenómeno y como lo muestran los tres estudios de caso anteriores, el principal resultado de la investigación es que no existe una relación evidente ni directa entre la presencia de desmovilizados en la ciudades y los niveles de inseguridad en esas ciudades. Si bien parece existir cierta relación en Montería, es poco evidente en Villavicencio y en Bogotá. Los contextos diferentes y las particularidades de esas ciudades explican la heterogeneidad de situaciones.

Dicho eso, ¿cómo explicar entonces la diferencia entre los niveles de percepción con respecto a la inseguridad y los resultados obtenidos a partir de las cifras oficiales de las diferentes entidades responsables?

Una primera respuesta deriva de que la población tiende a tener una percepción distorsionada sobre los desmovilizados como causa de inseguridad en comparación con la realidad, habiéndose identificado varios factores que contribuyen a ello.

El primer factor tiene que ver con el desconocimiento por parte de la población sobre quiénes son los desmovilizados y su relación, o no, con el aumento de inseguridad. En efecto, muchos desmovilizados tratan de esconder su identidad como tales y muchas veces sostienen que "nadie sabe" que son desmovilizados. Sin embargo, si bien los pobladores no identifican con facilidad quiénes son los ex combatientes que podrían estar habitando sus barrios, suelen afirmar con certeza que muchos de ellos han vuelto a reincidir. Es entonces posible que la percepción de los miembros de la comunidad sea poco acertada pues conocen sólo a los desmovilizados que se revelan como tal o a personas que se autodenominan desmovilizados "para inspirar miedo" pero no necesariamente lo son.

El segundo factor está relacionado con los prejuicios de la población en general al asociar a los desmovilizados con los grupos armados ilegales activos o con la delincuencia común. Así, cuando hay presencia de esos grupos en los barrios marginales, los pobladores muchas veces asumen que se trata de desmovilizados. A la pregunta de cuantos años tienen los miembros de estos grupos responden repetidamente que son "jóvenes, de 15 a 30 años". Ahí se revela una confusión, pues los desmovilizados de las Autodefensas no pueden tener menos de 22 años (visto que la última desmovilización tuvo lugar en 2006 y muy pocos menores de edad han sido desmovilizados). Esa asimilación genera una distorsión que a su vez conduce a una exageración, y esta confusión hace que la magnitud del fenómeno de reincidencia aparente una mayor dimensión en la percepción de los pobladores. En ciudades donde hay una presencia importante de moto-taxistas, como en la Costa Caribe, existe por ejemplo todo un imaginario en el cual la población tiende a pensar que todos son desmovilizados y que muchos ejercen actividades ilegales al mismo tiempo que su actividad de moto-taxista.

El tercer factor tiene que ver con la visibilidad particular que tienen o generan los desmovilizados reincidentes. Cuando un desmovilizado lidera un grupo criminal, es posible que los pobladores consideren que todos los integrantes del grupo son desmovilizados aunque no conozcan la identidad de los subalternos. Al liderar u ocupar funciones estratégicas en las estructuras delincuenciales, sus capturas tienden también a ser más visibles

y con un impacto mayor que con delincuentes comunes, lo que lleva generalmente a la población a sobredimensionar esas actuaciones delincuenciales.

En general, es apreciable que la ciudadanía muestra cautelas frente a los desmovilizados. Aunque no es un tema común hablar de los desmovilizados, cuando se indaga sobre sus percepciones, es evidente que existen reticencias frente a su presencia en las comunidades. Por ejemplo, muchas personas se escandalizaron cuando surgieron los albergues de desmovilizados. En muchas regiones del país, están estigmatizados, existiendo miedo hacia ellos[192], no queriendo las empresas darles trabajo[193], y realizándose una asociación implícita entre el desmovilizado y la delincuencia.

En resumen, esas distorsiones explicarían por qué algunos miembros de la sociedad tienen una visión exagerada del fenómeno de reincidencia y por consiguiente de la participación real de los desmovilizados sobre la inseguridad de la ciudad.

Dicho eso, hay que diferenciar aquí entre ciudades y entre tipos de delito. En Villavicencio por ejemplo, y con respecto a ciertos tipos de delitos como los hurtos que se observan con frecuencia en la ciudad, los desmovilizados no son vistos como actores principales. Si bien la ciudadanía habla constantemente sobre el aumento de la inseguridad en la ciudad, la percepción de los desmovilizados como agentes causales de ese fenómeno, no es un tema prioritario en esas discusiones[194]. Por ejemplo, para algunas instituciones y varias organizaciones no gubernamentales, si bien ha sido evidente una mayor inseguridad en la ciudad, la participación de los desmovilizados reincidentes en ese fenómeno no es la causa principal.

Una segunda respuesta para explicar la diferencia entre la incidencia de los desmovilizados sobre la (in)seguridad en las ciudades estudiadas con base en las cifras existentes aportadas por instituciones hasta diciembre de 2010 y la incidencia de los desmovilizados sobre la percepción de inseguridad en la ciudad, tiene que ver con la dificultad de medir de manera rigurosa la magnitud de la participación de los desmovilizados en actividades ilegales a partir de las cifras existentes.[195]

Existen primero, y como ya lo señalamos, otras variables que pueden explicar el incremento de inseguridad en las ciudades. Algunas son de tipo estructural o sistémico y tienen que ver con aspectos socio económicos (pobreza, desempleo, informalidad) o políticos (poca presencia de fuerza armada, policial y judicial). Otras explicaciones se relacionan directamente con las consecuencias del proceso de desmovilización en sí mismo, y no tanto de la intervención de sus actores considerados individualmente. Como se ha señalado en varios informes[196], la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 no fue completa. Los que no se desmovilizaron siguieron con sus actividades ilegales generadores de inseguridad, y por lo tanto, en algunas regiones, los niveles de inseguridad y de percepción de inseguridad siguieron altos no tanto por culpa de los desmovilizados, sino más bien por la permanencia o continuación de delitos.

Segundo, la dificultad para evaluar de manera precisa la participación de los desmovilizados en actividades ilegales se debe en particular a la precariedad de las bases de datos y de los instrumentos estadísticos. Las cifras disponibles no son las más confiables porque existe a la vez un sub-registro y un sobre-registro de los desmovilizados reincidentes.

---

192 Aunque según varias fuentes cercanas a los procesos de desmovilización y reintegración, existe en algunos sectores una mayor sensación de prevención hacia los ex guerrilleros que hacia los ex integrantes de las Autodefensas.

193 Además, debido a que muchas empresas fueron duramente azotadas por grupos armados ilegales, muchas puertas laborales han sido cerradas para vincular a desmovilizados.

194 Entrevista CITpax en Bogotá, 28 de octubre de 2010.

195 Según la ACR, a junio de 2011 existen nuevas cifras que permitirían entender mejor el fenómeno.

196 Véase por ejemplo: CNRR, *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?,* Bogotá, 2007. Fundación Seguridad & Democracia, *Los grupos armados emergentes en Colombia*, Bogotá, mayo de 2008. International Crisis Group, *Colombia's New Armed Groups*, Latin America Report n°20, mayo de 2007. CERAC, "Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones", Bogotá, 2009. D. Aponte y J. Restrepo (edits.), "Guerra y violencias en Colombia", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, disponible en: http://www.cerac.org.co/libro/10_Neoparamilitarismo_en_Colombia.pdf. A. Arias y M. Romero, "A diez años del inicio del Plan Colombia: Los herederos de las AUC, la geografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles", 2011, disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf, *Décimo quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA),* disponible en: http://www.mapp-oea.net/documentos/ultimo_informe.pdf.

Sub-registro

Con respecto al sub-registro, la primera razón deriva de la dificultad de tener cifras precisas con respecto al número de desmovilizados reincidentes en las estructuras armadas ilegales post-desmovilización. Por un lado, porque no existen datos muy precisos sobre la proporción de los que nunca se desmovilizaron y de los que se desmovilizaron pero volvieron a tomar las armas; sólo sobre la proporción de desmovilizados capturados perteneciendo a esas estructuras, y que según cálculos oficiales, serían entre 12 y 17%.[197] Por el otro, porque existen diferentes modalidades de participación en las bandas emergentes, y muchos de sus integrantes no trabajan necesariamente a tiempo completo para esas estructuras. Por ejemplo, algunos desmovilizados moto-taxistas pueden prestar servicios de informantes o de sicarios de manera esporádica para cualquier estructura, sin necesariamente ser miembros orgánicos de ella. También, algunos desmovilizados que están en proceso de reintegración pueden formar parte o trabajar al mismo tiempo para esas estructuras.

La segunda explicación del sub-registro tiene que ver con cambios surtidos a nivel nacional en el plano jurídico. Hace 5 años, entró en vigor el nuevo sistema acusatorio penal y con él se hizo más complicado capturar y judicializar a los delincuentes – lo que explicaría, *inter alia,* que haya pocos desmovilizados judicializados en comparación con el número de capturados. Según varias fuentes, la implementación del nuevo sistema penal acusatorio ha surtido efectos sobre las cifras de delincuencia en las ciudades. Aunque en su origen fue concebido como un nuevo modelo de justicia ajustado a estándares internacionales, se ha cuestionado este sistema, pues dificulta en ocasiones la judicialización de los presuntos implicados en actividades ilegales al ser puestos en libertad sin haber podido ser procesados.[198]

Otra explicación es que, en algunas ciudades como Bogotá, sería más difícil ser capturado que en otros municipios, lo que explicaría el nivel relativamente más bajo de desmovilizados reincidentes capturados en la capital colombiana, en comparación con otras ciudades más pequeñas. Ahora bien, resulta casi imposible evaluar ese sub-registro, sobre todo cuando las capturas dependen también de la actuación de la Policía. En algunas ciudades, la policía es más numerosa y más activa que en otras, lo que hace que haya más probabilidades que capturen a un desmovilizado reincidente. Dicho de otra manera, el número de desmovilizados capturados en una ciudad no refleja necesariamente el nivel de reincidencia en esta ciudad, por lo que puede también indicar que la policía sea más efectiva.

Sobre-registro

Si bien muchos factores permiten pensar que son más los desmovilizados reincidentes que los que las cifras oficiales reportan, esas cifras, sin embargo, sufren al mismo tiempo de sobre-registro, al incluir y contabilizar como reincidentes a desmovilizados que no lo son necesariamente.

El principal factor de sobre-registro se debe a que parte de los desmovilizados capturados y condenados incluidos en las bases de datos de las entidades oficiales han sido capturados y condenados por delitos anteriores a su desmovilización. Como ya se mencionó, desafortunadamente no existen datos precisos al respecto, pero si nos basamos en algunos cálculos o estimaciones como los del jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, según el cual podrían ser hasta 50% los desmovilizados capturados y condenados por delitos

[197] En enero de 2010, el general José Roberto León, inspector general de la Policía Nacional de Colombia dio unas cifras de 12% a 13 %. Información disponible en la revista Semana y el portal de Verdad Abierta: www.verdadabierta.com/index.php/conflicto-hoy/50-rearmados/2122-12-por-ciento-delas-bacrim-sondesmovilizados-policia-nacional. El mismo año, el informe del tercer año de gestión del Comandante de la Policía Nacional, aseguraba que entre mayo de 2007 y marzo de 2010, habían sido capturados 783 desmovilizados por la Policía en operativos contra bandas criminales, lo que llevaba esa institución a estimar que los desmovilizados serían el 16.5% de miembros de bandas criminales capturados y dados de baja (cifras, tomadas del Informe del Comandante de la Policía, y cuya fuente es la Dirección de Carabineros). En abril de 2011, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras dijo ante el Senado que en los primeros tres meses del año 2011, el gobierno había adelantado 62 operaciones que resultaron en la captura de 486 integrantes de las estructuras armadas post-desmovilización, de los cuales 86 correspondían a desmovilizados, o sea una proporción de 17% similar a la anterior.

[198] Según una entrevista realizada a un funcionario de la Policía, un sospechoso debe ser capturado en flagrancia y disponiendo de los elementos materiales del crimen en cuestión. La ausencia de alguno de estos elementos invalida la captura, y por ende, debe ser puesto en libertad. Sin embargo, este funcionario manifestó que en algunos casos aun cuando el sospechoso es capturado cumpliendo con estos requisitos, ha sido dejado en libertad de manera casi inmediata por diferentes razones. Entrevista CITpax en Villavicencio, 12 de noviembre de 2010.

anteriores a su desmovilización, el sobre-registro en cuanto a la reincidencia de los desmovilizados sería importante.

El jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía consideraba además que algunas capturas y condenas como las relacionadas con el porte de armas no siempre deberían interpretarse como indicio de reincidencia, sino también, y en algunos casos, como instinto de conservación.[199] Los desmovilizados suelen argumentar que necesitan seguridad y que no sólo el Estado debería usar armas, sino también los ciudadanos que las necesiten. De ahí que cuando se presentan problemas de seguridad, buscan armarse y defenderse, lo que al mismo tiempo incrementa las probabilidades de que reincidan.

Sobre el tipo de delitos cometidos

Podemos diferenciar los delitos según cuatro criterios. Los delitos ligados a la reincidencia en estructuras armadas ilegales y los delitos comunes, por un lado, y los delitos de alto impacto y de bajo impacto por el otro. Ahora bien, los delitos de alto impacto no son realizados exclusivamente por los desmovilizados que reinciden en estructuras armadas ilegales. Un desmovilizado puede cometer un homicidio sin ser re-movilizado, al mismo tiempo que un re-movilizado puede asesinar a una persona, sin que el motivo de ese asesinato tenga que ver con su pertenencia a una estructura ilegal armada. Igualmente, un desmovilizado integrante o que colabora con una estructura armada ilegal también puede ser capturado por un delito menor o de bajo impacto (hurto, porte ilegal de armas…)

Algunos delitos como el micro-tráfico de estupefacientes o la actividad de informante están en lo que podríamos llamar la zona gris entre los delitos de alto y bajo impacto, o de los delitos relacionados con la pertenencia a estructuras armadas ilegales y los de delincuencia común.

Sin embargo, no se ha podido concluir que los desmovilizados reincidan más en delitos de alto o de bajo impacto, o en delitos ligados a estructuras armadas ilegales o delitos de delincuencia común. Si bien se ha podido identificar tendencias especificas a cada ciudad, existen diferencias entre esas ciudades. Mientras en Bogotá los desmovilizados reincidentes participan en actividades de bajo impacto (micro-tráfico, seguridad privada, hurtos), pero no tanto delitos de alto impacto, en Villavicencio y en Montería, los delitos con mayor participación de desmovilizados son el concierto para delinquir, el homicidio y las extorsiones, muchas veces relacionados con la delincuencia organizada.

Sobre los motivos de los desmovilizados a reincidir

Existen varios factores que hacen que un desmovilizado reincida en la ilegalidad: factores sistémicos, o de contexto; factores sectoriales, o propios de su condición de población especial o vulnerable; y factores individuales, que hacen que a título personal un desmovilizado decida o no participar de actividades ilegales.

Con respecto a los factores de contexto, la presencia de contextos de inseguridad, ilegalidad, desempleo y pobreza aparece como una de las principales razones que ha conllevado a la reincidencia de algunos desmovilizados. La mayoría de los desmovilizados residentes en ciudades viven en barrios marginales donde hay inseguridad, ilegalidad y delincuencia. Llegan a este lugar y poco a poco hacen parte de ese mismo contexto, pero con una "ventaja": saben manejar armas, pueden formar grupos, tienen contactos. Por otra parte, aunque la pobreza y el desempleo no son factores automáticos de reincidencia, son indudablemente un terreno fértil que, combinado con otros factores de tipo sectorial e individual, aumentan el riesgo de que un desmovilizado reincida en actividades ilegales.

Por su condición de desmovilizados, también se encuentran en situación de rechazo y estigmatización. Las empresas no quieren darles trabajo, asimilando "desmovilizados" y "delincuencia". Por haberse integrado desde edades tempranas y haber pasado muchos años en los grupos paramilitares, la gran mayoría de los desmovilizados tampoco terminó el bachillerato y no tiene ninguna profesión. Por ser desmovilizado y estar mejor preparados que el delincuente común, reciben amenazas y ofertas para reintegrar o colaborar con las estructuras armadas ilegales post-desmovilización. Por ser desmovilizado, por último, suelen percibir, debido a su historia en la ilegalidad, las actividades ilegales como legales o por lo menos no graves, y como la gran mayoría de ellos no sienten seguridad jurídica frente a la posibilidad de ser investigados por los crímenes cometidos, la actividad delictiva se convierte en el modo de vida más fácil.

[199] Entrevista con el Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, octubre de 2010.

Con respecto a factores individuales finalmente, tanto la situación personal como el perfil psicológico hacen que a título personal un desmovilizado decida o no participar de actividades ilegales.

Algunos estuvieron en desacuerdo con la desmovilización y cuando se desmovilizaron, sin proyecto de vida, sin empleo, sin vivienda y sin estabilidad familiar,[200] o bien decidieron retomar las armas, o bien cayeron en la delincuencia común. A nivel más psicológico, y aunque no tienen un perfil antisocial particular, los desmovilizados muestran en general estrés postraumático. Muchos, por ejemplo, son paranoicos, otros han caído en el consumo de drogas y/o alcohol. Los que cometieron masacres u otros delitos atroces parecen no sentir ningún dolor ni compasión por lo que hicieron, lo que explicaría también que reincidan más fácilmente en delitos graves.

Si a esos factores añadimos las dificultades encontradas en muchos proyectos productivos, la resocialización insuficiente, y la falta de perspectivas concretas e interesantes, se puede entender por qué algunos de los desmovilizados volvieron a la ilegalidad. Así, el hecho de que el nivel de inconformismo con los programas de reintegración parecería más alto en Montería que en los demás casos, podría también explicar el mayor nivel de reincidencia en esta ciudad con comparación a las dos otras ciudades.

Sin embargo, el nivel de reincidencia relativamente más alto en Montería que en Villavicencio o en Bogotá podría también tener otras explicaciones.

Según algunas apreciaciones, por un lado, el nivel relativamente alto de aceptación social de lo ilegal en Córdoba, podría favorecer la eliminación de la responsabilidad social de los delitos, y por lo tanto, convertir más fácilmente lo ilícito en recurso aceptado de sobrevivencia temporal o de alternativa de vida de largo tiempo.

Por otro lado, el fenómeno de reincidencia sería más fuerte en los desmovilizados ex paramilitares que en los desmovilizados ex guerrilleros y esa diferencia también explicaría en parte la tasa más baja de reincidencia en Bogotá y Villavicencio donde hay una proporción más alta de desmovilizados de la guerrilla que en una ciudad como Montería. En Montería es interesante constatar que la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Córdoba, así como la del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), en Sucre en la década de los noventa y experiencias similares en otras partes del país, incluso las desmovilizaciones individuales de miembros de las FARC en los últimos años, no produjeron la reconformación de nuevos grupos ni incrementaron la inseguridad como ha sucedido con la desmovilización de las AUC.

Ahora bien esos factores no son determinantes, pues otros factores también podrían ser contundentes como por ejemplo la mayor oferta laboral a nivel departamental comparado con un departamento como Córdoba, aunque tampoco existe una relación directa entre reincidencia y desempleo.

IV. Balance sobre la presencia de desmovilizados e inseguridad en Villavicencio, Montería y Bogotá

Al investigar si existe una relación entre la presencia de desmovilizados y el aumento de la inseguridad en las ciudades seleccionadas como casos de estudio, nos enfrentamos a una serie de problemas - ausencia de estadísticas precisas, falta de datos sistematizados, efectos de distorsión de la realidad, fenómenos de sub-registro y sobre-registro de los desmovilizados reincidentes, problemas de percepción e información, problemas de interpretación de las cifras – que dificultaron evaluar la magnitud del fenómeno de reincidencia de los desmovilizados en actividades ilegales.

A pesar de esas dificultades, el Área de DDR del Observatorio llegó a la conclusión preliminar que no había información que sustente de manera razonable una relación directa o evidente entre la presencia de los desmovilizados y los niveles de inseguridad en las ciudades. No obstante, esta misma información también señala que hay desmovilizados involucrados en actividades ilegales en esas ciudades.

[200] Los estudios tienden a mostrar que aunque no tengan empleo, los desmovilizados que tienen familia reinciden menos que los que no tienen.

Adicionalmente, que los datos no soporten la afirmación de que los desmovilizados son culpables de los niveles de inseguridad en la ciudad no quiere decir que no puedan serlo en el futuro. Aunque, según algunas apreciaciones, se habría disminuido el número de ex combatientes que estarían delinquiendo "fuertemente", ya que estarían "en la cárcel o muertos",[201] su precaria situación jurídica, las fallas de los programas de reintegración[202], y la consolidación de los grupos armados ilegales podrían finalmente tener un efecto negativo en los que hasta el momento se han negado a reincidir en actividades ilegales. Los desmovilizados, por sus rasgos sicosociales, los tipos de familias con las que conviven, el medio donde han vivido y actuado, la existencia de una gran variedad de modalidades delictivas, la larga tradición de grupos armados ilegales con diferentes ideologías y la impunidad; todo esto sumado al bajo nivel educativo y de formación laboral que poseen, el desempleo, la exclusión social y la estigmatización de que son objeto, así como sus situaciones personales y familiares, tal y como se ha señalado en los casos de estudio del presente informe, pueden propiciar que un número apreciable de ellos retorne a las armas o se dedique, solos o en grupos, a cometer delitos leves y graves.

Finalmente, nuestra investigación llevó tal vez más preguntas que respuestas y en particular esa cuestión central que sigue sin respuesta: ¿hasta qué punto los desmovilizados reincidentes llenan un vacío o generan inseguridad? Dicho de otra manera, ¿Se insertan en la actividad criminal o son ellos que la generan? ¿Y si no fuera ellos, serían otros?

El objetivo de este informe es contribuir a que, más allá del análisis de las cifras, y teniendo en cuenta las conclusiones presentadas, en el proceso de toma de decisiones y el diseño y puesta en marcha de políticas públicas se desarrollen estrategias que minimicen los factores que relacionan a los desmovilizados con la ilegalidad para evitar no sólo su reincidencia sino también para avanzar en la consolidación de condiciones de seguridad para la población.

[201] Entrevistas CITpax en Villavicencio, noviembre de 2010.

[202] Debido a que el objeto del presente informe está enfocado a analizar la hipótesis planteada en la primera parte, relativa a la existencia o no de una relación entre el aumento de seguridad y la presencia de desmovilizados en contextos post-conflicto, se plantea la propuesta de que esta cuestión se profundiza en un estudio específico para poder identificar de manera concreta los obstáculos que se han presentado y elaborar medidas que permitan dar respuestas efectivas,